



UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

**“LA PROTECCIÓN INSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES FAMILIARES
DERIVADAS DEL MATRIMONIO Y DE LA UNIÓN DE HECHO ESTABLE EN EL
CONTEXTO JURÍDICO NICARAGÜENSE”**

Trabajo Investigativo para obtener el Título de Licenciadas en Derecho con
mención económica

Autoras:

Br. María Gabriela Cano Romero

Br. María Elena Romero Arce

Tutor Msc.: Norman Campos

Managua, Nicaragua

Octubre, 2010

Doctora Margine Calderón

Jefa de Departamento de la Facultad de ciencias Jurídicas

Universidad Centroamericana

Estimada Doctora:

A través de la presente y en cumplimiento del reglamento para culminación de estudios de esta universidad, la hago saber que las alumnas María Elena Romero Arce y María Gabriela Cano Romero, han concluido el trabajo investigativo, cuyo título es “ La Protección Institucional de las relaciones familiares derivadas del matrimonio y de la unión de hecho estable en el Contexto Jurídico Nicaragüense” y de acuerdo a las revisiones que he realizado considero que dicho trabajo llena por requisitos para ser defendido en la fecha que la facultad lo disponga. No omito manifestar que las alumnas cumplieron con el calendario de asistencia propuesto para este curso.

Sin más que referirnos me despido deseándole éxitos en sus labores.

Managua, 11 de Octubre del año 2010

Norman Adonis Campos Valerio

Docente y Tutor

DEDICATORIA

Esta Investigación Jurídica en primer lugar se la queremos dedicar a DIOS, porque él ha permitido que concluyamos esta etapa tan importante en nuestras vidas y así seguir adelante y ser mujeres profesionales de buenas costumbres servidoras de él y de la justicia.

En segundo lugar, pero no menos importante, se la queremos dedicar a nuestra FAMILIA, por haber sido ellos quienes nos acompañaron en este largo camino y quienes nos dieron las fuerzas para seguir adelante, cuando creímos caer, gracias por todas sus palabras de aliento.

De manera especial queremos dedicar nuestro trabajo a MARÍA TERESA ARCE, madre y abuela, por ser nuestra inspiración y nuestro pilar, pues no existe nadie quien crea más en nosotras que ella; gracias por todo tu apoyo desde lejos pero que lo sentimos tan cerca.

María Elena Romero Arce

María Gabriela Cano Romero

AGRADECIMIENTOS

A DIOS, gracias por brindarnos sabiduría, y por darnos la oportunidad de terminar nuestros estudios, y nuestra investigación jurídica de la mano de tu compañía.

A NUESTRA FAMILIA, por ser nuestros aliados y compañeros de vida, por ayudarnos en este largo camino de la vida, y por ser quienes nos dieron las palabras de aliento para seguir adelante.

A NUESTROS PROFESORES, por ser nuestros mentores, por habernos enseñado y acompañado a lo largo de estos años.

A NUESTRO TUTOR, gracias por habernos ayudado a lo largo de esta investigación, y por permitir que fuera posible.

A LAS PERSONAS QUE ENTREVISTAMOS, gracias por dedicarnos un poco de su tiempo, y brindarnos información para nuestra investigación jurídica.

A NUESTROS COMPAÑEROS DE CLASES, AMIGOS, gracias por estos años de amistad, por tantas experiencias de vida, que llevaremos consigo y jamás olvidaremos. Gracias por ser nuestros cómplices y aliados, jamás los olvidaremos.

María Elena Romero Arce

María Gabriela Cano Romero

ABREVIATURAS

Art. Artículo.

C Código Civil de la República de Nicaragua.

Cn. Constitución de la República de Nicaragua.

Ct Código de Trabajo de la República de Nicaragua.

Decreto N° 1065 Ley Reguladora de las Relaciones entre madre, padre e hijos.

Decreto N° 862 Ley de Adopción.

INSS Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

MINSA Ministerio Nicaragüense de Salud.

Ley N° 143 Ley de Alimentos.

Ley N° 38 Ley para la disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes.

Ley N°623 Ley de Responsabilidad paterna y materna.

Ley N° 139 Ley que de mayor utilidad a la Institución del Notariado.

Ley N° 290 Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

Ley N° 641 Código Penal de la República de Nicaragua.

Ley N° 423 Ley General de Salud.

Ley N° 351 Ley de Organización del Consejo Nacional de atención y protección integral a la niñez y la adolescencia y la Defensoría de las niñas, niños y adolescentes.

Ley N° 212 Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

LSS Ley Orgánica de Seguridad Social.

RLSS Reglamento de la Ley Orgánica de Seguridad Social.

RLGS Reglamento de la Ley General de Salud.

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVOS	11
OBJETIVO GENERAL.....	11
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
INTRODUCCIÓN.....	12
CAPÍTULO I. ENFOQUE ÉTICO-LEGAL DE LA FAMILIA.....	15
1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.....	15
2. DEFINICIONES.....	18
2.1. Concepto biológico	18
2.2. Concepto sociológico	18
2.3. Concepto jurídico	18
3. CLASES DE FAMILIA	19
4. FUNCIÓN DE LA FAMILIA.....	20
A). Regulación de la relaciones sexuales.....	20
B). La reproducción	20
C). Función económica de la familia	21
D). Función educativa y socializadora.....	22
E). Función afectiva.....	23
5. DERECHO DE FAMILIA	23
5.1. Definiciones	23
5.2. Naturaleza jurídica.....	24
5.3. Autonomía del Derecho de Familia.....	25
5.3.1. Criterio legislativo	25
5.3.2 Criterio científico	26
5.3.3. Criterio didáctico	26
5.3.4. Criterio jurisdiccional	27

5.4. Características del Derecho de Familia	28
5.5. Fuentes.....	29
5.6. Instituciones del Derecho de Familia (Clasificación del Derecho de Familia).....	30
6. PARENTESCO.....	32
6.1. Definiciones	32
a. Concepto biológico	32
b. Concepto jurídico	32
6.2. Clases de parentesco	33
6.2.1. Parentesco por consanguinidad.....	33
6.2.2. Parentesco por afinidad.....	33
6.2.3. Parentesco civil.....	34
6.2.4. Parentesco espiritual	34
6.3. Grados y líneas del parentesco.....	34
6.4. Consecuencias jurídicas del parentesco.....	36
CAPÍTULO II. GENERALIDADES DEL MATRIMONIO EN EL CONTEXTO JURÍDICO NICARAGÜENSE	38
1. BREVE DESARROLLO HISTÓRICO DEL MATRIMONIO EN NICARAGUA.....	38
2. DEFINICIONES.....	41
3. CARACTERÍSTICAS.....	41
4. IMPORTANCIA.....	44
5. CONSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO	44
6. EFECTOS DEL MATRIMONIO.....	50
6.1. Con respecto a los cónyuges.....	50
6.2. Con respecto a los hijos	54
6.3. En cuanto a los bienes.....	56

7. DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL	59
CAPÍTULO III. ASPECTOS GENERALES DE LA UNIÓN DE HECHO ESTABLE	62
1. DEFINICIÓN	62
2. IMPORTANCIA.....	63
3. CARACTERÍSTICAS.....	64
4. REQUISITOS.....	66
5. DERECHOS Y DEBERES.....	69
6. EFECTOS DE LA UNIÓN DE HECHO ESTABLE.....	73
7. IMPEDIMENTOS	74
8. FORMAS DE DISOLUCION DE LA UNION DE HECHO ESTABLE	75
CAPITULO IV. RELACIONES FAMILIARES QUE SE ESTABLECEN EN RAZÓN DEL MATRIMONIO Y LA UNION DE HECHO ESTABLE	76
1. LA FILIACIÓN Y LAS RELACIONES MADRE-PADRE-HIJOS (PATRIA POTESTAD)	76
1.1. Definiciones	76
1.2. Importancia	77
1.3. Características	77
1.4. Clases de filiación	78
1.4.1. Filiación biológica	78
1.4.2. Filiación legal.....	78
1.5. Reconocimiento y legitimación	79
1.5.1. La Legitimación.....	79
1.5.2. El Reconocimiento	80
1.6. Deberes y derechos de los padres para con los hijos y los hijos para con los padres.....	80

1.7. Relaciones madre-padre-hijos (patria potestad).....	82
1.7.1. Definiciones	82
1.7.2. Deberes y derechos que nacen a partir de la patria potestad.....	83
1.7.3. Suspensión, pérdida y extinción de la patria potestad	85
2. GUARDA	87
2.1. Definiciones	87
2.2. Características	88
2.3. Clases de guarda.....	89
2.4. Deberes y derechos que nacen a partir de la guarda.....	93
2.5. Modos de terminar la guarda	95
3. LA OBLIGACION DE ALIMENTOS.....	96
3.1. Definiciones	96
3.2. Requisitos o presupuestos de la obligación	97
3.3. Características	98
3.4. Sujetos de la obligación	100
3.5. Las particulares obligaciones de alimentos.....	101
3.6. Cesación de alimentos.....	102
CAPITULO V. LA PROTECCIÓN INSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES FAMILIARES	104
1. DEFINICIONES.....	104
2. ORGANOS INSTITUCIONALES ENCARGADOS DE PROTEGER LAS RELACIONES FAMILIARES DERIVADOS DEL MATRIMONIO Y DE LA UNIÓN DE HECHO ESTABLE	105
2.1. Ministerio de Familia	105
2.2. Consejo Nacional de atención y protección integral a la niñez y adolescencia y la Defensoría de las niñas, niños y adolescentes	112

2.3. Ministerio del Trabajo	116
2.4. Ministerio de Salud	119
2.5. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).....	123
2.6. Registro del estado civil de las personas.....	131
2.7. Procuraduría especial de la niñez y adolescencia	136
2.8. Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia	140
3. ÓRGANOS JUDICIALES ENCARGADOS DE PROTEGER LAS RELACIONES FAMILIARES DERIVADAS DEL MATRIMONIO Y DE LA UNIÓN DE HECHO ESTABLE.....	143
3.1. Juzgados de Familia	143
3.2. Ministerio Público.....	147
CONCLUSIONES	151
RECOMENDACIONES.....	154
LISTA DE REFERENCIAS.....	157
ANEXOS	167

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar la protección institucional de las relaciones familiares derivadas del matrimonio y de la unión de hecho estable en el contexto jurídico nicaragüense.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer aspectos generales de las instituciones del matrimonio y de la unión de hecho estable en el contexto jurídico nicaragüense.
2. Desarrollar las diversas relaciones familiares que se derivan del matrimonio y de la unión de hecho estable acogidas en el ordenamiento jurídico nicaragüense.
3. Identificar las diversas instituciones públicas nicaragüenses encargadas de regular las relaciones familiares derivadas del matrimonio y de la unión de hecho estable.

INTRODUCCIÓN

La Familia es la base fundamental de la Sociedad, resultado de un proceso histórico, en donde prevalecía el comercio sexual, hasta lo que conocemos hoy por la Familia Monogámica.

Esta Familia Monogámica, está formada por la unión de una pareja, sus ascendentes, descendientes, así como por personas unidas por un mismo fin, constituido como un derecho, el cual lo encontramos plasmado en nuestro Código Civil al igual que en nuestra Carta Magna, la que establece como vínculos de unión familiar al matrimonio, relación de hecho estable, la guarda, relaciones padre-madre.

El Matrimonio es un contrato solemne por el cual hombre y mujer cumpliendo los requisitos establecidos por las leyes, se unen con el fin de procrear, vivir juntos, auxiliarse mutuamente y del cual surgen derechos y deberes para con ellos mismos y para con sus descendientes y ascendentes.

Este vínculo como es el matrimonio ha sufrido también múltiples cambios; históricamente la mujer era obligada a permanecer y a seguir a su cónyuge hasta donde este lo indicase, pero la evolución de este lazo permitió que los esposos estando alejados uno del otro, por situaciones de trabajo, siguiesen unidos.

No es de nuestra simpatía la máxima evolución que ha conllevado el vínculo del matrimonio como el poder romper este lazo, sin embargo si bien existe la

disolución del matrimonio, esto no implica que las relaciones se terminen, más bien los deberes y derechos siguen permanentes avalado por nuestras leyes, representado por instituciones que velan por que se cumplan.

Existe también la unión de hecho estable, la cual se puede definir como la unión matrimonial de un hombre y una mujer con el ánimo de hacer una vida en común, de manera libre y continúa. Esta es reconocida en nuestra Constitución Política como otra forma constitutiva de familia.

En cuanto a la guarda y tutela, en Nicaragua se caracteriza por ser mixta, ya que puede ser desempeñada, por la familia que lo necesita o por alguna institución bajo vigilancia de la autoridad, ya que es de interés público. Esta tiene por objeto en el cuidado de la persona o de bienes, de los que no estando bajo la patria potestad y que sin incapaces de velar o gobernar por sí mismos.

No sin menos importancia de las mencionadas cabe destacar la Filiación y a las Relaciones Madre-Padre-Hijos, (patria Potestad), que es la relación biológica que une a los procreados con sus procreantes, éste de por sí como derecho natural es también reconocida en nuestras leyes, y es parte importante en el desarrollo de la familia, ya que de ella se desprende una relación permanente y de la que depende el forjar individuos responsables ante una sociedad que va en decaimiento.

Para cada una de las relaciones jurídicas familiares de las que expusimos con anterioridad, existen Leyes que amparen y protejan los derechos y deberes que han sido emanadas de estas, acompañadas de instituciones, servidores, representantes, que están orientados a que se cada uno de los que integran estas familias, tengan la seguridad y la garantía del cumplimiento de normas que protegen estos derechos y deberes, esto conllevaría a hacer de la familia lazos inquebrantables y sólidos que nos permitiría ser de cada uno de nosotros individuos con definiciones claras de lo que conlleva una verdadera familia.

Lo que hace preguntarnos, ¿Las Instituciones encargadas de proteger a la familia, cumplen con sus objetivos de protección y dan abasto para toda la población?

CAPÍTULO I. ENFOQUE ÉTICO-LEGAL DE LA FAMILIA

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Como base en nuestra tradición católica el origen de la familia se funda en el matrimonio monogámico y en la preeminencia marital. Sin embargo existen diferentes escuelas sociológicas y positivas en las que prevalecen ciertas costumbres que determinaron cierto orden en la evolución de la familia (Puig Pena, 1972).

El término familia monogámico, es el resultado de una lenta evolución de la que hoy conocemos como familia. Antiguamente, dominaba el comercio sexual en donde a cada hombre le pertenecía cada mujer, seguidamente ésta pasa a lo que se denominó como familia consanguínea en la que predominaba la promiscuidad sexual entre hermanos y hermanas, apareciendo más tarde la familia punulena, en la que se prohíbe el comercio entre hermanos y hermanas, para dar continuidad a la familia sindianicea en la que el hombre solo vive con una mujer para llegar al matrimonio monogámico (Lacruz Berdejo, Sancho Rebullida, Luna Serrano, Rivero Hernández, & Ramos Albesa, 1997).

En este proceso, los rasgos generales van cambiando a lo largo de nuestra historia, ya sea por el avance de la civilización, por las costumbres, los modos de vida, en el área económico por la producción, o bien por el aspecto social en donde se unen personas que no tienen vínculos de sangre (Lacruz Berdejo et al., 1997).

Estos rasgos los podíamos encontrar en lo que se conocía como familia aristocrática, romana bajo el régimen de las doce tablas. En ella se distinguían dos grupos domésticos: uno muy amplio que era la gens; compuesta por todas las ramas de las que se han ido independizándose jerárquicamente, y la otra la familia en sentido estricto. En esta el pater tenía todos los poderes familiares, como lo eran la manus sobre la mujer, la patria potestad sobre los hijos, potestad sobre los esclavos y la mancipium sobre los ciudadanos romanos reducidos a condición servil (Lacruz Berdejo et al., 1997).

Los derechos germanos también se distinguían en un círculo cuasi familiar como lo era la Sippe y la familia propiamente dicha. El Hans (Casa) y la pertenencia familiar se determinan en ellos más por la autoridad a que se está sometido que por la sangre. Los hijos mayores ocupan una posición más libre que en la Roma primitiva (Lacruz Berdejo et al., 1997).

Tanto en Roma como entre los Germanos, se sustituye al vínculo de autoridad por el de la sangre llamado cognación, en donde el poder del padre o jefe de la casa disminuye y la posición de la mujer y de los hijos mejoran, estos quedan sujetos a la protección y la posibilidad de emanciparse al adquirir plena capacidad natural. El Cristianismo jugó un papel importante en este proceso de cambio, el cual da paso a una nueva familia basada en el matrimonio, ejercido como una unidad indisoluble y a la que se le ve fortalecida por derechos y deberes por ambos, los cónyuges, ordenando el ejercicio de la autoridad paterna en nombre de Dios y para el bien de los hijos, le atribuye al padre deberes con respecto a estos (Lacruz Berdejo et al., 1997).

Producto de esta influencia la familia medieval aparece como un organismo de ética muy estricta y como uno de los núcleos sociales más fuertemente constituidos. Si bien continúa la unidad de mando, en la que proporciona al marido una situación eminente en los aspectos patrimoniales, no anula la personalidad de

la esposa, siendo la dueña de la casa y la patria potestad se transforma en un poder de protección (Lacruz Berdejo et al., 1997).

En la Edad Media se da un doble proceso: el de reducción de la familia a los parientes más cercanos y el desarraigo de ésta al crecer el número de familias ciudadanas en relación con el de las familias campesinas. Para la Edad Moderna mantienen la composición del grupo familiar a los padres y los hijos, la independencia de los hijos y defienden la licitud y conveniencia del divorcio (Lacruz Berdejo et al., 1997).

El Derecho de Familia después del Código Civil, proclama en la Constitución entre otros principios de Derecho Familiar, como lo son la igualdad de derechos para ambos sexos como fundamento del matrimonio, la disolución del mismo mediante el divorcio, iguales derechos y deberes frente a los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y la reglamentación de la investigación de la paternidad (Lacruz Berdejo et al., 1997).

Pero en estos tiempos las cosas han cambiado, pasamos por un proceso largo, abrumador, doloroso y abusivo, para lograr poner en un especial como lo es la Familia, y vemos como esa ilusión se ha ido perdiendo.

Los jóvenes han perdido el respeto a sus padres, los padres han borrado de su cabeza el concepto responsable, de velar por los hijos que trajeron al mundo y del compromiso moral que adquirieron en un determinado momento. El matrimonio ha sufrido un fuerte quebranto dejándolo como solo un compromiso formal, sin que siga ese compromiso del amor filiar y duradero.

La familia ha entrado a un nivel muy fuerte de descomposición, por el cual debemos de procurar leyes, organismos que defiendan los intereses de nuestra familia.

2. DEFINICIONES

2.1. Concepto biológico

“Descender unos de otros, generados por lazos de sangre. Pareja Primitiva” (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990, p.9).

2.2. Concepto sociológico

“Es la institución formada por aquellos miembros vinculados por lazos sanguíneos y por los individuos unidos a ellos por intereses económicos, religiosos o de ayuda” (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990, p.9).

2.3. Concepto jurídico

Familia se entiende como aquel grupo formado por la pareja, sus ascendentes y descendientes, así como por otras personas unidas por lazos de sangre o matrimonio o solo civiles a los que el ordenamiento positivo les impone deberes y a su vez otorga derechos jurídicos (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990, p.9).

Según el artículo 70 de la Constitución Política de Nicaragua, la define como “el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de esta y del Estado”.

Cabanellas, G. (2001), establece que familia es “aquella que por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales de un tronco común y los cónyuges de los parientes casados” (p.66).

Por todos los conceptos anteriormente planteados, podemos establecer que Familia es un grupo de personas vinculadas por lazos sanguíneos, afectos o intereses, unidos por un mismo objetivo en el que el ordenamiento jurídico le otorga derechos y deberes.

3. CLASES DE FAMILIA

La Doctrina establece que la Familia puede llegar a constituirse de dos formas:

a). La primera forma es en virtud de los miembros que la compongan; por lo que en primer lugar podemos hablar de *familia extensa*, la cual incluye además de la pareja y sus hijos, a los ascendientes de uno o bien de ambos miembros, a los descendientes en segundo o ulterior grado, y a los colaterales hasta el quinto o mas grados, a los afines y a los adoptivos y en segundo lugar está la *familia nuclear* o también conocida como conyugal, cuyos únicos componentes son la pareja y sus hijos (Montero Duhalt, 1984).

En la actualidad la sociedad está compuesta mayormente por la familia conyugal, la cual sería el núcleo familiar que habita en la misma morada. Sin embargo también suele verse en la sociedad nicaragüense, sobre todo en las familias más humildes de la sociedad, como las viviendas están integradas por familias extensas, ya que en la casa no solo convive la pareja con sus hijos, sino que también viven hermanos de la pareja, los hijos se casan o deciden convivir con la pareja en unión de hecho estable y por ende llevan a la pareja al hogar paterno, los padres ya mayores, por los cuidados que se les tiene que dar, entre otras cosas.

b). La segunda forma es en virtud de la extensión de los lazos familiares, el propio derecho establece y señala quienes vienen a ser parientes entre sí y quienes son familiares, para así poder atribuir las consecuencias jurídicas del Derecho de Familia (Montero Duhalt, 1984).

La familia en registro histórico está compuesta de:

- “Parientes en línea recta, ascendientes y descendientes”

- “En línea colateral, hermanos propios o hermanos de ascendientes o descendientes” (Meza Gutiérrez, 1999, p.93).

En nuestra legislación nicaragüense en el Título Preliminar del Código Civil, Capítulo IV, Art. XVIII, del Parentesco, establece que parentesco es el vínculo que une a las personas descendientes de una misma estirpe, estableciendo a su vez que la ley no reconoce este vínculo más allá del sexto grado.

4. FUNCIÓN DE LA FAMILIA

La Familia a través de los tiempos ha sido el núcleo elemental de toda sociedad, participando en el desarrollo de la misma, es por eso que la familia cuenta con funciones determinadas, pero no limitativas dentro de la sociedad, pues no son las únicas que cumplen, sino las más elementales para la sociedad, las cuales son:

A). Regulación de la relaciones sexuales

Alrededor del mundo las culturas establecen el matrimonio como fundamento de toda familia, sin embargo desde siempre los individuos que están solteros o casados, establecen relaciones sexuales incluso al margen del matrimonio, lo cual no le quita a la familia su carácter de ser la reguladora por excelencia de estas relaciones (Montero Duhalt, 1984).

B). La reproducción

Como consecuencia directa de la relación sexual en el núcleo familiar tenemos la procreación, lo cual es sinónimo de familia; ya que la relación que surge entre padres e hijos crea por sí solo la familia, siendo entonces la reproducción más que una función propia de la familia, una fuente de la misma (Montero Duhalt, 1984).

C). Función económica de la familia

La familia históricamente ha cumplido la función de cauce de conservación del poder económico y de la riqueza, la cual se realiza por diversas vías; la vía más importante por el Derecho Positivo, es la que conocemos como sucesión hereditaria, pues prima el interés familiar. La segunda vía, es la extrajudicial, ya que no es impuesta como una solución necesaria por las normas del Derecho, a pesar de que para conseguir la finalidad se utilicen instrumentos jurídicos, y es la transmisión de situaciones de privilegio social económico, como por ejemplo, posiciones relevantes en el mundo profesional y de negocios, que se transmiten entre familiares (Gullón Ballesteros & Díez Pícaso, 1990).

La Doctrina establece que la función económica de la familia presenta un doble aspecto: El primer aspecto sería considerado como una Unidad Productiva de bienes y servicios y el segundo aspecto como una Unidad de consumo (Montero Duhalt, 1984).

Montero Duhalt (1984), establece que, como unidad productiva sus miembros o algunos de ellos, pueden ser trabajadores de la misma empresa familiar, con o sin remuneración, pero también pueden trabajar fuera de la organización familiar para así contribuir al aporte económico de los bienes y servicios que como familia se requiere; en lo que refiere a los servicios, cuando menos alguno de los miembros de la familia lo realizan, que vendría a ser el cuidado y atención de los hijos e hijas, de los ancianos y de los enfermos, pues como sabemos el cuidado de estos es necesario, ya que por sí solos no se pueden cuidar, siendo a su vez un derecho de los mismos y un deber de quienes realizan el servicio.

Sin embargo la familia desde el punto de vista de unidad económica, se concibe como economía individual de sus miembros, sobre todo cuando la mayoría de sus

miembros son adultos autosuficientes, o incluso se ve también entre los mismos cónyuges la independencia económica. Pero aún en estos últimos casos, se ven residuos de una primitiva unidad económica familiar, como lo es el disfrute común por todos de la morada, de sus servicios, los muebles, etc. (Montero Duhalt, 1984). Es decir a pesar de que los tiempos cambien, y cada vez exista entre los miembros de una unidad familiar más independencia económica, pues cada vez existe en la sociedad misma más igualdad de derechos y más oportunidades para el desarrollo integral de los individuos, siempre existirá cierta dependencia económica común entre los miembros.

Y en el aspecto como función de consumo, vendría a ser para la satisfacción de las necesidades materiales de la familia, tales como: los alimentos, vestuario, habitación, conservación y recuperación, entre otras cosas, que vayan en función del cuidado y desarrollo de la familia, en cuanto a las necesidades materiales para su sobrevivencia (Montero Duhalt, 1984).

D). Función educativa y socializadora

La familia vendría a ser un medio o instrumento de socialización del individuo. Siendo esta por mucho la principal función de la familia, la que se encarga de transmitir pautas de comportamientos, de tradiciones, de usos, costumbres y creencias necesarias, para que el individuo se pueda insertar en la vida social (Gullón Ballesteros & Díez Pícaso, 1990).

La familia es la primera escuela de todo individuo, aquella que te va a forjar el carácter y a inculcar las normas éticas básicas, para que uno pueda desarrollarse en la sociedad y saber cómo comportarse. Siendo por tanto esta función propia de los padres y de los demás miembros adultos de la familia para con los hijos e hijas, pues es un deber que se tiene, en cuestión del cuidado y desarrollo de los mismos.

E). Función afectiva

Si bien es cierto que se necesitan las cosas materiales para sobrevivir, tales como los alimentos, vivienda, etc. también se requiere del afecto de la familia, de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. La familia es aquella que normalmente viene a formar lo que es el hogar, lleno de afecto, comprensión, apoyo, solidaridad, etc., por ende dicha función viene a ser para nuestra opinión una de las más importantes dentro de todo núcleo familiar, pues viene a formar parte del desarrollo físico y emocional de todo individuo (Montero Duhalt, 1984).

5. DERECHO DE FAMILIA

5.1. Definiciones

Según Baqueiro Rojas y Buenrostro Báez (1990), “el derecho de familia es la regulación jurídica de los hechos biosociales derivados de la unión de los sexos a través del matrimonio y el concubinato y la procreación de los hijos por la institución de la filiación” (p.10).

“Es un derecho expansivo, emergente, vivo y dinámico caracterizado por no ser formalista por la autonomía de sus fuentes, además protector de la familia, y cuyas normas son fundamentales de orden jurídico” (Meza Gutiérrez, 1999, p.78).

En sentido objetivo es el conjunto de normas jurídicas que vienen a disciplinar esta institución real. En sentido subjetivo son todas aquellas facultades o poderes que nacen de las relaciones que dentro del grupo familiar, mantiene cada uno de los miembros con los demás para cumplir con los fines superiores de la entidad familiar (Puig Peña, 1972).

Tomando en consideración los conceptos anteriormente mencionados, el Derecho de Familia es aquel conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular la formación, funcionamiento y disolución de las relaciones familiares, con los distintos efectos, derechos y deberes que surjan de estos.

5.2. Naturaleza jurídica

Tradicionalmente el Derecho de Familia se ha considerado integrado en el Derecho Civil, y por tanto como algo que forma parte del Derecho Privado (Gullón Ballesteros & Díez Pícaso, 1990).

Sin embargo no es hasta inicios de este siglo que el civilista italiano Antonio Cicu establece que el Derecho de Familia no pertenece al Derecho Privado, sino que pertenece al Derecho Público, argumentando con tres supuestos:

- a. “Existe una intervención del poder público en las relaciones familiares, ya que para la formación, transformación y disolución de la familia se requiere de un agente estatal, que en nuestro caso, sería un juez civil o de familia” (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990, p.11).
- b. El concepto de función, propio del Derecho Público, “es característico en las relaciones familiares, ya que los derechos son recíprocos y dados para el cumplimiento de una serie de deberes” (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990, p.11).
- c. “Los derechos y deberes que se les fue otorgado para regular las relaciones familiares, son irrenunciables e imprescriptibles” (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990, p.11), es decir que no basta con la voluntad de los sujetos para alterarlos o suprimirlos.

Las relaciones familiares se dan entre particulares y no entre órganos estatales, lo cual hace válida su regulación dentro del Derecho Privado, además de ser parte del Derecho Civil, sin embargo hay que tomar en cuenta las características y elementos propios del Derecho Público, pues las voluntades se subordinan a un interés unitario y superior así como en el Derecho de Familia. Es difícil la determinación de la naturaleza jurídica, sin dejar de tomar en cuenta que a lo largo de la historia ha sido considerada por muchos autores como parte del Derecho Privado. En la actualidad se habla de una autonomía del Derecho de familia dentro del Derecho Privado, debido a su independencia legislativa del Código Civil, por ende es necesario estudiar la misma.

5.3. Autonomía del Derecho de Familia

La Doctrina establece que para que una ciencia jurídica pueda adquirir autonomía e independencia se requiere que posea (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990, p. 12):

- a. Independencia Doctrinal
- b. Independencia Legislativa
- c. Independencia Judicial

Esto se basa en ciertos criterios de autonomía, que hacen que esta rama del Derecho pueda considerarse como una rama autónoma, de los cuales son:

5.3.1. Criterio Legislativo

La materia familiar tiene que independizarse del tronco común del Derecho Civil, debe de tener códigos completos, leyes, ordenamientos especiales para su propia regulación, sin tener que depender del cuerpo normativo del Código Civil (Montero

Duhalt, 1984). En nuestro Derecho Comparado podemos ver como en países como México, Costa Rica, Cuba u otros, poseen regulaciones propias de la materia familiar; nuestra legislación nicaragüense, en cuanto a la materia de familia, se trata todavía es regulada por el Derecho Civil, sin embargo ya existe un proyecto de Ley de un Código de Familia, que se encuentra en discusión en la Asamblea actualmente; el cual vendría a proporcionarle al Derecho de Familia cierta autonomía e independencia legislativa.

5.3.2 Criterio Científico

Los temas de familia a lo largo de los tiempos han despertado gran preocupación en la sociedad misma, por la constante desintegración familiar; filósofos, moralistas, sicólogos, humanistas, consideran que la descomposición familiar es el efecto y causa de la descomposición social en general y por ende hay que atacar sus raíces a través de la célula social; razón por la cual se han creado un sin número de libros, artículos, notas, para así poder tocar todos los temas referentes a la familia, pues su estudio es de suma importancia para la sociedad (Montero Duhalt, 1984).

5.3.3. Criterio Didáctico

Para que exista una independencia didáctica es necesario que las universidades, dentro de sus programas de estudio impartan cursos de Derecho de Familia, como una clase independiente del Derecho Civil. También es necesario que las distintas instituciones públicas y privadas impartan cursos y conferencias con referencia a temas de familia y que se pongan en comparación con las legislaciones comparadas de otros países, para que así se puedan implantar cambios en pro y desarrollo de los asuntos familiares (Montero Duhalt, 1984). En la Universidad Centroamericana (UCA), actualmente se está impartiendo la clase de Derecho de

Familia como una clase autónoma del Derecho Civil, por lo que de acuerdo a este criterio didáctico, podemos ver cierta autonomía del derecho en cuestión.

5.3.4. Criterio Jurisdiccional

Este criterio se refiere a “la creación de tribunales propios, procedimientos especiales y jueces dedicados exclusivamente a la materia de familia” (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990, p.13).

Montero Duhalt (1984), expresa que:

La existencia de Tribunales especiales de Derecho de Familia es una verdadera necesidad, dada la conflictiva tan particular que en ellos se dirime, la cual es alejada de los simples intereses patrimoniales, que son materia exclusiva de estudio de los Tribunales de lo Civil. También sería de suma importancia que junto a los Tribunales de Familia se recibiese ayuda técnica y auxiliar de especialistas en la materia como psicólogos, medicina, trabajo social, para que en conjunto respondan de manera más acertada a las problemáticas y necesidades de los núcleos familiares, y de cada uno de sus componentes, evitando así los rompimientos de las relaciones familiares (p.31).

Considerando los cuatro criterios anteriormente planteados, podemos aseverar que estamos muy cerca, sino es que ya, de la autonomía de la rama jurídica del Derecho de Familia, pues ya pronto contaremos con un Código de Familia, encargado de regular todas las relaciones familiares, contamos con varios libros, revistas, en nuestras bibliotecas de la capital relacionadas a los temas de familia, los cuales están al alcance de todos los interesados, también y no por último ya contamos con Juzgados de Familia, con jueces de familia, que se encargan únicamente de todos los temas relacionados a éste y a sus intereses y efectos suscitados de los mismos; a su vez cuentan con la ayuda de especialistas como psicólogos, médicos, que trabajan en conjunto con los juzgados de familia para ayudar y a asesorar de manera oportuna y eficaz a las verdaderas necesidades del interés del núcleo familiar, pues al fin y al cabo esto es lo que viene a interesar

el Derecho de Familia. Empero los Juzgados de familia no se encuentran a nivel nacional, lo cual resulta de gran interés e importancia para la población nicaragüense que se instalen a nivel nacional, dichos Juzgados, por los temas tan importantes que trata, los cuales son la familia.

5.4. Características del Derecho de Familia

El Derecho de Familia posee varias características propias del mismo, y propias de su naturaleza jurídica mixta. Parte de ellas son:

a. El Derecho de Familia posee un contenido ético, señalado ya por varios autores tales como Kuggeiero, pues consideran que en dicho campo jurídico influye la religión y la moral, los cuales llegan a convertirse en preceptos jurídicos. Estos se convierten, “cuando existe crisis en la convivencia espontánea o cuando ésta resulte imposible, pues los comportamientos reales, se producen al margen del Derecho” (Gullón Ballesteros & Diez Picaso, 1990, p.42).

b. En el Derecho de familia atendiendo a su naturaleza mixta ya anteriormente mencionada, es necesario recalcar que existen factores de “orden público familiar”, debido a que las reglas básicas sobre las que, la familia se organiza y que tienen asidero legal en el texto Constitucional (Gullón Ballesteros & Diez Picaso, 1990). Es decir que prima como interés del Estado, el proteger la institución familiar, desde su formación, modificación, hasta su extinción; se da “la primacía del interés social sobre el individual” (Puig Peña, 1972, p.19).

c. Las instituciones jurídico familiares poseen una estrecha vinculación con el estado civil de las personas. “El estado civil de las personas está constituido por aquellas cualidades o condiciones que marcan su impronta en la persona y a su

vez determina el trato que esta recibe dentro de la comunidad” (Gullón Ballesteros & Diez Picaso, 1990, p.42).

d. “Los derechos de familia son derechos personales, los cuales por regla general son inalienables, irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles” (Puig Peña, 1972, p.18).

5.5. Fuentes

Baqueiro Rojas Y Buenrostro Báez (1990), establecen que la familia llega a surgir y a formarse en base a cuatro grandes instituciones, las cuales son: el matrimonio, concubinato, filiación y adopción. Pudiendo regular el Derecho de Familia con otras instituciones como lo es el patrimonio familiar, la sucesión y la tutela.

Son tres grandes conjuntos de fuentes:

1. Los que implican la unión de los sexos; como el matrimonio y el concubinato.
2. Los que implican la procreación; como la filiación matrimonial y extramatrimonial y la adopción.
3. Los que implican a las instituciones familiares en términos de asistencia; como la tutela y patrimonio familiar (Baqueiro Rojas y Buenrostro Báez, 1990, p.10).

Con estas tres grandes fuentes es que suele llegar a formarse y a constituirse una familia, y a su vez a partir de ellas surgen derechos y deberes para las distintas relaciones familiares que llegan a conformarse. Es necesario mencionar a la unión de hecho estable, como una de las fuentes de constitución de la familia actualmente, la cual va a la par del matrimonio, en virtud de muchas similitudes en cuanto a la formación de la familia.

Las fuentes constitutivas forman diferentes estados que una persona puede tener en la familia, los cuales también son tres: esposos, parientes o afines. Pero estos

estados no responden a los hechos constitutivos de la familia, ya que el matrimonio crea el estado de esposos; la filiación y la adopción crean el estado de parentesco y la afinidad se da por la combinación de los efectos del matrimonio y del parentesco (Planiol & Ripert, 1946).

5.6. Instituciones del Derecho de Familia (Clasificación del Derecho de Familia)

En el Derecho de Familia es necesario hacer la distinción entre derecho subjetivo y derecho objetivo. Puig Peña (1972) establece que será:

Derecho de Familia subjetivo aquel conjunto de facultades que pertenecen a la entidad familiar como tal o a sus diversos miembros, como consecuencia de la especial configuración que la familia tiene en el Derecho; y Derecho de Familia objetivo será el conjunto de normas que disciplinan las situaciones emergentes de las relaciones familiares (p.21).

En el aspecto objetivo, resulta común para los autores dividirlo en Derecho de Familia puro o personal y Derecho patrimonial o aplicado a los bienes familiares. El primero regula todo lo relacionado a los vínculos personales de la organización de la familia; el segundo viene a regular todos aquellos vínculos patrimoniales que se derivan de todas las relaciones familiares, siendo este el que se acerca más a las ramas del Derecho Civil (Puig Peña, 1972).

La familia en su sentido propio solo comprende únicamente a los cónyuges y a los hijos(nacidos de matrimonio o acogidos por adopción), sin embargo no hay que dejar atrás las relaciones parentales, que dan una concepción de familia pero en un sentido más amplio. Por otro lado también será de nuestro estudio la Tutela, pues también resulta parte histórica y elemental del Derecho de Familia (Puig Peña, 1972).

Por todo lo anteriormente expuesto podemos aducir que nuestro estudio en cuanto a las relaciones familiares se clasificaran en tres categorías, de las cuales éstas, se sub-clasificarán en otras relaciones; estas pueden ser:

1. Relaciones Familiares propiamente dichas

a. La relación conyugal o mejor dicho el matrimonio: “La cual hace referencia no solo al aspecto personal de la misma (deberes y derechos de los cónyuges), sino también al aspecto patrimonial (extinción del vínculo)” (Puig Peña, 1972, p.21).

b. La relación paterno-filial: De esta suele estudiarse las diversas situaciones que de ella pueden producirse, así como su nacimiento, contenido y extinción de las mismas. Algunas de las situaciones que se derivan de esta relación paterno-filial son: nace la patria potestad, la investigación de la paternidad y la adopción.

2. Relaciones familiares en sentido amplio

“Esta es la relación parental o de parentesco, con sus respectivas consecuencias jurídicas. En conexión directa con el parentesco y demás lazos familiares, se tiene la obligación alimentaria, el patrimonio de la familia y la sucesión legítima” (Montero Duhal, 1984, p.34).

3. Relaciones cuasi-familiares

“Se desarrolla la tutela, su constitución, contenido y extinción” (Puig Peña, 1972, p.21).

6. PARENTESCO

6.1. Definiciones

Para Planiol & Ripert (1946), definen el Parentesco como: “la relación que existe entre dos personas que descienden una de la otra, como la del hijo con el padre, el nieto con el abuelo, o los que descienden de un tronco común, como lo son dos hermanos, o primos” (p.20).

Parentesco, es también “la relación recíproca que existe entre las personas, como resultado de la consanguinidad, de algún interés en común, o por la administración de algunos sacramentos” (Meza Gutiérrez, 1999, p. 94).

Nuestro Código Civil de la República de Nicaragua, en el Título Preliminar del párrafo IV Capítulo XVIII, lo define como “el vínculo que une a las personas descendientes de una misma estirpe, de la cual la ley no reconoce este vínculo mas allá el sexto grado”.

Sin embargo para autores como Montero Duhalt (1984, p.46) parentesco está definido bajo dos conceptos:

a. Concepto biológico

“aquella relación que se establece entre los sujetos que descienden unos de otros o bien de un tronco común”.

b. Concepto jurídico

Lo viene a definir, como “la relación que se establece entre los sujetos ligados por la consanguinidad, la afinidad o la adopción”.

Por todo lo antes expuesto, podemos definir Parentesco, como aquella relación que existe entre dos o más personas, que descienden una de las otra, de un mismo tronco común, ya sea por consanguineidad, afinidad o por adopción.

6.2. Clases de parentesco

6.2.1. Parentesco por consanguinidad

Es llamado también parentesco natural, el cual vendría a ser la relación jurídica que surge entre las personas que descienden de un mismo progenitor; podríamos ejemplificarlo con los hermanos, en donde el progenitor común es el padre. Este puede ser bilateral siempre y cuando procedan del mismo padre o madre (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

6.2.2. Parentesco por afinidad

Es la relación jurídica que nace del matrimonio, y se da entre los parientes consanguíneos del esposo con la esposa y entre los parientes consanguíneos de esta con su cónyuge. Ejemplo de ello sería la suegra respecto al yerno (Planiol & Ripert, 1946). Ésta normalmente se conocía como parentesco legal, por ser una creación propia del legislador (Meza Gutiérrez, 1999). Ahora bien los parientes consanguíneos recíprocos de uno y otro cónyuge no son parientes por afinidad. El matrimonio no crea lazos de parentesco entre las dos familias, ni los mismos cónyuges no adquieren parentesco alguno, solo forman una familia como pareja, pues solo se crea entre ellos lazo afectivo y moral (Montero Duhalt, 1984).

6.2.3. Parentesco civil

Vendría a ser aquella relación que nace en razón de la adopción (Montero Duhalt, 1984).

El Decreto N° 862, Ley de Adopción, en su artículo número uno nos define a la adopción:

“Como la institución por la que el adoptado entra a formar parte de la familia del adoptante para todos los efectos, creándose entre adoptante y adoptado los mismos vínculos jurídicos y de parentesco que ligan a los padres con los hijos, estableciéndose un interés exclusivo el desarrollo integral del menor” (p.1).

Es decir que se crea un vínculo paterno filial, no por la vía natural, sino en virtud de un vínculo jurídico paterno filial y familiar, bajo disposiciones legales que lo permiten. La cual permite que el adoptado entre en la familia del adoptante, tal y como si tuvieran vínculos consanguíneos.

6.2.4. Parentesco espiritual

En el Derecho Canónico existe otra clase de parentesco llamado parentesco espiritual (canon 708) vínculo que se crea entre el bautizante y los padrinos con el ahijado, y que se convierte en impedimento para contraer matrimonio entre ellos (canon 1079) (Montero Duhalt, 1984).

6.3. Grados y líneas del parentesco

Se dice que la familia está “compuesta por parientes en línea recta, que vienen a ser los ascendientes y descendientes, y por la línea colateral, la cual está compuesta por los hermanos propios o hermanos de descendientes o

ascendientes” (Meza Gutiérrez, 1999, P. 93). Afinidad vendría a ser aquella relación jurídica que nace entre un cónyuge y los parientes en línea recta o colateral del otro.

a. Líneas del parentesco:

Es una serie de los parientes que descienden uno de otro. Lo cual forma lo que se llama una línea (Planiol & Ripert, 1946). El parentesco directo se representa por medio de una línea recta.

Se dice que la Línea Recta, se forma con la serie de grados que se forman entre personas que descienden unas de otras: padre, hijo, nieto, biznieto, en esta nos referimos al parentesco directo, puede ser ascendente o descendente. Ascendente es la que la liga a una persona con su progenitor padre, abuelo, bisabuelo. Descendente es la que la liga al progenitor con los que de él procedan: hijo, nieto, biznieto. Los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de personas excluyendo al progenitor (Montero Duhalt, 1984).

El grado de parentesco por ambas líneas se determina haciendo el cómputo de las generaciones. Entre ascendientes y descendientes se encuentran las generaciones desde el uno hasta el otro; ejemplo entre padres e hijos existe una generación (parentesco de primer grado), entre abuelos y nietos existen ya dos generaciones (parentesco de segundo grado) (Meza Gutiérrez, 1999).

b. Línea colateral o transversal

Es la serie de grados que viene a unir a los parientes que descienden de su progenitor común: hermanos, tíos, sobrinos y primos (Montero Duhalt, 1984).

En el caso de parentesco colateral, la forma de cómputo consiste en:

“Contar el numero de generaciones en las dos líneas, partiendo del autor común y en sumar las dos series de grados: así pues, dos hermanos son parientes en segundo grado (una generación en cada rama); por lo que un sobrino y un tío, sería ya en tercer grado (dos generaciones de un lado, una de otro)” (Planiol & Ripert, 1946, p.21).

6.4. Consecuencias jurídicas del parentesco

Los efectos del parentesco son numerosos y de naturaleza muy diversa (Planiol & Ripert, 1946) Toda consecuencia jurídica se manifiesta en la forma de derechos y deberes.

Derechos que se derivan del parentesco:

- a. El derecho de sucesión.
- b. Los diversos derechos concedidos a los padres sobre la persona y los bienes de sus hijos, en virtud de la patria potestad.
- c. El derecho de ciertos parientes indigentes, a obtener alimentos (Planiol & Ripert, 1946).

Obligaciones que se derivan del parentesco:

- a. El deber del padre y la madre de criar a sus hijos (manutención, vigilancia, educación, instrucción)
- b. El deber de respeto impuesto a los descendientes hacia sus ascendientes
- c. El deber entre parientes en línea directa de proveer alimentos a aquellos que tengan necesidad de los mismos.

d. La obligación de ser tutor o miembro del consejo de familia de un pariente o interdicto (Planiol & Ripert, 1946).

Estas son algunas de las consecuencias jurídicas que suscitan a partir del parentesco, las cuales se hacen necesarias para el buen funcionamiento del núcleo familiar y de la vida en sociedad.

CAPÍTULO II. GENERALIDADES DEL MATRIMONIO EN EL CONTEXTO JURÍDICO NICARAGÜENSE

1. BREVE DESARROLLO HISTÓRICO DEL MATRIMONIO EN NICARAGUA

Meza Gutiérrez (1999) en su libro de Personas y Familia, desarrolla una evolución histórica acerca del matrimonio en Nicaragua, bastante explícita, la cual resulta ser:

El Código Civil de 1867, se basaba más que todo en leyes coloniales españolas donde con respecto al derecho matrimonial claramente se establecía el objetivo de someter a la mujer bajo el dominio total del hombre, por ser sociedad entonces completamente machista.

El artículo 103 C. definía al matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.

Para que el matrimonio se pudiese constituir como tal, debía de ser celebrado ante la autoridad eclesiástica creándose ipso jure una sociedad de bienes, la cual se encontraba bajo la administración del marido.

La mujer y los bienes de la misma se encontraban bajo la obligación de vivir con él al mando y de seguirlo a donde fuere por ende ella no tenía libre disponibilidad de su bienes, ni de su persona.

La disolución matrimonial solo podía darse bajo la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio perpetuo, el cual en ese entonces consistía en una separación permanente de cuerpos y no permitía que se diera la celebración de un nuevo matrimonio.

Los hijos que eran concebidos durante el divorcio perpetuo eran considerados ilegítimos, a menos que se demostrara la reconciliación privada de los cónyuges. Sin embargo tenía un plazo de 30 días para avisarle al marido de su estado de gravidez, y el marido tenía el derecho de enviar a una nodriza, o guardadora para que atendiera el parto y así pudiese garantizar la identidad del bebe.

Bajo el régimen de Don José Santos Zelaya en 1898, se llegó a promulgar una ley que dejaba sin efecto alguno al matrimonio religioso reconociendo como valido únicamente el celebrado por las autoridades civiles.

El matrimonio se podía disolver por la muerte de uno de los cónyuges y por la disolución del vínculo matrimonial ó sea el divorcio perpetuo el cual se tramitaba ante la autoridad eclesiástica. Se presentaba ante el juez una copia de la sentencia eclesiástica que los venia pronunciando bajo el reconocimiento que el juez daba a dicha sentencia, se le restituía a la mujer sus bienes salvo que ella haya cometido adulterio en cuyo caso el marido se quedaba con todos los derechos gananciales, y conservaba la administración y usufructo de los bienes.

Al igual que el código anterior, si el hijo era concebido durante el divorcio no podía ser reconocido como legítimo salvo que se demostrare la reconciliación privada.

El Código de 1904, fue aprobado durante el Régimen liberal de José Santos Zelaya, el cual estableció que el matrimonio “Es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen por toda la vida y tienen por objeto la procreación y el mutuo auxilio.

El matrimonio para constituirse como tal debía de celebrarse ante funcionarios de orden civil para tener efecto legal. El mismo Código establece que cada cónyuge quedaba dueño y disponía libremente de sus bienes que poseían al contraer matrimonio y de los que adquirió durante la convivencia matrimonial por cualquier título, solo que se hubiesen establecido capitulaciones matrimoniales, eliminando así la sociedad de bienes.

En 1904 se promulgó y entró en vigor el Código Civil, aún vigente sin embargo para esa fecha la iglesia no reconocía matrimonio alguno que no fuera el eclesiástico y catalogaba como concubinos a los casados solo civilmente. Sin embargo ya para 1926 bajo la administración conservadora el Estado reconoció los efectos civiles del matrimonio religioso mediante la inscripción de este en el registro del estado civil de las personas, pero esto debía ser efectuado por el párroco oficiante, manteniéndose el matrimonio civil.

Hasta la fecha de hoy se mantiene el mismo Código Civil de 1904, sin embargo ciertos artículos ya han sido derogados por leyes especiales posteriores, los cuales son creados en pro de la familia y de todas las relaciones jurídicos familiares que puedan suscitarse de las mismas.

2. DEFINICIONES

El matrimonio desde el punto de vista jurídico se establece que “es un contrato en donde el hombre y la mujer establecen una comunidad de vida” (Meza Barros, 1989, p.23).

El matrimonio es la unión legal que se establece entre un hombre y una mujer que desean una comunidad de vida y fundar la familia. “El matrimonio no es considerado como una creación propia del derecho, sino que constituye una institución natural querido por Dios, solo que es recogido por la ley humana en cuanto es pieza fundamental en la convivencia social” (Albadalejo, 1984, p 31).

Otros autores definen al matrimonio como “aquella institución fundamental del Derecho de familia como la unión estable de un hombre y una mujer ordenada a una plena comunidad de vida de la cual se derivan las relaciones, derechos, funciones y potestades propiamente familiares” (Lacruz Berdejo et al., 1997)

Nuestro Código Civil de Nicaragua, define al matrimonio como “contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen por toda la vida y tiene por objeto la procreación y el mutuo auxilio.”

3. CARACTERÍSTICAS

a. El matrimonio como institución natural tiene ciertos fines, los cuales también son naturales; la procreación y educación de la prole y el amor conyugal (Lacruz Berdejo et al., 1997).

b. Es un acto solemne pues debe de celebrarse ante Notario público. (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

c. Es un acto complejo por la intervención del Estado, requiere que las partes expresan voluntad y también se requiere la voluntad del Estado. (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

d. Es un acto que para la constitución del mismo se requiere la inscripción del mismo en el Registro Civil (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

e. En él, la voluntad de las partes no pueden modificar por sí solo, los efectos ya que son previamente establecidos por el derecho (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

f. “Sus efectos se extienden mas allá de las partes y afectan a sus respectivas familias y a sus futuros descendientes” (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990, p.41).

g. Para que se pueda dar la disolución del vínculo matrimonial se requiere de una sentencia judicial, no basta con la sola voluntad de los interesados (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

h. Como naturaleza jurídica la doctrina establece que el matrimonio es un contrato por ende un negocio jurídico ya que prima el acuerdo de voluntades de la pareja para realizar dicho acuerdo solemne (Albadalejo, 1984).

Considerando lo mismo el propio artículo 94 del Código Civil, de la República de Nicaragua, establece que la naturaleza ideal del matrimonio es contractual el cual implica la voluntad de ambas partes.

Se le hacen dos críticas fundamentales

1. “No da cabida a la participación del oficial ante quien se realiza el matrimonio, siendo su declaración de igual que la de los contribuyentes constituida su participación perfecciona el contrato (Meza Gutiérrez, 1999, p. 105).

Para que pueda existir el matrimonio es necesario que este se haya declarado por el oficial del Registro Civil (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

2. “El Matrimonio es incoherente con los principios contractuales pues no admite, ni atribuye fuerza alguna a la promesa de futuro contrato” (Meza Gutiérrez, 1999, p.105).

Por ende no es un contrato porque si bien prima la voluntad de las partes para que se realice dicho acto solemne, no es un negocio jurídico, ya que el negocio jurídico es un acuerdo de voluntades en donde el incumplimiento genera consecuencias patrimoniales y el matrimonio es una institución familiar personal del número de familia carente de relaciones patrimoniales.

Por lo tanto la naturaleza jurídica del matrimonio es un acto jurídico, pues es un hecho dependiente de la voluntad humana que ejerce algún influjo en el nacimiento, modificación o extinción de las relaciones jurídicas, en donde los efectos ya están previamente determinados por el ordenamiento jurídico.

i. El matrimonio tiene como característica la unión física, es decir debe de existir una íntima conexión, entre la pareja, una unión de personas para la satisfacción de sus placeres sexuales (Puig Peña, 1972). Manteniendo siempre la dualidad de sexos, es decir la monogamia, excluyendo la poligamia o poliandria.

j. Buscan la fundación de una familia, se unen para perpetuar su especie y para crear y formar el núcleo familiar, siendo esta la célula elemental de toda sociedad (Puig Peña, 1972).

4. IMPORTANCIA

El matrimonio es la base esencial de la familia y condición primaria de la sociedad civil.

La familia es la raíz del Estado, y el matrimonio es el origen de aquella, es indudable que la sólida estructuración de este último dependerá de la consistencia civil, sin el matrimonio no es concebible una organización duradera de la sociedad (López Vargas, Márquez Guevara, & Silva Mendieta, 1995).

La familia es la organización más importante en nuestra sociedad, teniendo como base el matrimonio, relación jurídica que sirve como base para el desarrollo de la misma, conllevando a la procreación y mantenimiento de la unión familiar.

5. CONSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO

El matrimonio requiere que se dé la concurrencia de una serie de requisitos que hacen válida la celebración del mismo.

Para nuestro estudio, será necesario mencionar cuales son los requisitos esenciales para la formación del matrimonio, los cuales de acuerdo a su naturaleza y objetivo son indispensables para que la unión de la pareja sea considerada de matrimonio (Meza Barros, 1989).

Existen otros requisitos que son necesarios para que tal acto sea considerado como válido y así se le puedan atribuir efectos jurídicos. Hay condiciones necesarias que no afectan la existencia, ni la validez del matrimonio, pero que son necesarios para regular el matrimonio (Meza Barros, 1989).

Razón por la cual los requisitos se dividen en dos: requisitos de fondo y requisitos de forma:

1. Requisitos de fondo

Son aquellas características que vienen a afectar o que afectan a los sujetos o a las circunstancias que dependen de la posibilidad de que se realice el matrimonio (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990). Estos se dividen en:

a. Positivos

Vienen a conformar todas las cualidades que los novios deben de cumplir para contraer válidamente el matrimonio.

Los requisitos de fondo positivo buscan asegurar el respeto y la consideración de todos los intereses de la sociedad de los esposos y de la familia, los cuales se subdividen en:

a.1. La voluntad: el matrimonio por ser un acto jurídico bilateral requiere del consentimiento expreso de ambos cónyuges. Esta doble voluntad se ve en dos momentos; el primero es al solicitar por escrito o de manera verbal ante el juez de Distrito de lo Civil o Local de lo Civil, y el segundo momento es cuando ambos pretendientes contestan de manera afirmativa ante la pregunta del juez, “de que si acepta como cónyuge a la persona con la cual desean casarse”.

Se dice que en “este momento se configura realmente el consentimiento”, el cual se da de forma verbal y expresa (Montero Duhalt, 1984, p.122).

Se requiere que la voluntad sea una manifestación libre de todo vicio, la ausencia de consentimiento implica la inexistencia del matrimonio.

En la legislación nicaragüense de acuerdo al artículo 100 C “el varón de 21 años o el declarado mayor, y la mujer de 18 años o declarada mayor, pueden contraer matrimonio”, sin embargo el artículo 98 C establece que “el matrimonio se puede celebrar a través de un apoderado especialísimo”.

En caso de ser menores de edad, la pareja contrayente, requiere la autorización de quienes ejerzan la patria potestad o bien la tutela (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990); es decir, en el caso de “los varones menores de 21 años o no declarados mayores y las mujeres menores de 18 años o no declaradas mayores no podrán contraer matrimonio sin la autorización de sus padres, de sus abuelos, o de sus representantes legales” (Código Civil de Nicaragua, Capítulo IV, p.39).

a.2. Diferencia de sexo: aunque la ley no lo haga de manera expresa, esta exige que todo matrimonio que se vaya a celebrar se debe de dar entre un hombre y una mujer, por ser esta una institución creada para regular las relaciones sexuales entre personas de distinto sexo (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

En la legislación nicaragüense, se regula de manera expresa, que la unión debe de ser entre un hombre y una mujer para que puedan contraer matrimonio, tal disposición se encuentra regulada en el art. 94 C.

a.3. Aptitud física de los contrayentes o bien la pubertad legal: es la capacidad biológica que deben de poseer los contrayentes para llevar a cabo los fines procreativos del matrimonio (Meza Gutiérrez, 1999). Nuestro Código Civil de Nicaragua establece en su artículo 101 “que son hábiles para contraer matrimonio el varón que ha cumplido 15 años y la mujer que ha cumplido 14 años”. Es decir, menores que ellos no se consideran con la actitud física para contraer matrimonio.

b. Negativos

Son aquellos impedimentos que no deben de incurrir los contrayentes en matrimonio para que este se pueda llevar a cabo, y sea considerado como válido y pueda producir efectos jurídicos; estos se clasifican en absolutos, relativos y prohibitivos (Meza Gutiérrez, 1999).

b.1. Impedimentos absolutos: son los comprendidos en el artículo 110 C, los cuales son:

- El de la persona que está ligada por un matrimonio anterior.
- El de parentesco entre ascendientes y descendientes por consanguineidad o afinidad legítima o ilegítima.
- El de parentesco entre hermanos.
- El de homicidio entre el autor o cómplice de la muerte de uno de los cónyuges sobreviviente.
- El del condenado por adulterio y su cómplice.

Si alguna de las personas anteriormente citadas, desean contraer matrimonio entre ellas, no se considerara como valido el matrimonio, incluso el mismo resultara nulo, sin posibilidad de subsanarse, ya que son impedimentos absolutos, y puede ser declarada de oficio (Meza Gutiérrez, 1999).

b.2. Impedimentos relativos: tienen asidero legal en el artículo 111 C y son:

- El de error en la persona, violencia o miedo grave.
- El del loco o de cualquiera persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo.
- El no tener la edad determinada en el art. 101 C.

- El de impotencia física, patente, perpetua e incurable imposible para el concubinato y anterior al matrimonio.

“Los impedimentos relativos están determinados por incapacidades de facto o jure preexistentes o simultáneas a la realización del matrimonio” (Meza Gutiérrez, 1999, p.108). Dicho matrimonio padece de nulidad relativa ya que si no se impugna dentro del término establecido por la ley, se tendrá por firme, es por eso que se da a petición de parte (Meza Gutiérrez, 1999).

b.3. Impedimentos prohibitivos: se encuentran enumerados en el artículo 112 C y son:

- El del varón menor de veintiún años o no declarado mayor, y el de la mujer menor de dieciocho años o no declarada mayor, sin el consentimiento expreso de la persona a quien por la ley estuvieren obligados a pedirlo.
- El de la mujer, antes de los trescientos días de la disolución del anterior matrimonio.
- El del guardador o de cualquiera de sus descendientes con el pupilo o la pupila, mientras las cuentas finales de la guarda no estén canceladas.
- La falta de publicación previa o dispensa de los edictos legales.

En caso de que se llegue a celebrar el matrimonio bajo alguno de los impedimentos prohibitivos, el matrimonio se tendrá por válido, pero los contrayentes están sujetos a las penas que establece el Código Penal de Nicaragua.

2. Los Requisitos de forma

Son aquellos que constituyen al conjunto de formalidades que hacen que el matrimonio como acto jurídico, se tenga por celebrado válidamente (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

Estos requisitos se encuentran en el artículo 118 C los que podemos mencionar:

- La competencia, que recae sobre el Juez de Distrito de lo Civil o local del domicilio de los contrayentes.
- La solicitud, por un procedimiento de administración pública.
- La presencia de dos testigos idóneos que certifiquen la libertad de estado y aptitud legal de los contrayentes.
- La presentación del documento notariado que demuestre el permiso para contraer matrimonio, si lo necesitasen.
- La partida de nacimiento o cualquier otra prueba que demuestre la competencia por razón de edad.
- La certificación de la sentencia ejecutoriada que apruebe las cuentas del guardador, en su caso.
- La prueba de viuda y, en el caso de la mujer, la prueba de que puede casarse.
- La prueba de haber el viudo o viuda que tengan hijos del matrimonio anterior, practicado el inventario de los bienes que este administrado y pertenezcan a los hijos como herederos del cónyuge difunto, o bien la negativa de hijos o bienes.

Cumpliendo con cada de esos requisitos y no incurriendo dentro de los impedimentos ya señalados por la ley, se entiende que los contrayentes cumplen con todos los requisitos necesarios para contraer matrimonio y que a su vez este será considerado como válido y eficaz, capaz de producir todos los efectos jurídicos.

Por lo tanto deben de recurrir ante el Juez de la Civil Local o de Distrito, o ante Notario autorizado, facultad que le brinda la Ley 139, Ley que le da mayor utilidad a la institución del Notariado, en el art.1, al establecer que “los notarios pueden celebrar el matrimonio, siempre y cuando no incurran en los impedimentos del art. 116 C, y cumplan los contrayentes con los requisitos formales del art.118 C.” Los Notarios deben de tener 10 años de incorporados para poder celebrar el matrimonio, el cual levantará acta correspondiente en un libro especial que la Corte Suprema de Justicia le entregará.

El mismo día de la celebración, el Notario deberá de entregar a cualquiera de los contrayentes, un aviso circunstanciado para que procedan a inscribirlo en el Registro Civil de las Personas, de la misma forma y condiciones que lo hace un Juez Civil.

6. EFECTOS DEL MATRIMONIO

El matrimonio cuando ya se ha celebrado desprende una serie de efectos en todas las esferas que conforman el vínculo matrimonial, de las cuales tres son las más importantes:

6.1. Con respecto a los cónyuges

Como efecto esencial del matrimonio es el nacimiento del status matrimonial, consiste en el vínculo que se crea entre la pareja, el cual conlleva una serie de deberes y derechos (Lacruz Berdejo et al., 1997).

Las relaciones matrimoniales se desarrollan bajo la comunidad de vida que establece la pareja como unidad, proyectada de manera erga omnes, de modo que los derechos y deberes que susciten como efecto del matrimonio se entiende

que son en igual medida para el hombre y la mujer, todo en base al principio de igualdad (Lacruz Berdejo et al., 1997).

En base al principio de igualdad se desprenden una serie de deberes recíprocos de los cónyuges, los cuales son:

a. La obligación de convivencia

También conocido como el deber de cohabitación; consiste en la obligación que tiene la pareja de convivir juntos, en el mismo domicilio conyugal, un hogar común y autónomo. El art.152 C, establece la obligación que tienen los cónyuges de vivir juntos, sin embargo, no se puede emplear fuerza pública para hacer efectivo el deber.

b. Deber de fidelidad

Consiste en la “exclusividad de relaciones sexuales entre los cónyuges y por tanto la obligación de cada uno de ellos de abstenerse de tales relaciones con terceros” (Lacruz Berdejo et al., 1997, p.99), y en general de cualquier conducta que permita suponer que exista otro tipo de relaciones que no sea con la pareja.

La fidelidad supone la necesidad de una conducta decorosa, amable, de respeto, entre ambos cónyuges (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990), que no implique ninguna clase de maltrato, ni denigración humana, pues se supone que ambos contrajeron matrimonio en base al amor que como pareja se tienen.

La violación de este deber conlleva a un delito, el delito de adulterio, el cual es penado por la ley; el matrimonio de nuestra sociedad se sustenta del matrimonio monogámico, así como el cumplimiento de sus fines. Este deber se encuentra regulado en el artículo 151 del C.

c. Deber de ayuda y socorro mutuo

Cada uno de los cónyuges debe de contribuir a la realización de los fines de la familia, por lo tanto cada uno debe de tener con respecto al otro cónyuge una conducta de satisfacción por cuya virtud se encuentre el necesitado de ayuda. “Este deber abarca todo lo que pudiese llamar, el lado negativo de la vida; la miseria, desgracias, enfermedades” (Puig Peña, 1972, p.132).

Las necesidades deben de ir en proporción de la capacidad económica de quien las vaya a sufragar; este deber suele reducirse al aspecto pecuniario, es decir a la obligación alimentaria del cónyuge o conviviente, siendo entonces la obligación que cada uno tiene para contribuir a las cargas del hogar en base siempre a la capacidad económica que posean (Meza Gutiérrez, 1999). Este deber se encuentra regulado de igual manera en el art. 151 C.

d. Deber de respeto

El vínculo matrimonial de la pareja debe de basarse en el respeto mutuo, es decir a mantener entre ellos un trato íntimo y permanente, bajo una conducta moderada, considerada y cortés en el trato, no solo de manera íntima sino que también frente a la sociedad. Este deber se encuentra acogido en el art. 73 Cn.

e. El débito carnal

Implica los actos que conllevan a la perpetuación de la especie, siendo este uno de los fines principales de la figura del matrimonio (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

f. Actuación en interés de la familia

Todas las actuaciones que lleve a cabo la familia deben de ir con el fin de sufragar las necesidades de quienes la integren, siempre en proporción a la capacidad económica de quienes tengan la obligación. Unos aportarán con dinero en el hogar para sufragar los gastos de la familia, otros deberán efectuar el trabajo del hogar, tomándose en cuenta también el cuidado de los menores de edad, de los de tercera edad; aunque claro está que el cuidado de los hijos e hijas corresponde a ambos padres (Zarifeth Bermúdez, 1995). Todos estos deberes y derechos se encuentran regulados en el art.60 del Proyecto del Código de Familia.

g. Decidir de forma libre y de común acuerdo el número y espaciamiento de sus hijos (Pérez Contreras, 2000).

h. Tener y ejercer en el hogar, bajo condiciones de igualdad, las mismas consideraciones y autoridad (Pérez Contreras, 2000).

i. Decidir, de mutuo acuerdo, la forma en que se organizará su hogar, la forma en que desean educar a sus hijos, así como la administración de los bienes, sean éstos propios o que formen parte de la sociedad conyugal y los que sean de sus hijos, en caso de tenerlos.

Los deberes que nacen como efecto del matrimonio para con los cónyuges, ya mencionados, poseen una serie de características; estos deberes son de carácter positivo, recíproco y ético (Puig Peña, 1972, p.76). Son deberes recíprocos, que obligan a cada uno de los cónyuges de manera igual a realizar una acción como quehacer activo, tomando como base el sentimiento de la pareja para la conciencia íntima del cumplimiento de estos deberes, todo siempre en pro y beneficio del núcleo familiar.

6.2. Con respecto a los hijos

La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 73, párrafo segundo establece que: “los padres deben atender al mantenimiento del hogar y la formación integral de los hijos, mediante el esfuerzo común, con iguales derechos y responsabilidades”. A su vez el art. 75 Cn, establece que todos los hijos son iguales ante la ley sin discriminación alguna. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 17 numeral 5 reconoce que la ley debe de otorgarle los mismos derechos nacidos dentro del matrimonio como a los de fuera del mismo (Silva, 1998).

Por lo antes mencionado hacemos notar que es responsabilidad y derecho de ambos padres de hacerse cargo de sus hijos en todo lo concerniente a la formación integral de los mismo sin discriminación de ninguno de ellos, pues todos los hijos son considerados iguales ante la ley; es decir, poseen los mismos derechos y deberes, en base al principio de igualdad.

El Decreto No. 1065, Ley creadora de las relaciones entre madre, padre e hijos, en su art. 1 establece que es responsabilidad tanto de la madre como del padre el cuidado, crianza y educación de los niños y niñas; desarrollando en una serie de acápites los deberes que tienen los padres para con los hijos, entre los cuales se establece: que los padres deben de suministrar a los hijos la alimentación adecuada, vivienda, vestido, todo lo concerniente al desarrollo físico, a la salud y a su educación.

Deben de velar por la conducta y desarrollo de sus hijos tanto a lo interno del hogar como para la inmersión en la sociedad. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su art. 30 establece el deber que tienen los padres de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos e hijas, y a su vez, el

deber que tienen los hijos de honrar, de asistir, de alimentar y amparar a sus padres, cuando estos lo necesiten (Silva, 1998).

Los padres tienen el deber de representar a sus hijos, judicial y extrajudicialmente así como la administración de sus bienes.

La Constitución en su art. 78 determina que el Estado protege la paternidad y maternidad responsable, estableciendo el derecho de investigar la misma. En virtud de este artículo se creó la Ley Especial No. 623, Ley de Responsabilidad Materna y Paterna en donde se mencionan los deberes y derechos que tienen los padres para con sus hijos.

El artículo 71 Cn. eleva a rango constitucional la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta Convención se basa en principios sociales y jurídicos relativos a la protección y bienestar de los niños, pues es de suma importancia la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países y en particular en los países en vías de desarrollo tal y como es el caso de Nicaragua.

Es necesario mencionar la creación del Código de la Niñez y la Adolescencia. Dicho Código es de suma importancia, pues es un instrumento que no solo recoge todo lo postulado en la Constitución y lo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sino que reconoce y enfatiza los derechos que poseen los niños y adolescentes y a su vez los deberes y derechos que poseen los padres para con los hijos (Meza, Gutiérrez 1999).

En síntesis observamos que existen varios instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que establecen los deberes-derechos que poseen los padres para con los hijos y viceversa. Por lo tanto, ninguno de los miembros de la familia en

especial los hijos e hijas, se encuentran desprotegidos por la ley, pues cada uno de estos instrumentos fue creado con este fin.

6.3. En cuanto a los bienes

De acuerdo al artículo 153 C “los cónyuges pueden antes o después de celebrar el matrimonio arreglar todo lo que se refiera a los bienes. Este convenio deberá de constar en escritura pública y estar debidamente inscrita”.

El mismo artículo cita “si no hubiera capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio y de los que adquiere durante el por cualquier título”.

Por lo tanto es necesario definir lo que las capitulaciones matrimoniales; las cuales son “el contrato por cuya virtud los que van a unirse en matrimonio estipulan las condiciones de la sociedad conyugal, relativamente a los bienes presentes y futuros” (Puig Peña, 1972, pp.161-162); es decir que en las capitulaciones matrimoniales se puede establecer cuál será el régimen matrimonial al que se van a someter como pareja en cuanto a los bienes. Nuestro Código Civil no establece, ni impone una forma específica de régimen matrimonial, solo regula la opción de realizar las capitulaciones matrimoniales, por lo que desprendiéndome del artículo anteriormente mencionado, se puede deducir que en caso de que no se establezcan las respectivas capitulaciones y no haya justo título en donde conste la titularidad del bien para solo uno de los cónyuges y se desea disolver el vínculo matrimonial, se entiende que son bienes comunes de la pareja.

La Ley 38, Ley para la Disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes, en su artículo 22 enumera cuales son considerados bienes comunes:

- Los adquiridos a nombre de ambos cónyuges, antes o durante el matrimonio.
- Los bienes muebles y objeto de uso familiar que estén en la vivienda, adquiridos durante la vida en común de los cónyuges, antes o durante el matrimonio.
- Los bienes inmuebles a los derechos sobre los mismos que les fueron otorgados bajo el régimen de núcleo familiar o institución familiar.
- El bien inmueble, sea propiedad o no de cualquiera de los cónyuges o los derechos sobre el mismo, siempre que sea el que habite la familia.

Sin embargo, de acuerdo a la doctrina y de manera análoga por consiguiente, los regímenes matrimoniales a los que se pueden someter los bienes de la pareja son:

a. Régimen de Comunidad de bienes: todos o parte de los bienes que aportan los cónyuges al matrimonio o que adquieren durante el mismo, pasan a formar un solo patrimonio, el cual va a pertenecer a ambos esposos, va a subsistir mientras el matrimonio dure y las rentas que produce se utilizarán para el sostenimiento de la familia (Meza Barros, 1989).

b. Régimen de Separación de bienes: excluye toda idea de comunidad. Cada cónyuge conserva la plena propiedad de sus bienes que poseían en el momento de casarse y de los que adquieren con posterioridad. Cada uno de ellos administra por sí solos sus bienes y responden por las deudas contraídas por él, ellos están obligados a contribuir en proporción a las facultades económicas que tengan, para hacer frente a los gastos de la familia. Este sistema reconoce igual capacidad jurídica y económica al hombre y a la mujer (Meza Barros, 1989). Pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuvieron al momento inicial del mismo y los que después adquieren por justo título, a cada uno le corresponde la administración, goce y libre disposición de tales bienes” (Puig Brutau, 1985).

c. Régimen de Participación de las ganancias o Sociedad de gananciales: cada cónyuge conserva la administración, disfrute y libre disposición de los bienes que les pertenecían al momento de celebración del matrimonio y de los que pueda adquirir después por justo título, pero adquieren el derecho de participar y de gozar de las ganancias obtenidas por su consorte durante el tiempo en el régimen haya estado vigente (Puig Brutau, 1985).

d. Régimen Contractual: deja a libertad de los cónyuges para que ellos determinen por medio de Convenio, cuál será el régimen al que ellos estarán sometidos, suelen designarse como capitulaciones matrimoniales, contrato nupcial o convenciones matrimoniales (Meza Barros, 1989).

Este sistema es bastante acogido por las legislaciones latinoamericanas, tal es el caso de nuestra legislación, la cual hace mención en el art. 153 C. En base a las capitulaciones matrimoniales como ya se mencionó con anterioridad, es que las partes van a convenir qué sistema matrimonial van a constituir, la mayor parte de los casos, las parejas escogen los sistemas de separación de bienes o el de la comunidad de bienes, sin embargo existen numerosas parejas que desconocen este tipo de sistemas y de mecanismos de protección para los bienes que poseen ya sea de manera individual o conjunta, dejando en el vacío tal regulación, razón por la cual durante el juicio de divorcio se ven las grandes problemáticas en cuanto a los bienes, por lo tanto es necesaria la información adecuada a la población de tales sistemas para así evitar futuros conflictos.

El Proyecto del Código de Familia en el art. 88, determina que el régimen económico será el que los cónyuges determinen en las capitulaciones matrimoniales, y que en caso de no existir convenio o en caso de que las capitulaciones matrimoniales sean incapaces, el régimen económico será el de comunidad de bienes., reafirmado de igual manera en el art. 95 del mismo proyecto. En su art. 98, establece que los regímenes económicos que como pareja pueden constituir, son:

- Régimen de Separación de bienes.
- Régimen de Partición de las ganancias o Sociedad de Gananciales.
- Régimen de Comunidad de bienes, regulados estos en los artículos posteriores.

Hasta que el Código de Familia de Nicaragua no sea aprobado y vigente, la legislación actual referente a la materia, será la que se utilizará para regular lo concerniente al régimen matrimonial de los cónyuges, es decir todo lo regulado en el Código Civil de Nicaragua y las Leyes Especiales.

7. DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL

“La disolución del vínculo consiste en la ruptura del lazo conyugal y la cesación de todos los efectos que hayan surgido a partir de la unión de los esposos, pero con respecto a terceros” (Meza Gutiérrez, 1999, p.121).

Las legislaciones así como se encargan de regular la constitución del matrimonio, también regula la disolución del mismo. Por ende la Ley 38, Ley para la disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes en su artículo 1 establece que el matrimonio civil se puede disolver por cuatro causales, las cuales son:

- Por muerte de uno de los cónyuges.

Se entiende que el vínculo matrimonial se ha disuelto. El Proyecto del Código de Familia en el art 158, establece que “la muerte real de un cónyuge extingue el vínculo matrimonial desde el momento en que tiene lugar la defunción” y en caso de que se presuma la muerte de uno de los cónyuges, esta se disuelve desde la fecha en que la declaración judicial queda firme e inscrita en el Registro Civil del Estado de las Personas.

- Por mutuo consentimiento.

Ambos desean dar por terminado el vínculo matrimonial por diferentes causas que solo suscitan e importan entre ellos. El procedimiento a seguir es el que se encuentra establecido en los artículos 174-184 C.

- Por voluntad de uno de los cónyuges.

Es cuando uno de ellos desea disolver el matrimonio, facultad que la Ley N° 38, le difiere o bien le faculta”. El artículo dos de esta Ley, establece que si uno de los cónyuges desea disolver el matrimonio deberá de seguir el procedimiento previamente establecido en la presente Ley.

- Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio.

Es en virtud de la existencia de cualquiera de los impedimentos relativos o absolutos, establecidos en los artículos 110-112 C; si incurren en cualquiera de estos impedimentos se podría dar la unidad del vínculo matrimonial, el procedimiento a seguir, será el establecido en los artículos del 194 al 198 del Código Civil de Nicaragua, procedimientos que van a depender del tipo de impedimento en el cual hayan incurrido ambos o uno de los cónyuges.

Cualquiera que sea la forma de disolución del vínculo matrimonial o de las causales, la mayor problemática a resolver en cuanto a esto, siempre resulta referida a la tutela de los hijos, el monto de las pensiones, y las responsabilidades no solo para con los hijos, sino también entre adultos.

Somos del pensamiento que antes de determinar cualquier resolución se debería de tomar en cuenta el bienestar de los niños y niñas, debido a que en toda problemática familiar, en este caso como es la disolución del matrimonio, los hijos no solo son los más perjudicados, sino que sufren la consecuencia de ello.

Por ende los jueces y las instancias que son las reguladoras y protectoras del bienestar de los derechos de los hijos, deberían de procurar, mecanismos, leyes que ingieran más sobre la responsabilidad del deber como padres.

CAPÍTULO III. ASPECTOS GENERALES DE LA UNIÓN DE HECHO ESTABLE

1. DEFINICIÓN

Existe según la doctrina un concepto de unión de hecho estable, conocida históricamente como concubinato o de amancebamiento. De los cuales están: “la unión sexual de un solo hombre y una mujer que no tienen impedimento legal para casarse y que viven como si fueran marido y mujer en forma constante y permanente, por un periodo mínimo de cinco años” (Montero Duhalt, 1984, p.65).

Es el acto jurídico reconocido por el derecho como generador de efectos de la pareja, de los hijos y también en relación con otros parientes, de la cual resulta una unión libre, duradera y permanente que puede o no producir efectos legales (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

Legislaciones como la de Honduras, El Salvador, Guatemala, y Panamá coinciden en definir a la unión de hecho estable como “aquel hombre y mujer con plena capacidad para contraer matrimonio legal, con carácter de singularidad, estabilidad; que hagan vida común y de forma constante” (Meza Gutiérrez, 1999, p.113).

La unión de hecho estable es conocida como:

Aquella unión no matrimonial, que se constituye por un hombre y por una mujer, sin ningún impedimento legal para contraer matrimonio, con el ánimo de hacer vida en común, de manera libre, singular, continua, estable y notoria, por un período de tiempo que puede o no ser determinado (Zarifeth Bermúdez, 1995, p.19-20).

Nuestra Constitución Política, en su artículo 72 reconoce al matrimonio y a la unión de hecho estable, como formas constitutivas de familia, por ende el Estado debe de velar por su protección. Si bien es cierto que todavía estamos en espera de la aprobación del Código de Familia, el cual ya viene a definir lo que vendría ser la figura de la unión de hecho estable.

Actualmente el Código Civil Nicaragüense, presenta vacíos jurídicos, ya que no establece una definición propia de dicha figura, salvo la mención que hace en su artículo 3178, el cual traduce efectivamente un reconocimiento a este tipo de uniones o mejor dicho de familias, al establecer que:

La simple comunidad de bienes o de intereses, aun resultantes de un hecho voluntario de partes no constituye una sociedad. Sin embargo se constituye sociedad de hecho, por juntarse dos personas de diferente sexo y hacer vida marital común, con comunidad de bienes o intereses.

Es la única referencia que se hace con respecto a la sociedad de bienes que se pueden derivar de la unión de hecho estable, sin mencionar como puede funcionar dicha cuestión. Dejando entrever el gran vacío jurídico que dicha figura tiene en la legislación vigente actual.

2. IMPORTANCIA

La Familia es la institución más antigua y natural, por eso es la única entidad social que se viene a desarrollar en todas las sociedades, por ser este el pilar de las mismas. El Estado debe de velar por la seguridad y fortaleza de dicha institución.

El matrimonio y la unión de hecho estable son figuras constitutivas de familias, destinatarias de prestaciones patrimoniales en materia de salud, educación, vivienda, previsiones sociales y por ende jurídicamente tutelada por el Estado.

La importancia que tiene esta institución la constituye el hecho de la gran relevancia que esta figura está ocasionando en las sociedades a lo largo de los años, pero con mayor porcentaje en las familias actuales, no solo familias nicaragüenses sino que a lo largo de toda América Latina, por lo tanto es necesaria la regulación jurídica de instituciones familiares tales como la figura de la Unión de Hecho Estable, por ser la misma constitutiva de familias, creadora de derechos y deberes entre los distintos miembros de la familia (Zarifeth Bermúdez, 1995,p.36).

Por lo tanto la creación de leyes, tales como un Código de Familia, en donde se aborden todas las diferentes instituciones constitutivas de familias, son de suma necesidad en todos los países, tomando en cuenta que los tiempos cambian y por ende las legislaciones tienen que ir a la par del desarrollo de las sociedades.

3. CARACTERISTICAS

Las características de la unión de hecho estable las cuales son:

- a. “Affectio familiaris: es decir es al ánimo que posee la pareja de querer formar una familia y el participar en ella” (González Castillo, 2006, p.33).
- b. “Ausencia de formalización matrimonial: Se trata de un requisito de carácter negativo”. Es decir que la unión de hecho estable no conlleva las formalidades propias del matrimonio, y si no formalizan su unión es por la propia voluntad de la pareja (González Castillo, 2006, p.34)
- c. Este tipo de familia o de unión se encuentra reconocido por la Constitución Política Nicaragüense, sin embargo ya se encuentra debidamente regulada por otras legislaciones centroamericanas, por ser un tema de suma importancia (Meza Gutiérrez, 1999).

d. Existe una pluralidad de personas, la familia es siempre una sociedad, para que se pueda considerar como familia, es necesario que exista más de un miembro en la misma.

e. Convivencia: La familia debe de tener una sede fija en la cual se reúnan sus integrantes para así poder compartir sus vidas, acompañadas de una estabilidad, permanencia y notoriedad de la familia.

f. Lazos derivados del parentesco de la relación de la pareja: esta característica es básica de la institución familiar, la cual tiene como objetivo y finalidad la reproducción humana.

g. Despliegue de esfuerzos comunes, para así poder conseguir el sustento, lo cual pasa de igual manera en el matrimonio, los miembros activos, deben de colaborar en conjunto para lograr el mantenimiento y crecimiento económico de la familia.

h. En la familia tanto como en el matrimonio como en la unión de hecho estable debe de existir una figura de autoridad identificable, para que así exista un mayor orden y una mejor organización de la familia, lo cual usualmente desde tiempos atrás suele ser la figura del padre, sin embargo considerando el hecho de los altos porcentajes de hogares conformados por madres solteras, en estos casos es la figura de la madre, aquella figura de autoridad.

En síntesis, la familia es el núcleo más importante de toda sociedad, la cual puede constituirse de muchas formas, siendo una de ellas la unión de hecho estable, figura similar al matrimonio, pero que no posee la formalidad del mismo pero por mera voluntad de las partes, sin embargo posee muchas características del matrimonio, tal como lo es la convivencia de todos sus integrantes en el mismo hogar, pues se tiene el ánimo de formalizar una familia, en base a la reproducción humana, siendo esto una de las finalidades de la unión. Ambos unen esfuerzos para colaborar al mantenimiento y crecimiento de la familia, por lo tanto ambos

poseen los mismos deberes y derechos que suscitan del matrimonio, para ellos mismos y para con sus hijos.

4. REQUISITOS

Para que tales uniones se califiquen en Unión de Hecho Estable, o bien a como se conocía antes según la doctrina como concubinato, y por ende produzcan efectos jurídicos deben de cumplir con ciertos requisitos

1. Solo debe haber una concubina y desde luego un solo concubino.
2. Debe de ser una unión heterosexual singular.
3. Hecho voluntario, requiere de la conducta espontanea, libre, consiente tanto del hombre como de la mujer.
4. Hecho lícito: es decir no puede ir en contra de las leyes nacionales ni en contra de las buenas costumbres.
5. Debe de estar libre de impedimentos dirimentes no dispensables, es decir que debe de estar libre de obstáculos jurídicos y sociales para la cohabitación, conceptualización y regulación de la unión de hecho estable, al igual que en la figura del matrimonio.
6. Ninguno de los dos debe estar casado, ni existir impedimento entre ellos para casarse. Solo existe la unión de hecho estable si cada uno de los convivientes está libre de matrimonio, pues si uno de los o ambos están unidos en matrimonio con una tercera persona, ya se consideraría como adulterio, la cual es una acción ilícita.
7. Ambos deben de poseer aptitud legal para contraer matrimonio, para que se tenga por válida la unión, es necesario que la pareja tenga capacidad jurídica matrimonial.
8. De manera voluntaria la pareja debe de tener el ánimo de compartir una vida en común, bajo el mismo techo, es decir deben de tener el ánimo de convivencia.

9. Los convivientes deben de estar dispuestos a llevar en común las cargas de la familia, a ayudarse y socorrerse mutuamente, y a constituir ambos una unidad social para toda la vida.

10. La unión debe ser permanente, es decir que la relación haya durado por un periodo mayor de cinco años, con ánimo de convivir por un periodo de tiempo indefinido. Debe de existir una cohabitación continua y permanente, la cual es el requisito primordial de la figura de la unión de hecho estable.

11. Deben tener el status de casados, este es, tratarse como tales, y ser reconocidos en su comunidad como si fueran esposos (Planiol & Ripert, 1946).

En las legislaciones latinoamericanas los requisitos necesarios para constituir una unión de hecho estable, se sintetizan en los apartados de sus Códigos de Familia, tal es el caso de: El Código de Familia de Panamá de 1994, establece en su artículo 53: “La unión de hecho entre personas legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco (5) años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad surtirá todos los efectos del matrimonio civil”.

El Código de Familia de Honduras, artículo 45, dispone que: “La existencia de la unión de hecho entre un hombre y una mujer con capacidad para contraerla y que reúna los requisitos de singularidad y estabilidad surtirá todos los efectos del matrimonio realizado legalmente”.

El Código de Familia del Salvador de 1994, artículo 118, se define que: “La unión no matrimonial que regula este código, es la constituida por un hombre y una mujer que sin impedimentos legales para contraer matrimonio entre sí, hicieran vida en común libremente, en forma singular, continua, estable y notoria, por un período de tres o más años”.

El Código de Familia de Costa Rica plantea en su artículo 242 (adicionado por Ley No. 7532 del 8 de agosto de 1995) que: “La unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio, surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente, al finalizar por cualquier causa.”

Según nuestra legislación nicaragüense en el artículo 5 de la Ley de Alimentos Ley No. 143 (2001), se considera unión de hecho estable, aquella que cumple con los requisitos:

1. Que hayan vivido juntos durante un periodo de tiempo apreciado por el juez. El periodo de tiempo que establece el Reglamento de la Ley de Seguridad Social, Decreto N°974, en su artículo 1 inciso “ñ” al establecer definiciones como el de la compañera de vida, es de cinco años, para que la mujer sea considerada como tal. Sin embargo el Proyecto de Código de Familia, en el art.65, establece que el periodo de tiempo para que tal unión sea considerada como tal, no debe de ser menor que dos años así como la singularidad entre un hombre y una mujer y la condición de estabilidad y permanencia.

2. Que entre ambos, hayan tenido un trato, consideración social, y la armonía conyugal que demuestre al juez, la intención de formar un hogar.

Podemos observar como cada una de las Legislaciones Latinoamericanas, junto con la nuestra, establecen una serie de requisitos, necesarios para que se pueda considerar y constituir como una figura de Unión de Hecho Estable, constitutiva de familia. Sin embargo también podemos apreciar que nuestra legislación es un poco ambigua, a la hora de establecer los requisitos, pues no cuenta con un cuerpo normativo claro al respecto de la figura de la unión de hecho, a diferencia de los otros países centroamericanos, que cuentan con un Código de Familia, encargado de regular dicha figura.

El Código de Familia sigue siendo un proyecto de ley, el cual actualmente está siendo estudiado y evaluado por la Asamblea Nacional, lo que solo nos deja en la espera de su pronta aceptación, pues el mismo ya viene a regular en un capítulo todo lo concerniente a la unión de hecho, estableciendo de manera clara los requisitos necesarios para constituir la unión y esta pueda producir efectos jurídicos tanto para la pareja como para los hijos y bienes.

5. DERECHOS Y DEBERES

Al igual que en el matrimonio se derivan una serie de derechos y de deberes de los cuales son:

a. De los cónyuges o convivientes entre sí: Son deberes y derechos recíprocos:

- Fidelidad, este es un deber, factor esencial, se impone por igual al hombre y a la mujer (Meza Gutiérrez, 1999); art. 151 C. En la actualidad podemos apreciar que este es un deber que pocos cumplen, pues las mayores causas de divorcio, es por asuntos de infidelidad por parte de uno de los cónyuges.

- Socorro mutuo: este se desprende del estudio del artículo 151C, el cual se reduce al aspecto pecuniario de la relación, al referirse como la Obligación Alimentaria que existe entre los cónyuges o convivientes; por su contenido cae en la esfera de los alimentos, dicha obligación se hace de manera proporcional conforme a su capacidad (Meza Gutiérrez, 1999). “Es un deber y un derecho de ambos de proporcionarse alimentos durante la unión de hecho, en relación y proporción de la capacidad económica de la pareja” (Zarifeth Bermúdez, 1995, p.72). Es decir una vez ya casados los intereses de la pareja se comparten, así como todo lo necesario para sufragar las necesidades propias de la sobrevivencia de cada uno.

- Deber de cohabitación: Los cónyuges, al igual que los convivientes están obligados a vivir juntos y no hay sanción en caso de incumplimiento (art. 152 C). “Consiste en la convivencia común, es de éste deber que surge la necesidad de establecer y fijar el domicilio de la pareja” (Zarifeth Bermúdez, 1995, p.73). La norma es que ambos vivan bajo el mismo domicilio, pero no dejan de existir aquellas parejas en donde uno de los cónyuges por diferentes causas, por ejemplo en los casos en que uno de los cónyuges reside en el exterior por asuntos laborales, lo cual hace difícil la convivencia bajo el mismo domicilio.

- Deber de respeto: Es la exigencia de un trato íntimo y permanente, es decir una conducta considerada y cortés en el trato de la pareja, tanto en la intimidad como frente a terceros (Lacruz Berdejo et al., 1997). Este deber se basa mucho en los valores y principios de cada uno de los cónyuges, y por ende también los valores que como pareja y como familia inculquen.

- Actuar en interés de la Familia: Este deber consiste en, “sufragar en proporción a los recursos de la pareja, los gastos de la familia, tomando en cuenta también el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos, lo cual viene a ser responsabilidad de ambos padres” (Zarifeth Bermúdez, 1995, p.74). En las sociedades nicaragüenses actuales muchos de los hogares están conformados por madres solteras, por lo que ellas deben de llevar a cargo y sufragar todos los gastos que susciten en la familia, además del trabajo del hogar que en la mayoría de los casos también realizan.

- Derecho- deber de la perpetuación de la especie: Este derecho- deber “se da a través de la procreación, el cual debe de ser ejercido de forma libre y responsable” (Zarifeth Bermúdez, 1995, p. 75). Respetando la voluntad de la pareja de que si esta quiere o no procrear.

- “Ambos tienen derecho de la sucesión intestada entre ellos, pues se encuentra en el mismo orden que el de los cónyuges” (Zarifeth Bermúdez, 1995, p.74).

Todos estos deberes anteriormente mencionados, se encuentran enumerados en el art. 60 del Proyecto de Código de Familia, como deberes y derechos que suscitan del matrimonio, sin embargo el art. 75 del mismo Código establece que todas las disposiciones del mismo relativas a los deberes y derechos que nacen del matrimonio, el régimen matrimonial; y lo relacionado a la filiación y al derecho de alimentos, es aplicable a la unión de hecho estable.

b. Con respecto a los hijos: la representación de los hijos debe ser ejercida por ambos padres, tal como lo establece el Decreto N° 1065, sin embargo el artículo 4 de ese mismo decreto establece que uno de los padres puede tomar decisiones en nombre de los dos, pues se presume como tal (Meza Gutiérrez, 1999).

La enajenación de bienes debe hacerse de manera conjunta, pues la enajenación de los bienes de los hijos e hijas se debe de realizar con autorización judicial, y aunque ellos no la necesitan están sujetos a la rendición de cuentas (Meza Gutiérrez, 1999).

Los padres están en la obligación de brindar todos los elementos necesarios para el desarrollo físico, moral e intelectual de los hijos e hijas.

Este deber de los padres y responsables de sus hijos no solo se encuentra regulada por las legislaciones nacionales, sino que los instrumentos internacionales también se encargan de regular todo lo concerniente al desarrollo y formación de los hijos e hijas dentro del núcleo familiar, tal es así como La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 30, establece el deber de los padres de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos e hijas, así como el deber de los hijos de respetar, honrar siempre a sus padres y de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando estos lo necesiten.

En caso de incumplimiento de dicha obligación, la Ley 143, Ley de Alimentos, establece la opción de la demanda de alimentos, esto es por el incumplimiento por uno o ambos padres para sufragar las necesidades básicas, pues es un derecho de todo hijo e hija, y un deber de los padres.

Todos los hijos son iguales ante la Ley, tal a como establece el artículo 75 Cn., por ende los mismos derechos y deberes que suscitan del matrimonio para con los hijos, son de igual manera para los hijos que fueron concebidos dentro de la unión de hecho estable.

Regulado de igual manera en el art. 17 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, numeral 5, el cual cita “La Ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los hijos nacidos dentro del mismo” (Silva, 1998,p.274). Regulado también en el art. 25 numeral 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estableciendo que todos los niños nacidos dentro del matrimonio o no tienen derecho a igual protección social.

c. Bienes

“Se debe de establecer entre ellos una comunidad legal de bienes, siendo por ende ambos cotitulares de todos los derechos, bienes y deudas que se adquiriera durante la unión de hecho, presumiendo que este esfuerzo fue compartido” (Zarifeth Bermúdez, 1995, p.78)

Del conjunto de bienes, derechos y obligaciones, debe de pertenecer a cada conviviente una parte alícuota igual e indivisible la cual le va a brindar a ambos la facultad de administrar de manera simultánea el todo, salvo pacto en contrario (Zarifeth Bermúdez, 1995.)

El régimen de comunidad de bienes es aplicable aun cuando ambos o uno de ellos aparezcan documentados o inscritos en su caso, a nombre exclusivamente de uno de ellos, salvo que lo hubiesen adquirido de manera individual ya sea por donación, herencia, legado o cualquier otro título gratuito o bien por el don de la fortuna (Zarifeth Bermúdez, 1995).

6. EFECTOS DE LA UNIÓN DE HECHO ESTABLE

Los efectos principales vendría a ser el nacimiento de una serie deberes y derechos que surge entre los convivientes para con los hijos y para con terceros, en cuanto a la estructura de promoción, afirmación y desarrollo de la personalidad de los individuos que componen el núcleo familiar (Zarifeth Bermúdez, 1995), de los cuales mencionamos los más importantes:

- a. Deberes de solidaridad social: La familia por ser considerada como la base de toda sociedad, al ser la misma estable, se desarrolla de forma armoniosa y progresiva una serie de deberes para la familia en cuestión y para la sociedad.
- b. De asistencia: Consiste en brindar a cada uno de los miembros de la familia, apoyo, asistencia y cooperación, para el buen desarrollo de la misma.
- c. De responsabilidad: A partir de la constitución de la familia, nacen para la misma una serie de deberes y derechos, para la pareja entre sí, para con los hijos y con los terceros.
- d. De afecto: Se entiende que del trato diario y los mismos lazos de sangre, hace que nazca de la misma relación el afecto mutuo entre los miembros de la familia.

A partir de la Unión de Hecho Estable se derivan una serie de efectos, mencionados anteriormente producto de la propia unión, de los cuales, algunos son:

1. Derecho de alimentos: De acuerdo a la Ley de Alimentos, Ley No. 143; establece en su artículo 1, que "...la unión de hecho estable que reúna las características que se regulan en esta ley, para los efectos de la obligación alimentaria", tendrán derecho a recibir y el deber de dar alimentos. Características o bien requisitos que se enumeran en el artículo 5 de la misma ley.

2. Derechos sucesorios: El Proyecto de Código de Familia establece el derecho a la sucesión intestada en el mismo orden que de los cónyuges. Es decir que los compañeros de vida se encuentran según la ley en el mismo orden que el cónyuge a la hora de la sucesión intestada (Meza Gutiérrez, 1999).

3. Seguridad social: La Ley de Seguridad Social de Nicaragua, reconoce a la compañera de vida con el derecho de reclamar prestaciones a su favor, siempre y cuando cumpla con los requisitos ya establecidos en la ley, y en su reglamento, encargadas de regular la materia (requisitos que ya hemos mencionado antes).

A falta de esposa da derecho la ley a la compañera de vida de recibir la pensión que la propia ley establece en los casos de muerte del asegurado, por riesgo profesional, si vivió con el trabajador fallecido durante los cinco años antes que precedieron a su muerte, y si ambos permanecieron libres del matrimonio durante la unión de hecho (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990) (art. 57 Ley de Seguridad Social de Nicaragua, art.1 inciso ñ Reglamento de la Ley de Seguridad Social de Nicaragua).

7. IMPEDIMENTOS

Como bien sabemos el Código Civil de Nicaragua establece claramente cuáles son los impedimentos para contraer matrimonio, por lo que de manera análoga podemos decir que son impedimentos de la unión de hecho estable:

1. "Unión de pareja homosexual"
2. "Impubertad"
3. "Relaciones de consanguineidad"
4. "Cualquier otra situación que este considerada como delito, tal como el estupro, violación, secuestro, etc." (Zarifeth Bermúdez, 1995, pp. 77-7980).
5. "Los que no estén en pleno ejercicio de su razón y no posean la plena capacidad jurídica"

8. FORMAS DE DISOLUCION DE LA UNION DE HECHO ESTABLE

Se establece que la unión de hecho estable se puede disolver por:

1. "Mutuo Consentimiento"
2. "Por voluntad unilateral"
3. "Por matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona"
4. "Por muerte de uno de los convivientes" (Zarifeth Bermúdez, 1995, p.80)

El Proyecto del Código de Familia en su art. 73, implanta que la disolución de la unión de hecho estable se puede disolver, por mutuo consentimiento o por la voluntad de uno de ellos, estableciendo a su vez el procedimiento a seguir para lograr la disolución.

Como pudimos notar la unión de hecho estable presenta muchas similitudes con la figura del matrimonio, sin embargo no cuenta con la regulación adecuada, por ser esta figura de la unión de hecho estable, una forma más de constitución de familia, la cual vale mencionar que cada vez es más utilizada por la sociedad actual, por ende es necesaria la pronta aprobación del Código de Familia en Nicaragua, pues el mismo viene a regular dicha figura, respaldando a la misma en los aspectos fundamentales que los del matrimonio.

CAPITULO IV. RELACIONES FAMILIARES QUE SE ESTABLECEN EN RAZÓN DEL MATRIMONIO Y LA UNION DE HECHO ESTABLE

1. LA FILIACIÓN Y LAS RELACIONES MADRE-PADRE-HIJOS (PATRIA POTESTAD)

1.1. Definiciones

Existen diversas definiciones de Filiación de diferentes autores entre las que podemos destacar Puig Brutau (1985) la define “como la relación biológica que une a procreantes y procreados. Es un derecho natural pero también es una realidad reconocida y regulada por el Derecho que presupone la determinación de la paternidad o maternidad” (p.187).

Para Belluscio (1979), define a “Filiación como el vínculo jurídico que une a una persona con sus progenitores” (p.50).

Y no menos importante el concepto de Rivero Hernández (1997,), que la define como “la derivación de la existencia de la procreación o generación por un hombre y una mujer, respecto de sus progenitores” (p.419-420).

Picazo & Gullón (1990), definen a la filiación, como “ aquella condición que se le atribuye a una persona por el hecho de tener a otra u otras, por progenitores suyos, así como a la relación o vínculo que une a la persona con sus dos progenitores o con uno solo” (p.247).

La Filiación sería entonces, aquel vínculo que nace entre los padres e hijos, el cual los viene a unir por la procedencia que tienen los hijos e hijas respecto a los padres; de ella van a surgir una serie de deberes y derechos de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres.

1.2. Importancia

Es de suma importancia estudiar la figura de la Filiación, y de la relación padre-madre e hijos (patria potestad), al ser ambas relaciones familiares derivadas del matrimonio o bien de otras figuras constitutivas tal como lo es la unión de hecho estable. La patria potestad surge a partir de la filiación, por lo tanto es importante establecer el vínculo que nace entre el procreante y los procreados; pues de ellos se derivan una serie de consecuencias jurídicas, es decir un conjunto de derechos y deberes de los padres para con los hijos y los hijos para con los padres, permitiendo una especial posición en el ordenamiento jurídico, y una especial protección del vínculo que nace entre todos los miembros del núcleo familiar.

1.3. Características

- Es personal e influye en la identificación de la persona (a través de los apellidos).
- Es irrenunciable, indisponible (salvo en ciertas acciones judiciales que el ordenamiento jurídico deja a discreción), e imprescriptible.
- Es una manifestación de la protección de la persona misma, su negación puede dar lugar a la indemnización de daños y perjuicios, materiales y morales.
- Su régimen jurídico esta transcendido por el interés público, de donde la autonomía de la voluntad no tiene otro juego que el legalmente prescrito y no tiene acceso a la transacción y el arbitraje (Lacruz Berdejo et al., 1997).

1.4. Clases de filiación

1.4.1. Filiación biológica

La filiación por naturaleza institucionalmente tiene una base biológica, y la ley la considera en principio que el padre/madre es progenitor(a) del hijo. Ésta se subdivide en:

- a. Filiación legítima o matrimonial, que tiene su origen en el matrimonio, ésta corresponde a los hijos de personas unidas entre sí por el vínculo matrimonial.
- b. Filiación ilegítima o extramatrimonial, la que corresponde a hijos de personas no unidas entre sí por el matrimonio (Belluscio, 1999).

1.4.2. Filiación legal

La filiación legal se refiere a la filiación por adopción en la que este acto jurídico sustituye al hecho natural de la generación. La filiación por adopción es puramente formal y social donde lo no biológico y lo funcional tienen un papel eminente que desplaza al natural; son padre y madre no por naturaleza sino los que asumen ese rol de responsabilidad como padres. (Lacruz Berdejo et al., 1997). El Decreto N° 862, la Ley de Adopción, regula todo lo concerniente a la materia.

Sin embargo la Constitución de Nicaragua en su art. 75, establece que “todos los hijos son iguales ante la ley, y no se utilizaran designaciones discriminatorias en materia de filiación. En la legislación común, no tiene ningún valor las disposiciones o clasificaciones que disminuyan o nieguen la igualdad de los hijos”.

Ésta disposición es también respaldada y regulada por los instrumentos internacionales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 17,

num.5; El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su art. 16, establece que “Todo niño sea cual fuera su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia...”; La Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 25, numeral 2, reconoce la igualdad de los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 24, numeral 1 hace mención de lo mismo; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 10, numeral 3.

En fin observamos la existencia de varios instrumentos internacionales que se encargan de velar por el bienestar de los hijos, procurando la igualdad jurídica de los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio ante la ley y por ende ante la sociedad.

1.5. Reconocimiento y legitimación

1.5.1. La Legitimación

Es la institución que se encarga de regular el cambio de la situación jurídica de aquellos hijos que nacieron fuera del matrimonio, mediante la celebración posterior de este por quienes lo engendraron, o bien a los efectos del hijo por el matrimonio de sus padres el cual se celebra posterior a su nacimiento (Meza Gutiérrez, 1999, p.133).

Se encuentra contemplada en los arts. 236 al 243 del Código Civil de Nicaragua. La legitimación deberá de inscribirse en el Registro del Estado Civil de las Personas.

1.5.2. El Reconocimiento

Es el acto jurídico familiar, mediante el cual se reconoce como hijo nacido de uniones libres, el cual puede efectuarse de manera conjunta o separada por los padres en el acto de nacimiento o después, acudiendo al Registro del Estado Civil de las Personas, o bien mediante escritura pública ante Notario público. Contemplado en los art. 222 y siguientes C.

El reconocimiento es un acto jurídico voluntario, personalísimo, es decir propio del padre o madre, no está sujeto a ninguna condición, y es irrevocable (Lacruz Berdejo et al., 1997). El Reconocimiento lo efectúan los progenitores y se presume que lo son las personas que así lo manifiestan, acto que se hace en documento público y que deberá de inscribirse en el Registro del Estado Civil de las Personas (Puig Brutau, 1985).

El Reconocimiento Forzoso, es aquel que realiza el hijo o hija a fin de establecer la filiación como hijo nacido fuera del matrimonio a través de un juicio de investigación de paternidad y maternidad (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990). La investigación de paternidad y maternidad es una acción que se encuentra regulada en los arts.11-16 de la Ley No.623, la cual se aplica para los padres de los hijos, pero tales disposiciones se pueden tomar de manera análoga, para aquellos hijos mayores de edad que quieran tener el reconocimiento de sus padres, por ser este un derecho de los mismos.

1.6. Deberes y derechos de los padres para con los hijos y los hijos para con los padres

a. Velar por los hijos

Este va entrelazado al hecho de tenerlos en su compañía, esto desprende ciertas consecuencias como son: el hijo e hija tendrá el mismo domicilio legal del padre,

este será el responsable frente a terceros por los daños y perjuicios derivados de hechos ilícitos del hijo e hija y el padre tendrá autoridad para designar a un tutor después de su muerte (Belluscio, 1999). Se encuentra regulado en el art. 1 del Decreto 1065, Ley Reguladora de las Relaciones entre madre, padre e hijos.

b. Alimentos

Consiste en la satisfacción de necesidades básicas como lo son manutención, alimentos, vestido, habitación, asistencia médica (Belluscio, 1999).

Su incumplimiento puede ser constitutivo de abandono de familia y de causa de privación de la patria potestad (Lacruz Berdejo et al., 1997). Es decir que es un derecho de los hijos y un deber de los padres de sufragar todas las necesidades básicas de sus hijos e hijas. Derecho y deber que se encuentra regulado en el art. 1, inc. a del Decreto 1065. Regulado por los instrumentos jurídicos internacionales, La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre en su art. 30, establece el deber de los padres de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos; El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 16; La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su art. 30, establece el deber de los padres de asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad.

c. Educación y formación

Los padres tienen la obligación de de asegurar la educación del hijo y derecho a dirigirla. Esto no solo se trata de instrucción y de la formación profesional, sino que también la formación moral, cívica y religiosa. (Lacruz Berdejo et al., 1997).

d. Derecho a un Nombre y a los apellidos del padre y de la madre

La filiación determina los apellidos, es la identificación jurídica de todo individuo. El apellido de los hijos es un patrimonio moral irrenunciable que pertenece al hijo y que a la vez constituye un deber de los padres de ponerles el apellido a sus hijos una vez nacidos, o bien después de nacidos bajo los medios jurídicos necesarios (Puig Peña, 1972). Este derecho e encuentra contemplado en el art. 24, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; La Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 8 establece el derecho a una identidad que poseen los niños y niñas; La Convención Americana sobre Derechos Humanos lo regula en su art. 18. Y por último nuestra legislación nacional regula este derecho en el art.1y 5 de la Ley No. 623, al establecer el derecho que tiene todo niño y niña a un nombre y sus apellidos, siendo a su vez un deber.

e. Tanto los padres como los hijos tienen derecho a todos los derechos que se derivan de la patria potestad, y a su vez tienen todos los deberes que se derivan de la misma.

f. Así como los padres tienen deberes con los hijos, a estos les corresponden deberes hacia ellos como lo son el obedecer a los padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarlos, así como la de contribuir, al levantamiento de cargas de la familia mientras convivan con ella (Lacruz Berdejo et al., 1997).

1.7. Relaciones madre-padre-hijos (patria potestad)

1.7.1. Definiciones

Para autores como Rafael del Pina, la patria potestad es “el conjunto de facultades que se ejercen en relación a las personas y bienes de los sujetos a ella, son el objeto de salvaguardarlas en la medida necesaria, es dirigir y proteger a los hijos”.

La Patria Potestad, es una función social, y un conjunto de poderes que se dirigen al cumplimiento de una serie de deberes y derechos que la ley impone a los progenitores, siendo esta una institución básica, de orden público, la cual desprende su intransmisibilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad (Gullón Ballesteros & Díez Pícaso, 1990).

La patria potestad se determina en relación a elementos tales como la edad y el carácter de la filiación; es por eso que se consideran personas sujetas a la patria potestad o relación madre-padre-hijos a las personas que están por nacer (nasciturus), a los menores de edad, sean estos hijos legítimos, naturales, ilegítimos o no reconocidos, productos de una relación extramatrimonial (Meza Gutiérrez, 1999).

Como ya sabemos el art. 75 Cn., se establece que todos los hijos son iguales ante la ley, y por ende poseen los mismos deberes y derechos. El padre y la madre o a falta de ellos, los abuelos, en el orden que la ley determine y el juez de familia, serán los sujetos activos de la patria potestad, es decir que son ellos los que la ejercen. Contemplada en los arts. 244 al 268C.

1.7.2. Deberes y derechos que nacen a partir de la patria potestad

La Patria Potestad al ser una función o deber, en la que queda centrada la asignación a los padres de familia, la misión protectora, para orientar y dirigirlos en su desarrollo; razón por la cual de tal relación madre-padre-hijos se derivan una serie de derechos y deberes, de los que podemos mencionar (Puig Peña, 1972):

1. El primer deber que tienen los padres para con los hijos es el de la guarda: el padre y madre deben de vigilar, cuidar y tener bajo su potestad a sus hijos no emancipados. Deben de protegerlos frente a cualquier peligro que pueda amenazar su salud física y moral, así como también deben de vigilarlos y

responder por cualquier daño que hayan incurrido sus hijos debido a la falta de vigilancia. También los padres tienen el deber de educar e instruirlos.

2. El padre y la madre tienen la obligación de alimentar debidamente a sus hijos, es decir todo lo indispensable para su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la capacidad económica de la familia. En caso de incumplimiento, determina una pretensión a favor de la madre que por sí y en representación de los hijos e hijas los pueda reclamar; facultad que la Ley 143, le brinda, por ser éste un derecho de todo hijo e hija.

3. A partir del deber de alimentos, surge el deber de instruir y educar a los hijos, siendo además una de las obligaciones que se desprenden de la guarda. Los hijos deben de contar con una formación académica. Dentro de este deber se desprende, el deber de los padres de orientarles la educación religiosa, deben de elegir un establecimiento adecuado para su formación y han de preparar al mismo para el ejercicio de una profesión o industria (p.583-587). Todos estos deberes dependen de la capacidad económica de los padres y de las necesidades de quienes la requieran.

El Decreto 1065, Ley Reguladora de las Relaciones entre Madre-padre e hijos, es su art. 1, establece que corresponde al padre y a la madre el cuidado, crianza y educación de sus hijos menores de edad, lo mismo que la representación de ellos y la administración de sus bienes. El art. 3 establece el deber de los padres de conducir sus relaciones con los hijos preservando la dignidad de estos y las necesidades de su formación integral. El art. 4, párrafo segundo, regula aquellas situaciones en que el hijo viva con solo uno de sus progenitores, a este le va a corresponder tomar todas las decisiones relativas a la dirección de su persona, si se trata de la administración de los bienes se requiere de la autorización judicial, y se deberá oír al otro progenitor. Estos deberes también se encuentran regulados en la Ley N° 623, en su art. 2. El Código de la Niñez y la Adolescencia regula todo lo anteriormente, en los arts. 6, 21, 23, 26 y 46.

Así como los padres tienen un conjunto de deberes para con los hijos de igual manera los hijos tienen deberes para con los padres, de los cuales también se desprenden una serie de derechos para ambos. Puig Peña (1972), menciona algunos:

1. La obediencia: los hijos tienen la obligación de obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, deben de obedecerlos en sus mandatos e indicaciones tanto dentro como fuera del hogar. De este deber de los hijos se desprende el derecho de los padres de corrección y castigo para con los hijos, de manera moderada, todo en beneficio del menor.
2. La reverencia y el respeto: los hijos siempre deben de respetar a sus padres no solo mientras se encuentren bajo la potestad de los padres, sino también cuando hayan salido de ella. El hijo debe siempre de prestarle el acatamiento que el mismo se merece.
3. Prestar alimentos a sus padres: los hijos deben de prestar alimentos a los padres cuando estos lo necesiten y no tengan los medios ni la capacidad para sufragarlos por si solos. Se dará de manera reciproca entre los ascendientes y descendientes (pp.588-591).

Se encuentra regulado en el art. 7 de la Ley N° 143; y en el art. 2 del Decreto N°1065. El Código de la niñez y la adolescencia en sus arts. 54 y 55 comprende los deberes que tienen los hijos para con los padres, contemplando los deberes anteriormente mencionados.

El mismo Código establece todos los derechos que poseen los hijos ante el núcleo familiar y ante la sociedad, por ser estos los miembros más vulnerables de la familia por lo tanto requieren de una mayor preocupación y preocupación del Estado y de todas las Instituciones encargadas de proteger a la familia.

1.7.3. Suspensión, pérdida y extinción de la patria potestad

Si bien es cierto que la patria potestad es irrenunciable, existen supuestos de suspensión o terminación de la misma.

El artículo 268 del Código Civil de Nicaragua establece cuales son las causales de suspensión de la patria potestad:

- a. Por incapacidad del padre o madre, reconocida judicialmente.
- b. Por la ausencia de los mismos con arreglo a los términos del art. 48.
- c. Por sentencia pronunciada contra el padre o madre, que contenga en sus decisiones la interdicción temporal de la patria potestad.

El artículo 269 del Código Civil de Nicaragua establece cuales son las causales de terminación de la patria potestad:

- a. Por muerte del padre o la madre.
- b. Por la emancipación, mayor de edad o declaratoria de edad de los hijos.

Regulada también en los arts. 271 al 282 C:

- a. Cuando el padre o la madre maltrata al hijo habitualmente, o lo pone en peligro de perder su vida o le cause grave daño.
- b. Cuando el padre o la madre ha abandonado al hijo.
- c. Cuando la depravación del padre o madre le hace indigno de ejercer la patria potestad.
- d. Por toda sentencia ejecutoriada que declare al padre o madre culpable de un delito que se castigue con penas que lleven consigo la pérdida de la patria potestad.

Estas causales generan la suspensión o pérdida de la patria potestad, porque el legislador vela siempre por la protección de los menores de edad, por ende cuando éste se encuentre en peligro, o los padres no tienen la capacidad para ejercerla es justo y necesario resguardar a los niños y niñas y entregarlos en manos de quien tenga la capacidad jurídica de hacerlo, o bien cuando ya han alcanzado la mayoría de edad o han sido emancipados, siendo estos el final

anticipado de la patria potestad, pues ya adquieren la plena capacidad jurídica para el ejercicio de sus derechos y el uso y disposición de todos sus bienes.

2. GUARDA

“La tutela y la curatela no son constantes en la evolución histórica ni en el derecho comparado” (Belluscio, 1999, p.337).

La Tutela se aplicaba a los menores impúberes y a las mujeres que no se encontraban casadas. La Curatela se encargaba de velar por los dementes, los pródigos y los menores púberes hasta la edad de los 25 años (Belluscio, 1999).

En Nicaragua tiene un carácter mixto es decir que se puede desempeñar por las familias de quien lo necesita pero también puede ser desempeñado por las instituciones bajo la vigilancia de la autoridad, pues resulta de interés público, es por eso que se requiere de la declaración y del discernimiento de una autoridad judicial competente pero que esta puede existir y producir efectos (Meza Gutiérrez, 1999).

Nuestro Código Civil utiliza el término de Guarda a partir del artículo 298-498, estableciendo en el artículo 296 que “el objeto de la Guarda es el cuidado de la persona y bienes o solamente los bienes de los que no estando bajo la patria potestad son incapaces de gobernar por sí mismos”. Guarda es sinónimo de tutela o curatela de la cual habla el Derecho Romano (Meza Gutiérrez, 1999).

2.1. Definiciones

Tutela se define “como aquella institución que sirve para guardar, protección y representación de los niños y niñas no emancipados y de los incapacitados no

sujetos a la patria potestad y para la administración de su patrimonio” (Lacruz Berdejo et al, 1997, p.616).

Otros autores como Baqueiro & Buenrostro Báez (1990) definen a la tutela

“como aquella institución jurídica cuya función esta confiada a una persona capaz para el cuidado, protección y representación de los menores de edad no sometidos a la patria potestad, ni emancipados y de los mayores de edad incapaces de administrar por sí mismos” (p.237).

Podemos ver como ambos autores establecen un concepto similar uno más específico que otro pero dejando entrever el mismo objeto que tiene la tutela, el cual es el cuidado de la persona y de los bienes de la misma que no estando bajo la patria potestad son considerados incapaces para hacerlo por ellos mismos.

2.2. Características

Belluscio (1979), establece las siguientes características para la figura de la guarda:

- a. Es una función representativa: es en base a la representación que tiene el guarda para con el menor de edad así como para el mayor adulto en los casos en que se amerite, en todos los actos civiles.
- b. Es una potestad subsidiaria: a falta de la patria potestad la excepción se da en los casos de la tutela especial por la oposición de intereses que surge entre padre e hijo o por los bienes que se encuentran excluidos de la administración paterna.
- c. Es un cargo personalísimo: es una función personal propia del tutor o guardador la cual no puede, ser delegada ni transferida a nadie.

d. Es un cargo público: aquella persona que ha sido nombrada tutor o guardador no puede excusarse del cargo sin razón suficiente para ello, la cual debe de ser apreciada por el juez (art. 301C).

e. Está sujeta a control Estatal: así como todas las instituciones familiares, esta figura debe ser custodiada y puesta en vigilancia por aquellas instituciones del estado encargadas del ministerio de los niños y niñas (art. 303 C).

f. Es unipersonal: solo debe ser nombrado a un tutor-guardador el cual debe de ocuparse de todo lo que fue nombrado (Artículo 300C).

2.3. Clases de guarda

El artículo 299 del Código Civil de Nicaragua, enumera quienes son las personas que están sujetas a la guarda:

1. Los menores de edad no declarados mayores.
2. Los locos, imbeciles o dementes, aunque tengan intervalos lucidos.
3. Los sordomudos y ciegos que no tengan la necesaria inteligencia para administrar sus bienes.
4. El que por consecuencia del vicio de embriaguez se halla imposibilitado de administrar sus negocios.
5. Los que estuvieren sufriendo la pena de interdicción civil.

A partir de esto personas sujetas a guarda es que se establecen las clases de guarda y también en base a la forma de establecer, junto con el fin de la misma. Por ende la guarda se clasifica en:

a. Guarda testamentaria

La guarda testamentaria está comprendida en los artículos 306-313 del Código Civil de Nicaragua, los cuales establecen los requisitos, sujetos y procedimientos. Se dice que la guarda testamentaria es aquella que se establece por testamento, en la cual va a surtir efectos hasta después de la muerte del testador (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990)

b. Guarda Legítima

Se encuentra regulada en los artículos 314 al 420 del Código Civil de Nicaragua; estos artículos indican en qué casos cabe la guarda, a quienes corresponde, como se ejercen etc. Esta guarda tiene lugar cuando los padres del menor no nombraron a un tutor o cuando los nombrados no ejercen la tutela o dejan de serlo (Belluscio, 1999, p.346)

b. Guarda legítima

La guarda legítima se confiere mediante ley a falta de la designación del tutor por testamentos, usualmente recae en los parientes de los niños y niñas a los que no les corresponde ejercer la patria potestad y en los parientes del mayor incapacitado, que ya ha salido de la patria potestad (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990). Tienen mayor preferencia los parientes cercanos que los lejanos, o bien en los casos de impedimento, suspensión o pérdida del poder paterno o mater (art. 314 C inc. 1).

c. Guarda judicial, o conocida doctrinalmente como la Guarda Dativa

Esta guarda tiene asidero legal en los artículos 321-323 del Código Civil de Nicaragua, los cuales indican las situaciones y los momentos en que cabe el nombramiento o designación del guardador judicial. La guarda judicial o dativa

tiene cabida cuando no se designo el tutor por testamento y cuando no exista un guardador legitimo o bien cuando se encuentren impedidos temporalmente para desempeñar su cargo (Gutiérrez Meza, 1999).

El artículo 324 al 327C, habla de la guarda judicial del menor adulto. La designación del guardador se efectúa en base a la voluntad del menor de edad, el cual puede acudir ante la Procuraduría de Justicia, Ministerio Público si considera que alguno de los actos de su guardador le resultan perjudiciales (Gutiérrez Meza, 1999).

d. Guarda Especial

La guarda especial se encuentra a partir de los artículos. 328-329 del Código Civil de Nicaragua. El artículo 328 establece 8 incisos los cuales recae la designación de un guardador especial.

e. Guarda de los dementes y Guarda de los sordomudos y ciegos

Este tipo de guarda se encuentra comprendido del artículo 330 al 365 del Código Civil de Nicaragua.

Es en virtud de que tanto los dementes como los ciegos-sordomudos, no tienen la plena capacidad jurídica para contratar y requieren de un representante, que es este caso es el guardador, para que se encargue del cuidado tanto de la persona como de los bienes de ellos.

Ambos guardadores serán nombrados vía judicial y no será antes sin la declaración judicial, o demencia como de aquellos sordomudos –ciegos que no tengan la capacidad necesaria para administrar por sí solos sus bienes.

e. Guarda de los condenados a Interdicción civil

Regulados en los artículos 369-376 del Código Civil de Nicaragua; esta guarda se les confiere a aquellas personas que se encuentran incapacitadas de los derechos civiles pero debe ser en virtud de sentencia pronunciada en la vía criminal ordinaria.

La guarda no va a durar más de lo que dure la interdicción, la cual solo se limitara a la administración de los bienes, y a la representación en juicio del jurado.

f. Guarda de los bienes

Comprendida entre los artículos 377-386 del Código Civil de Nicaragua, se nombra un guardador de los bienes a aquellas personas que se encuentran ausentes y sea declarados como tales a aquellos que constituyeron una herencia que no haya sido aceptada y a nasciturus para proteger los derechos eventuales. En los artículos mencionados se establece los requerimientos necesarios para ser un guardador de bienes, las obligaciones de los guardadores, las prohibiciones de los mismos, así como las facultades que se le otorgan.

g. Guardador Ad-litem

Es aquel guardador que por Decreto N° 181, del 29 de Noviembre de 1979, el cual faculto a las instituciones del Sistema Financiero, Nacional para que pudieran solicitar un guardador ad-litem par que representen a aquellas persona naturales que fueron demandadas y no tuvieron apoderados.

Esta es aplicable en los casos de pleitos por la tutela de los menores de edad, por la suspensión del ejercicio de las relaciones padre-madre-hijos, por divorcio

unilateral, debiendo efectuarse correctamente su publicación en los edictos de ley (Meza Gutiérrez, 1999).

2.4. Deberes y derechos que nacen a partir de la guarda

De la figura de la guarda suscitan varios deberes y derechos tanto para el guardador como para el pupilo, comprendidos y regulados por el Código Civil de Nicaragua, entre los artículos 425 al 479, de los cuales haremos mención de algunos de ellos.

-El guardador tiene el deber de mandar por escrito al Juez de Distrito de su domicilio, la aceptación o denegación del cargo, fundamentando la denegación y será de apreciación del juez. Escrito que deberá contener la promesa de cumplir con los deberes como guardador, debe de expresar los motivos de la guarda, etc. Todo lo actuado debe de ser de conocimiento del niño y niña (art.320 C).

-El guardador tiene el derecho de ejercer en cuanto a la crianza del menor y su educación, todas las facultades que le fueron conferidas al guardador del impúber (art.325 C).

-El guardador tiene el deber de custodiar, cuidar, todo lo concerniente al pupilo y a los bienes del mismo (art.326C).

-El pupilo podrá administrar alguna parte de sus bienes, siempre y cuando cuente con la autorización previa del guardador; bajo su responsabilidad está todo lo actuado por el pupilo en cuanto a la administración de los bienes (art.326 C).

-El pupilo tiene el derecho de solicitar la intervención del Ministerio Público si considera que los actos o alguno de ellos que está efectuando el guardador le resulta perjudicial (art. 327 C).

-Los guardadores tienen el derecho de excusarse para servir el cargo de guardador si cumplen con alguna de las 9 causales expuestas en el art. 402 C.

-Los guardadores deben contar con el discernimiento del juez para ejercer el cargo (art.414 C).

-Los guardadores deben de rendir fianza y hacer inventario de los bienes cada cierto periodo de tiempo, con excepción de los guardadores de hecho (art.414, 430 C).

-El guardador debe de representar o autorizar al pupilo en todos los actos judiciales o extrajudiciales que le conciernen; así como administrar los bienes de la persona en guarda manteniéndolos y conservándolos en perfecto estado, siendo responsable de cualquier perjuicio que ocurra como falta del cumplimiento de sus deberes(art.425 C).

-El guardador como cualquier padre de familia, debe de procurar la educación y los alimentos de sus hijos e hijas, es decir todo lo concerniente al cuidado del mismo (art. 427 C).

-El pupilo debe de respetar al guardador, pues este tiene el derecho de corregirlo y castigarlo moderadamente, todo en beneficio del mismo (art.425 C).

-El guardador tiene el derecho de sufragar el crédito en contra del menor de edad al momento del inventario sino lo hiciera en ese momento pierde el derecho, a menos que demuestre el desconocimiento de la deuda (art.440 C).

-El guardador tiene el deber de encargarse de pagar las deudas que posee el pupilo en fecha exacta, también debe de cobrarle a los deudores del pupilo por medios legales (art. 461 C).

-El guardador no puede realizar actos de disposición de los bienes del menor de edad (art. 466 C).

-El guardador tiene derecho a una retribución sobre los bienes del menor de edad (art. 476 C). El guardador debe de llevar cuenta fiel y documentada de los gastos para la administración en cuanto todo lo referente a la formación del menor (art.482 C).

-El art. 479 C establece que el guardador debe de contar siempre con la autorización judicial y oír al representante del Ministerio Público, a la hora de realizar algún acto o celebrar un contrato en nombre de los menores de edad.

La GUARDA es una figura que viene a proteger a aquellas personas que no están comprendidas dentro de la patria potestad así como el cuidado de los bienes de los mismos, pues el derecho de familia pretende proteger a todos los miembros de la familia en especial a aquellos que más lo necesitan, y que por sus capacidad o por su realidad no pueden conseguir por si solos.

2.5. Modos de terminar la guarda

El artículo 480 C, establece los modos en que la guarda se acaba, el Proyecto del Código de Familia en el art. 375 establece las mismas causales para dar por terminada la guarda, los cuales son:

a. Por muerte del guardador, su remoción o excusación admitida por el juez.

b. Por la muerte de la persona en guarda, por llegar a la mayoría de edad o ser declarado mayor de edad, o por contraer matrimonio.

Al morir el guardador, sus albaceas o sus herederos mayores de edad, deberán de ponerla inmediatamente en conocimiento del juez, el cual deberá de proveer en relación al cuidado del menor de edad y el cuido de sus bienes.

3. LA OBLIGACION DE ALIMENTOS

La familia por ser el núcleo fundamental de toda sociedad es estudiada desde muchos ángulos, uno de ellos es la obligación que poseen los parientes entre si, para sufragar las necesidades más elementales para el crecimiento desarrollo y formación de cada uno de los miembros que la integren; es decir las obligaciones familiares básicas, entre ellas la obligación de alimentos, por ser este un derecho y un deber de cada uno de quienes conformen el núcleo.

La obligación de alimentos tiene su fundamento en el principio de solidaridad familiar; se refiere a el deber de atender a las necesidades básicas de quienes la necesiten, porque por si solos no pueden sufragarlas, y corresponde a los miembros familiares cumplir con estas obligaciones (Gullón Ballesteros & Diez Picaso, 1990).

3.1. Definiciones

“La Deuda de alimentos es la obligación que impone la ley, entre los próximos parientes para que se proporcionen medios de vida cuando concurren determinadas circunstancias” (Puig Brutau, 1985, p. 281).

Meza Gutiérrez (1999), establece que la obligación alimentaria, “es la asistencia técnica, que se da en dinero o en especie apta para la subsistencia, crianza o educación de alguien exigible ya sea por disposiciones de la ley, contrato o testamento”(p.141).

La deuda alimentaria es todo aquello que resulta indispensable para satisfacer las necesidades básicas de cada uno de los miembros de la familia. El art. 2 de la Ley N° 143, Ley de Alimentos, enumera las necesidades básicas:

- a. Alimenticias, propiamente dichas.
- b. Atención medica y medicamentos; comprende asistencia de rehabilitación y educación especial, cuando existan miembros de la familia con discapacidades sin importar la edad.
- c. Vestuario y Habilidadación.
- d. Educación e instrucción.
- e. Culturales y de recreación.

Todos y cada uno de los miembros de la familia deben de contribuir para sufragar los gastos de alimentación de la familia, unos lo harán de manera pecuniaria, y otros con el trabajo del hogar.

3.2. Requisitos o presupuestos de la obligación

La obligación de alimentos se funda en la relación de parentesco que existe entre en el alimentista y alimentante. Dicha obligación tiene un carácter moral, pero en el marco de una relación familiar íntima, la obligación tiene que tener un carácter jurídico, pues el deber alimenticio es una de las consecuencias principales. Por ende para que nazca dicha obligación es necesario que surjan una serie de presupuestos; la Doctora María Auxiliadora Meza enumera alguno de ellos:

- a. Debe de existir un parentesco entre el reclamante y el que tiene el deber de prestarlos.
- b. Quien reclame la necesidad de alimentos debe de encontrarse en una situación tal, que no pueda proveérselos por sí mismo.
- c. Las necesidades del reclamante van a ir en proporción a la capacidad económica de quien las tenga que sufragar.

Al concurrir estos tres supuestos, se hace exigible tal obligación, pues constituye un deber para los padres o quien tenga a su cargo la obligación y un derecho para el reclamante, quien en la mayoría de los casos resulta ser los hijos menores de edad.

3.3. Características

La Doctrina y la Ley N°143, Ley de Alimentos le atribuyen a la obligación alimentaria una serie de características:

-Las únicas fuentes de la obligación son el matrimonio y el parentesco (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

-Es una obligación meramente personal; entre el alimentista y el alimentante debe de existir un vínculo familiar (Puig Brutau, 1985).

-“El derecho de alimentos es imprescriptible, irrenunciable e intransferible; no se puede renunciar a él, ni se puede transmitir a un tercero” (Lacruz Berdejo et al. 1997, p.40).

“El derecho a percibir alimentos no prescribe nunca, aún cuando todos los requisitos para su ejercicio y el alimentista no lo ejercite (art. 13 de la Ley N° 143). Es un derecho que no se puede renunciar al futuro, pero si a las prestaciones vencidas.

-“Recíproca; es un deber y un derecho; es decir tiene la obligación de sufragar las necesidades de quien las necesite, pero también tiene el derecho de exigirlos en caso de que los necesite” (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990, p. 30).

-Es proporcional: los alimentos tienen que ser proporcionales a la capacidad económica de quien los da y a las necesidades de quien los reciba. Es por lo tanto condicional y variable, ya que los alimentos se puede reducir o aumentar de manera proporcional al aumento o disminución tanto de las necesidades del alimentista como de la fortuna del que hubiera de satisfacerlos (Puig Brutau, 1985).

-El obligado posee un derecho de elección; esta característica se refiere a que el obligado puede prestar los alimentos bajo su elección, puede satisfacerlos pagando una pensión que se fije o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho de recibirlos (Puig Brutau, 1985).

-Subsidiaria; en caso de que el obligado no pueda sufragar la deuda alimentaria, se establece a cargo de los parientes más lejanos, solo cuando los cercanos no pueden cumplir con la obligación (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

-Es intransmisible; no es objeto de transacción entre las partes.

-Incompensable: no puede sufragarse con otras concesiones recíprocas, debe de ser pagada con la que fue impuesta por la ley, y por el juez en su caso. Y es inembargable, por lo tanto no es susceptible de embargo (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 1990). El acreedor no puede perseguir los alimentos para hacerse pago con ellos (art 1705, numeral 2 del Código de Procedimiento de Nicaragua y los arts. 286, 287 y 110 del Código de Trabajo de Nicaragua).

-Brinda protección a todos los menores de edad, sin discriminación alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, estado económico o de cualquier índole o de origen nacional (Baca Somarriba, 1986).

Estas características vienen a formar parte de la fundamentación de la obligación alimentaria, pues se basa en las necesidades básicas y elementales de quien las requiere y en las condiciones económicas de quien las tenga que sufragar. La Ley N°143, Ley de Alimentos recoge alguna de las características en sus artículos, en especial en su art. 13; la misma ley establece los medios que se pueden utilizar para hacer valer dicha obligación, por ser considerada como una necesidad de suma importancia para el buen desarrollo y formación de cada uno de los miembros que integran el núcleo familiar.

3.4. Sujetos de la obligación

Los sujetos de la obligación alimentaria son:

-El alimentante; es quien va a sufragar y cumplir con la obligación alimentaria.

-El alimentista; es quien va a recibir los alimentos. Sin embargo por ser una de las características de la obligación la reciprocidad, el alimentista se puede convertir en alimentante y viceversa.

Los sujetos obligados a darse alimentos son todos los parientes en los grados reconocidos por la ley, se extienden sin limitación de grado en línea recta a los parientes consanguíneos y en línea transversal o colateral hasta el cuarto grado; asimismo se incluye a la pareja conyugal y el adoptante hacia el adoptado (Baquero Rojas & Buenrostro Báez, 1990).

Las personas recíprocamente obligadas a darse alimentos, son las siguientes: cónyuges, concubinos, ascendientes y descendientes, sin limitaciones de grado, colaterales, consanguíneas hasta el cuarto grado, adoptante y adoptado (Baños Ramírez, 2008).

La Ley N° 143, Ley de Alimentos en el art. 6, establece que se debe alimentos a:

- a. Los hijos.
- b. Al cónyuge.
- c. Al compañero en unión de hecho estable.

El art. 7 de la misma ley, establece que se “debe alimentar a los ascendientes y descendientes del grado de consanguinidad más cercano, cuando se encuentren en estado de desamparo”. Podemos ver como la ley no desampara a ninguno de los miembros del núcleo familiar, pues resulta un deber y un derecho. El Proyecto del Código de Familia en su art. 275, plantea el mismo orden de prelación para recibir alimentos.

3.5. Las particulares obligaciones de alimentos

Las obligaciones alimentarias particulares son aquellas que se dan entre (Gullón Ballesteros & Diez Picaso, 1990):

- La obligación de alimentos entre cónyuges

Esta obligación de alimentos tiene su fundamento en el deber de socorro y ayuda mutua que suscita como deber del matrimonio o de la unión de hecho estable. Se encuentra regulado en el art. 6 de la Ley N°143, y en el art. 275 del Proyecto del Código de Familia, encontrándose el cónyuge y los convivientes de la unión de

hecho estable en segundo y tercer lugar de la lista de prelación del derecho de alimentos.

- La obligación de alimentos entre los ascendientes y los descendientes

El Código determina en toda la extensión de la línea recta cualquiera que sea el grado de parentesco. La obligación de alimentos existe, no solo entre padres e hijos, sino también entre abuelos y nietos, por ser esta obligación de carácter recíproco. La obligación de alimentos en primera instancia surge por las relaciones paterno filial, entre padres e hijos, por ser esta un derecho de los hijos y un deber de los padres, la cual es independiente de que ostenten o no la patria potestad, y de que si los hijos son nacidos dentro o fuera del matrimonio, en base al principio de igualdad ante la ley. La obligación alimentaria por ser recíproca como mencionamos antes, puede presentarse en sentido inverso y ser así un derecho de los padres frente a los hijos, cuando estos se encuentren en estado de desamparo y no puedan sufragar sus necesidades por si solos. Tiene asidero legal en el art. 7C, y en el art. 275 del Proyecto del Código de familia.

- La obligación de alimentos entre hermanos

Los alimentos entre hermanos solo serán aquellos necesarios para la vida, y son requeridos por cualquier causa que no sea imputable al alimentista. Estos alimentos son reducidos y su constitución se encuentra restringida (1990, p. 57-58). Regulada en el art. 7C, de manera implícita y de manera explícita en el art. 275 del Proyecto del Código de Familia.

3.6. Cesación de alimentos

El artículo 8 de la Ley N°143, establece que la obligación de alimentos cesa cuando:

- Cuando los alimentistas alcanzan la mayoría de edad, a menos que no hayan concluido sus estudios superiores y los estén realizando de manera provechosa.
- Cuando sean declarados mayores de edad por sentencia judicial.
- Emancipados por medio de escritura pública, por matrimonio.
- Cuando sean mayores de 18 años.

Salvo que padezcan de una enfermedad o discapacidad que les impida obtener por si mismos sus medios de subsistencia. El art. 282 del Proyecto del Código de Familia, establece las mismas causales como medios de cesación del deber de alimentos.

En base a las relaciones familiares ya mencionadas en este capítulo, derivadas del matrimonio y de la unión de hecho estable, vemos como son necesarias para el desarrollo y formación del núcleo familiar, las cuales vinculan a cada uno de los miembros de la familia. Es por eso la necesaria protección del Estado para el fortalecimiento de la familia, razón por la cual debe de crear las instituciones optimas para el cuido y protección del núcleo familiar vista de todos los ángulos y aspectos posibles, instituciones que a continuación nos dedicaremos a mencionar.

CAPITULO V. LA PROTECCIÓN INSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES FAMILIARES

Para lograr la eficacia de los derechos de cada uno de los que integran el núcleo familiar es precisa una garantía institucional, ante la que puedan recurrir para hacerlos valer y así procurar que les sean respetados. Es obligación del Estado asumir una actitud más comprometida con la realidad social, es necesario dotar a los gobernados de una institución que está facultada de vigilar los actos de la administración pública.

1. DEFINICIONES

a. Protección

Consiste en la acción de proteger a una persona, para así evitar un peligro (Diccionario Santillana del Español, 1993).

b. Institución

Consiste en un establecimiento u organismos que realiza una razón social, cultural, etc. (Diccionario Santillana de Español, 1993).

Por lo tanto la protección institucional, seria, toda aquella protección que brindan las instituciones, para resguardar a una persona, de un perjuicio o peligro,

aplicando medidas preventivas y restitutivas, cuando ya los derechos se han visto afectados. Estas medidas se aplican siempre en beneficio de las personas y en especial de los más vulnerables.

2. ÓRGANOS INSTITUCIONALES ENCARGADOS DE PROTEGER LAS RELACIONES FAMILIARES DERIVADOS DEL MATRIMONIO Y DE LA UNIÓN DE HECHO ESTABLE

En Nicaragua existen varios órganos institucionales que se encargan de proteger a cada uno de los miembros que integran el núcleo familiar, por ser considerados este como el más importante de todos en la sociedad. Razón por la cual es Estado debe de velar por la protección de la familia, y crear las instancias y órganos necesarios para desempeñar las labores y funciones de protección del núcleo familiar.

2.1. Ministerio de Familia

Como primer órgano protector tenemos al Ministerio de Familia reconocido en el artículo 12 de la Ley 290, Ley de Organización, competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo. Este ministerio es un ente descentralizado, es decir que cuenta con patrimonio propio y personalidad propia, vigilado y tutelado siempre por el Presidente de la República.

El Ministerio está facultado para cumplir con una serie de funciones, las cuales están reguladas en el artículo 29 de la Ley 290.

El ámbito de aplicación del Ministerio vendría a ser toda la población Nicaragüense, en especial los miembros más vulnerables del núcleo familiar que es el caso de los hijos e hijas, pues carecen de la capacidad para protegerse por

sí solos, y a falta de la protección de los padres o de que tengan a cargo el cuidado de los niños y niñas, es necesario de una institución que se encargue de velar y de proteger a aquellos que lo necesiten.

En base a la entrevista que sostuvimos con la Lic. María Lilly Romero del Departamento de Conciliaciones y la Dra. Marisol Navarro Directora de la Dirección General de Restituciones y Garantías de Derechos del Ministerio de Familia, nos plantearon que actualmente el Ministerio de Familia Central cuenta con una organización administrativa diferente, en base al objetivo del fortalecimiento de la Familia, administración que el adjuntamos con un organigrama del Ministerio.

El Ministerio de Familia tiene dos principales estrategias, la de prevención y la de atención:

1. La Estrategia de Prevención: consiste en prevenir que las familias se desintegren pues procuran que la familia se desintegre y que esta sea la principal protección de los niños. Este tipo de estrategia se está queriendo implementar en los casos de los niños que trabajan en las calles, bajo el “Programa Amor”.

2. La Estrategia de Atención: consiste en proteger a aquellos miembros de la familia, en especial a los niños y niñas que han sido víctimas de un suceso, en donde sus derechos se han visto vulnerados. Esta estrategia es el principal objetivo de la Dirección General de Restitución y de Garantía de los Derechos.

Las entrevistadas continúan abordando que el Ministerio de Familia se divide en cuatro Direcciones, y que cada una de ellas cuenta con una serie de funciones determinadas.

La primera dirección sería la Dirección General Promotora Social, solidaria y comunitaria esta dirección consiste, es que el Ministerio coloca a un promotor de la familia en cada barrio vulnerable, el cual promueve el acceso a la Institución en caso de su necesidad, a su vez se encarga el promotor de conocer cuáles son los problemas que más suscitar en los núcleos familiares; todo esto se debe a que esta es una de las direcciones que tiene más acceso con la familia.

La segunda Dirección es la Dirección General del Programa Amor, esta Dirección se divide en 4 puntos:

a. Departamento de niños, trabajadores de la calle; el departamento busca fortalecer el núcleo familiar y así eliminar cualquier estadía de los niños en las calles ya sea trabajando o pidiendo dinero, mediante la reintegración de los mismos en la familia, bajo el cuidado de sus padres o de aquella persona responsable que pueda encargarse de su cuidado.

b. Departamento de derecho a un nombre: Como ya sabíamos y como también nos planteaban la Licenciada Marisol Navarro, toda persona tiene derecho a un nombre, derecho que no es solo acogido por nuestras legislaciones nacionales, sino internacionales. Ese departamento ayuda a que se den las inscripciones de los niños en el Registro del Estado Civil de las Personas, para que así puedan contar con un nombre, apellido y a una nacionalidad.

c. Departamento de atención integral a la niñez, las Licenciadas nos explicaban que este Departamento consiste en la Creación de los CDI; estos CDI son de suma importancia, continúan exponiendo, pues plantean, que el numero de madres solteras que trabajan y que no tienen con quien dejar a sus hijos e hijas, ha acrecentado y es por eso que el Ministerio vio la necesidad de crear estos centros, para que se encarguen del cuidado de alimentación y educación, mientras la mamá o el papá trabajan

d. El último es el Departamento de Adulto Mayor la Licenciada María Lilly, nos hacia consciencia de que actualmente los mayores de la 3era edad cuentan con poco respaldo legal e institucional, razón por la cual el Ministerio de Familia se preocupa por crear con un departamento, que se especializan en estos casos. Para que el adulto mayor no pensionado reciba toda la atención necesaria, y todo lo sustancial para su alimentación y cuidado. También atienden las casas clubes pues no solo se preocupan por el cuidado, sino también por que tengan un poco de recreación y vida social. Actualmente se aprobó la Ley del Adulto Mayor, Ley Nº 720, fue aprobada el seis de mayo del año dos mil diez; esta ley va dirigida a todos aquellos nacionales o nacionalizados mayores de sesenta años, la cual viene a Garantizar al Adulto Mayor, igualdad de oportunidades, calidad de vida y dignidad humana. También pretende establecer, promover y garantizar la aplicación de medidas de prevención y protección por parte del Estado, el Sector Privado y la Sociedad a favor del Adulto Mayor y así poder promover la protección y el bienestar social del Adulto Mayor.

La tercera es la Dirección General de Restitución y Garantía de Derechos, ésta dirección se encarga de aplicar todas las medidas, especiales protectoras que establece el Código de la Niñez y de la Adolescencia.

La Licenciada María Lilly nos explicaba que esta también se dividía en tres departamentos:

a. El Departamento de Conciliaciones el cual está bajo su responsabilidad, ve todo lo relacionado a los temas legales en relación a la familia y los tramites conciliatorios que establece la ley 623 Ley de Responsabilidad Materna y Paterna, en materia de Pensión Alimenticia, Guarda, Relación Madre-Padre e Hijos, y Tutela. Este procedimiento es gratuito y expedito, y que no era condición tener una conciliación en el Ministerio de la Familia para poder acudir a la vía judicial.

La Lic. María Lilly Romero nos explicaba que la población nicaragüense, tiene poco conocimiento de la importancia y validez que tiene el acta de conciliación, siendo esta ejecutable por tener merito ejecutivo y que hasta los mismos técnicos no recibieron las capacitaciones necesarias, y que no saben los beneficios que tiene la realización de la conciliación, por ende es de suma importancia que primero se capacite y se fortalezca a los técnicos con altas técnicas, en cuanto a los conocimientos y que luego se eduque a la población para que entiendan la importancia y validez que conlleva el acta.

b. El departamento de explotación sexual comercial trata y repatriación, este departamento recibe la ayuda del Ministerio Público y de Auxilio Judicial.

c. Departamento de hogares sustitutos y Centros de Atención Especial, la Doctora Marisol Navarro nos informó, que este departamento busca fortalecer el núcleo familiar, y que nunca busca como primera instancia sacar a los menores de edad del núcleo familiar, en caso de problemas graves de convivencia, por eso en primera instancia, nos dijo que buscan ubicarlos bajo la responsabilidad del papá o mamá, o bien de un tío o pariente que pueda sumir con el cuidado del menor de edad, siendo este el recurso familiar. En segunda instancia están las familias temporales, y los hogares sustitutos esto es cuando no hay ningún familiar que asuma la responsabilidad y el cuidado es por eso que se buscan estas familias sustitutas u hogares que se hagan cargo.

La última es la Dirección general de Adopción, ella es la encargada de realizar los trámites o procedimientos de adopción velando por la seguridad de los niños y niñas. Se basan en el Decreto N° 862, Ley de Adopción.

Al preguntarles cuales eran las legislaciones que aplicaban y utilizaban en el Ministerio de la Familia, ambas respondieron:

- Ley N° 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, siendo ésta la Ley Creadora de Ministerio de la Familia y Funciones.

- Ley N° 287, Código de la Niñez y la Adolescencia.
- Ley N° 623 Ley de Responsabilidad Materna y Paterna.
- Convención Internacional sobre los derechos de los niños.
- Anteproyecto del Código de la Familia.
- Decreto N° 862, Ley de Adopción.
- Decreto N° 1065 Ley Reguladora de las Relaciones entre Madre, Padre e Hijos.

Por último preguntamos con que otras Instituciones tienen relación el Ministerio de la Familia, la Licenciada Marisol Navarro y la Licencia María Lilly, expresaron que el Ministerio de la Familia trabaja en conjunto con varias instituciones tanto administrativas como judiciales, en dependencia de la Dirección o departamento de la Institución. Alguna de las Instituciones puede ser:

- Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia (Policía Nacional).
- Auxilio Judicial.
- Ministerio Público.
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración y Extranjería.
- Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia.
- INSS, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
- Registro del Estado Civil de las Personas.
- MINSA, Ministerio de Salud.
- Juzgados de la Familia.

En base a la primera 1era entrevista que sostuvimos con la Lic., Marisol Lilly y la Doctora María Navarro, pudimos concluir que el Ministerio de la Familia es una institución propia y especial para el cuidado del núcleo familiar, pero centran su mayor objetivo en la protección de los menores de edad. Buscando siempre el fortalecimiento de la familia y la unidad de la misma, es por eso que el Ministerio de la Familia, en todos aquellos aspectos que resultan ser vulnerables y perjudiciales y así brindar un servicio desinteresado para la población

nicaragüense y luchar contra cualquier obstáculo que dañe al núcleo esencial de toda la sociedad como lo es la familia.

El día 23 de septiembre del 2010, acudimos a la delegación de Managua del Ministerio de la Familia, siendo una de las 17 delegaciones que existen a nivel nacional, a realizar una entrevista con la Licenciada Marlene del Socorro Mercado, coordinadora del Distrito I del Ministerio de la Familia, la cual trabaja en conjunto con la coordinadora del Distrito V, la Licenciada Yahoska Rivas, sin embargo su presencia no pudo ser posible en la entrevista. La licenciada Marlene Mercado, nos explicó que el Ministerio de la Familia como una instancia administrativa, funge como un recurso de mediación; en donde la madre procede a poner la denuncia referente a la pensión alimenticia y en la guarda de los menores de edad.

El Ministerio de la Familia para tomar las decisión de quien tendrá la guarda de los niños y niñas, debe antes realizar una investigación del entorno del hogar y de la capacidad económica de cada uno de los padres, aparte de la relación que cada uno tenga con sus hijos, velando porque en el hogar no exista maltrato, venta de drogas ni nada ilegal, como suele suceder en la mayoría de los núcleos familiares ubicados en los barrios Rubén Darío y Francisco Días.

En caso de que la madre o el padre sufra de violencia intrafamiliar, o bien si éstos aplican violencia con sus hijos, el Ministerio, no solo se ocupa de proteger a los menores de edad, pues son ellos los que quedan en medio de todo, sino que también realizan terapias y grupos de ayuda para el padres y madres, éstas suelen ser alrededor de 9 sesiones. Se dan con el propósito de ayudar a los padres de familia para que estos puedan integrarse nuevamente al núcleo familiar y así evitar la desintegración del mismo. La Licenciada Mercado abordaba que existen casos en que requieren de la ayuda e intervención de la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, para intervenir en casos fuertes de maltrato o en

casos donde la ubicación de la familia y el afectado es en lugares peligrosos, tal es el caso de la Chureca o Mercado Oriental, donde las condiciones del lugar requieren de un mayor trabajo y cuidado, por lo que mandan a dos oficiales judiciales junto con un representante del Ministerio de la Familia al hogar con problemas, para proteger y sustraer a los más vulnerables de la situación, los cuales suelen ser los menores de edad, a como ya se ha mencionado antes. El Ministerio trabaja con el Distrito 3, 4 y 5 de la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia.

Por último procedimos a preguntarle, ¿cuál consideraba que es el fin y objetivo primordial del Ministerio y que si cree que estos se cumplen actualmente? Por lo que la Lic. Mercado expreso que el Ministerio de la Familia busca proteger a cada uno de los miembros de la familia, pero que su fin es proteger a los menores de edad en especial, por ser estos los más vulnerables del núcleo y por ende los más necesitados de protección, no se pueden proteger por si solos y necesitan de una institución encargada de protegerlos y de velar por ellos, pues buscan fortalecer a la familia y así evitar su desintegración.

La Lic. Mercado expreso, que considera que el Ministerio ha cumplido con la mayoría de sus objetivos, pero que les queda mucho por hacer, y que como institución tienen muchos planes, todo en función del bienestar de las familias nicaragüenses.

2.2. Consejo Nacional de atención y protección integral a la niñez y adolescencia y la Defensoría de las niñas, niños y adolescentes

El Código de la Niñez y la Adolescencia en el art. 62, establece la creación del Consejo Nacional de atención y protección a la niñez y adolescencia, éste estará integrado por organismos gubernamentales y de la sociedad civil. Este Consejo

será regulado por una ley especial, la cual será la Ley N° 351, en la que se determina que el Consejo es el órgano rector para formular y coordinar la ejecución de la política nacional en cuanto a la atención y protección integral a la niñez y adolescencia; además de fungir como institución de articulación entre las instituciones de gobierno y de coordinación con los otros poderes del Estado.

El ámbito de aplicación del Consejo se extiende a todo el territorio nacional, teniendo como objetivos, cumplir con los principios del interés superior del niño y la niña, así como la igualdad y no discriminación; también busca proteger, formar de manera integral los derechos del niño y niña, que se encuentran en las Convenciones Internacionales y en el Código de la Niñez y adolescencia.

Las funciones del Consejo se encuentran reguladas en el art. 7 de la Ley N° 351, las cuales son:

- Articular y coordinar acciones emanadas de la Política Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia.
- Crear la Defensoría como un servicio a nivel nacional, en los municipios y en las Regiones Autónomas. Las Defensorías serán creadas por las Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia, con asesoría y apoyo del Consejo.
- Monitorear, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Política Nacional de Atención Integral de Niñez y Adolescencia a través del Plan de Acción, previa definición de criterios e indicadores para la medición de impactos de las políticas sociales básicas, asistenciales de protección especial y de garantías.
- Proponer los ajustes necesarios que requiera la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia.

-Elaborar informes sobre la situación de la niñez, para presentarlos a nivel nacional e internacional, de acuerdo a los compromisos contraídos por Nicaragua a través de Convenios Internacionales.

-Llevar el registro, control, seguimiento y actualización de las organizaciones y centros gubernamentales y no gubernamentales que ejecutan programas y proyectos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

-Coordinar con las comisiones municipales acciones de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

-Realizar acciones de divulgación y promoción permanente de los derechos de los niños, niñas, y adolescentes, a través de los medios de comunicación social y de otros medios.

-Realizar diagnósticos e investigaciones operativos acerca de la situación de las niñas, niños y adolescentes a fin de orientar los ajustes necesarios a la Política Nacional de Atención Integral a la niñez y adolescencia.

-Velar por la aplicación y cumplimiento de las leyes, Convenios y Acuerdos Internacionales vigentes, a favor de la niñez y adolescencia, por parte de las autoridades competentes y de los organismos no gubernamentales.

-Promover y coordinar programas de capacitación sobre el tema de niñez y adolescencia con instituciones del Estado, organismos no gubernamentales y sociedad en general. En las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur se realizarán en español o en su lengua materna.

-Recibir informes anuales de los organismos no gubernamentales, de conformidad al Artículo 90, inciso b) del Código de la Niñez y la Adolescencia.

-Gestionar y canalizar la obtención de recursos ante la iniciativa privada y la comunidad internacional para la ejecución de programas específicos de la política nacional de atención y protección integral de la niñez y adolescencia.

-Sugerir ante las instancias correspondientes, modificaciones legales al Código de la Niñez y la Adolescencia, leyes y/o disposiciones reglamentarias en función del cumplimiento efectivo de los derechos de niñez y adolescencia.

-Dictar su propio Reglamento Interno.

A su vez el Código de la Niñez y adolescencia en el art. 63, establece la creación de la Defensoría de los niños, niñas y adolescentes, como un servidor del Consejo. La finalidad será la promoción y resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos en el presente código. La organización y administración será reconocida de igual manera en la Ley N° 351.

Las funciones de la Defensoría tienen asidero legal en el art. 14 de la Ley N° 351, son:

-Coordinar y articular los esfuerzos que se dan en las instituciones del Gobierno y la sociedad civil que ejecutan la Política Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia.

-Dar información sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como sobre el procedimiento a utilizar para que estos sean respetados y cumplidos.

-Gestionar y promover la intervención de las autoridades competentes en casos de delitos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.

-Gestionar a favor de las niñas, niños y adolescentes, la prestación de servicios, por parte de la administración pública, a fin de hacer efectivos sus derechos.

-Coordinar acciones con todas las instituciones estatales, entre ellas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil que desarrollan programas y proyectos de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

-Realizar acciones de prevención y promoción sobre los derechos humanos de la niñez y adolescencia en conferencias, foros y medios de comunicación social

Tanto el Consejo como la Defensoría, se encargan de promover, proteger y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran reconocidos en el Código de la Niñez y adolescencia, leyes de familia nacionales y en las convenciones internacionales, tal como la Convención Internacional de los derechos del Niño y niña, a los cuales Nicaragua se encuentra adscrita.

2.3. Ministerio del Trabajo

El Ministerio del Trabajo se encarga de regular todas las relaciones laborales, estableciendo los derechos y deberes mínimos de los trabajadores. En el caso de nuestro estudio, serían todos aquellos derechos y deberes que suscitan de situaciones especiales, es decir, cuando el trabajador es una mujer en estado de gravidez, o cuando es un adolescente o menor de edad.

Dentro de sus disposiciones legales, el Código de Trabajo, se encarga de proteger a la familia desde el punto de vista laboral, relacionado íntimamente con el

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y a su vez con los derechos y deberes que nacen del mismo.

El art. 73 CT, establece el derecho que tienen los trabajadores, a un permiso o licencia con goce de salario en los casos de:

- Fallecimiento del padre, madre, hijos o la cónyuge, compañero(a) en unión de hecho estable, según la ley, hasta 3 días hábiles.

- Por matrimonio, hasta 5 días hábiles consecutivos.

A partir del art.130-137, del Título VI CT, que efectúan los niños, niñas y adolescentes. La edad mínima para contratar es de 14 años, de las cuales el niño, niña y adolescente, realiza actividades productivas o puestas al servicio de orden material, intelectual u otros.

El Estado junto con los empleadores y familiares, deben de proteger al niño, niña y adolescentes para evitar que desempeñen actividades o trabajos que interfieran y perjudiquen la educación, salud, desarrollo físico e intelectual(art. 132 CT y 84 Cn.). En base a esta disposición se prohíbe que desempeñen trabajos insalubres y de peligro moral, tales como los trabajos en las minas, centros nocturnos, etc. Esta prohibición abarca hasta a los menores de 18 años.

El art.134 CT, establece los derechos que los niños, niñas y adolescentes como trabajadores poseen.

El Ministerio de Trabajo vela porque los padres o las instituciones sociales dedicadas a la enseñanza o al cuidado de los niños, niñas o adolescentes desvalidos no exploten económicamente a estos y mucho menos permitir el maltrato de los mismos, castigando cualquier conducta encaminada a estos fines lucrativos (art. 137 CT).

Los niños, niñas y adolescentes se ven en la necesidad de trabajar, por tres razones fundamentales; la primera, es la necesidad de poder mantenerse y sobrevivir pues no cuentan con la ayuda de alguien que se responsabilice por ellos; la segunda razón sería, por la urgencia de ayudar en su hogar, y a sus padres y así ayudar a sufragar los gastos de la familia, siendo la realidad de muchas familias nicaragüenses; la tercera consiste en trabajar por lujo, por tener un ingreso extra del que sus padres le brindan.

El Título VII a partir de los arts. 138-144 del Código de Trabajo, regula todo lo concerniente al trabajo que efectúan las mujeres.

La mujer trabajadora goza de igualdad de derechos laborales que el Código y demás leyes de la materia garantizan, no puede ser objeto de discriminación, por razón de género. El Código atendiendo las situaciones de la mujer y las obligaciones familiares que ésta pueda contraer cuando se es madre soltera, puede reducir la jornada de trabajo, en base a las actividades laborales que desempeña.

A su vez el Código hace especial protección a la mujer que se encuentra en estado de gravidez. Los empleadores no pueden permitir que la mujer embarazada continúe laborando en obras que resulten perjudiciales para la misma o que realice trabajo en jornada nocturna (art.52 CT). El art. 141 CT, establece el derecho que tienen las trabajadoras en estado de gravidez a 4 semanas de descanso antes del parto, y a 8 semanas posteriores y 10 semanas en caso de partos múltiples; con goce del último o mejor salario, sin perjuicio de la asistencia médica que debe de suministrarles las instituciones sociales encargadas de proteger a la maternidad, como lo es el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Los empleadores no podrán despedir, salvo por causa justificada a las trabajadoras en estado de gravidez (art. 144 CT).

El empleador debe de suministrar lugares adecuados para que las trabajadoras den de lactar a los recién nacidos, de quince minutos cada tres horas durante la jornada de trabajo.

El Código de Trabajo, vela y protege a todos los trabajadores visto desde todos los ángulos posibles, dando especial protección a aquellos trabajadores que por su edad o condición, requieren de una mayor protección por parte del Estado y de las instituciones encargadas.

2.4. Ministerio de Salud

El su artículo 1 de la Ley General de Salud, Ley N° 423, expresa tener como objetivo tutelar el derecho que tiene toda persona para disfrutar, conservar y recuperar su salud, en armonía con lo establecido en las disposiciones legales y normas especiales.

El Ministerio de Salud es el órgano competente para aplicar, supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de la Ley 423y su Reglamento N° 001-2003 , así como elaborar, aprobar, aplicar, supervisar y evaluar normas técnicas, formular políticas, planes, programas, proyectos, o manuales e instructivos que serán necesarios para su aplicación.

En relación al usuario, este tiene por su parte la obligación de hacer uso de los servicios que brinda el sistema de salud, así como de velar por la promoción, atención, protección y rehabilitación de los miembros de su familia, cumpliendo con las instrucciones técnicas y las normas de salud obligatorias que dicten las autoridades competentes y de los establecimientos que existen para brindar asistencia médica.

Muchas veces tenemos la posibilidad de asistir a estos Centros Médicos, sin embargo no acudimos a ellos, y no cumplimos con las normas o indicaciones que

se dictan ante cualquier epidemia que se presenta, o inclusive en la puesta de vacunas, y por ende el incumplimiento de un deber no solo para con nosotros mismos sino también como protectores de la familia, y de nuestra comunidad, ya que de ello dependerá de una mejor condición física para nuestra familia.

El Ministerio también dictará medidas y realizará las actividades que sean necesarias para promover una buena alimentación, así como de ejecutar acciones para prevenir la desnutrición y las deficiencias de micro nutrientes de la población en general especialmente en la niñez, mujeres embarazadas y del adulto mayor. Desgraciadamente en este caso nos encontramos con una gran deficiencia por parte de los padres que no nos preocupamos de la alimentación que ingieren nuestros hijos en la edad escolar base fundamental para un mejor desarrollo de su aprendizaje, así mismo en la etapa del embarazo que no ingerimos alimentos que nos permitan nutrir saludablemente al hijo que se lleva en el vientre y se limita a ingerir gustos que uno mismo crea con la idea de satisfacer antojos, de igual manera al llegar a la tercera edad en la que no cuidamos de tener una dieta acorde a las necesidades y de nutrientes que hagan una vida más sana.

En relación a la atención de la mujer y de la niñez y la adolescencia está será de acuerdo al Programa de Atención Integral a la Mujer, la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Salud

En cuanto a lo que se refiere a la rehabilitación de las personas con discapacidad se realizará conforme a la Ley N° 202, Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de oportunidades para las Personas con Discapacidad.

En cuanto al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social es la que se encargará de garantizar a sus cotizantes y beneficiarios el conjunto de prestaciones de servicios de salud, tales como enfermedad común, maternidad, accidente laboral entre otras, dentro de sus prestaciones existen programas de asistencia social que

permite recuperar y rehabilitar la salud perdida por medio de una atención integral del individuo y de la familia en general, por eso es importante que las personas que somos proveedores de nuestra familia, cumplir con el pago de las cotizaciones por lo que permite que tanto nosotros como nuestros hijos disfruten de una atención en los centros de salud.

Para poder ser atendidos, el INSS provee de hospitales, maternidades, clínicas, policlínicas, dispensarios, hogares de ancianos, bancos de sangre, laboratorios, centros de salud, así como instituciones y misiones de cooperación internacional que operan a lo largo del territorio nacional.

Estas disposiciones están reglamentadas de conformidad con el inciso 10 del artículo 150 de la Constitución Política de Nicaragua.

Con relación al Reglamento, que tiene por objeto regular las aplicaciones de la Ley 423, la cual estará dirigida a todos los sectores vulnerables de la población, dándole prioridad a la población materno-infantil, tercera edad y discapacitados, dentro de los cuales se le da también una prioridad importante como la protección integral de los recién nacidos.

Dentro del modelo de atención integral de salud, como lo integran los principios, normas, disposiciones, regímenes, planes, programas, ésta deberá permitir la promoción, protección, recuperación, y rehabilitación de la salud, centrados en la familia, y en la comunidad en general, ya que permitirá mejorar el nivel de vida de la población nicaragüense, dentro de los cuales existen varios objetivos:

- 1). Mejorar las condiciones de salud de la población, generando actividades oportunas, eficaces, de calidad y con calidez, capaces de generar cambios individuales, familiares y comunales, con énfasis en la prevención y promoción de la salud.

- 2). Satisfacer las necesidades de servicios de salud de la población.
- 3). Proteger de epidemias a la población.
- 4). Mejorar la calidad, de los servicios de salud.
- 5). Fortalecer la articulación entre los diferentes integrantes del sector salud, así como la coordinación inter-institucional e intersectorial.

Podríamos definir en su artículo 43, de la Ley 423, como atención de salud al conjunto de acciones realizados por individuos, establecimientos, instituciones u organizaciones públicas, privadas o comunitarias, dirigidos a fomentar el desarrollo sano de las personas, la familia y la comunidad y enfrentar sus principales problemas de salud, dentro del cual como primer nivel de atención lo constituye lo que refiere a las acciones de prevenciones y curaciones a los individuos, familia y la comunidad en general en relación a la salud, existiendo un paquete básico de servicios como lo son entre algunos los más destacados:

- 1). Atención prenatal, parto y puerperio.
- 2). Atención al recién nacido.
- 3). Atención integral a enfermedades prevalentes de la infancia.
- 4). Atención a discapacitados.
- 5). Atención temprana de cáncer cervico y mama.
- 6). Atención en educación sexual y reproductiva y planificación familiar.

En relación a todos los servicios que presta el ministerio de salud, existe la atención de emergencias las cuales son las acciones realizadas por el establecimiento proveedor de servicios de salud, hacia una persona con padecimientos, lesiones o intoxicaciones que involucren riesgo inmediato para su vida hasta lograr la estabilización de sus signos vitales, y la definición del destino inmediato, en beneficio de su salud. En el caso de mujeres embarazadas esto es extensivo al producto en los casos que corresponda.

Habiendo expuesto los términos de referencia de la Ley General de Salud, Ley N° 423 y su Reglamento Decreto N° 00-2003, hemos llegado a la conclusión que si bien existe un sin número de beneficios que nos permitirían tener un acceso a una optima salud, no ejercemos este derecho como tal, y que tampoco colaboramos en la protección a ella.

Así mismo si bien está plasmado en la ley un sin número de prestaciones, no es del conocimiento de la nación nicaragüense, porque no nos preocupamos por conocer de ella, creemos que debería de existir en los centros de salud el cumplimiento, de lo que nos ofrece no solo la ley en mención, sino lo que nuestra Constitución plasma, como es el derecho a un servicio de salud competente que vele por nuestra salud, porque como nicaragüenses que somos debemos de velar por que cada uno de nosotros servidores y servidos colaboremos en ello porque al final y al cabo todos saldremos favorecidos., por el interés de lograr una familia sana, defensores del bienestar común.

2.5. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)

El hombre se ve en la necesidad de protegerse a sí mismo y a su familia de la presencia de problemas vitales ante riesgos infortunios y contingencias de la vida y del trabajo.

El derecho de seguridad social funciona como un servicio público especializado, cuya responsabilidad corresponde al Estado, sin embargo la sociedad debe de estar obligada no solo por el aspecto moral de solidaridad, sino también por aspectos legales a contribuir en las medidas de sus posibilidades, al sostenimiento de los seguros y servicios sociales y del bienestar común para lo cual el Estado crea diversos organismos centrales y autónomos(Decreto No. 974, Ley Orgánica de Seguridad Social, Considerado IV).

El art. 1 del Decreto 974, Ley Orgánica de Seguridad Social, establece que el seguro social obligatorio, como un servicio público de carácter nacional cuyo objetivo es la protección de los trabajadores y sus familias, disposición que es resguardada por el art. 61 de la Constitución, al establecer que el Estado va a garantizar a todos los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo.

El art. 82, núm. 7, definen que los trabajadores tienen “derecho a la seguridad social para la protección integral y medidas de subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y maternidad; y a sus familiares en casos de muerte, en la forma y condiciones que la ley determina”.

Es decir, el derecho de seguridad social viene a proteger al trabajador y a los miembros de su familia, frente a las contingencias de la vida; algunas producidas por accidentes profesionales, enfermedades, y otras producidas por situaciones normales y propias de la vida, como lo es la vejez, la maternidad y la muerte.

Esta protección se brinda para que puedan sufragarse todas las necesidades básicas ante situaciones especiales. El ente encargado de la organización, ejecución y administración del seguro social es el Institución Nicaragüense de Seguridad Social, el cual es un ente autónomo del Estado de duración indefinida, con patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. (Art. 3, Decreto No.974)

Nosotras acudimos al INSS para realizar una entrevista con la Dra. Yadira Madrigal, Directora del Departamento de Prestaciones Económicas de dicha institución, pues tuvimos la necesidad de aclararnos ciertas inquietudes sobre la manera en que esta institución protege a los miembros del núcleo familiar del trabajador que cotiza seguro.

La Doctora respondió que el INSS protege a la familia en varios casos, tales como en las pensiones de invalidez, vejez, sin embargo la más importante surge con el fallecimiento del asegurado; esto sucede cuando el asegurado fallece y deja esposa o compañera de vida e hijos, los cuales estaban bajo su cargo. Ante esta situación se les otorga una pensión, las cuales se clasifican en 3 tipos:

a. Pensión de Viudez: El art. 57 de la Ley de Seguridad Social establece que sus beneficiarios de ésta reside en la esposa o compañera, o bien, el esposo o compañero inválido que hubiese dependido económicamente del causante (Art. 102).

En art. 1, inciso m) del Reglamento de la Ley Orgánica de Seguridad Social, Decreto No. 975, define al cónyuge o esposa como aquella persona que esté a cargo de su marido aún cuando separada de cuerpo. En el caso del varón es el mayor de 60 años o inválido de cualquier edad a cargo de su esposa; a su vez el inciso n) del mismo artículo establece que viuda es la persona que estaba a cargo de su marido aun cuando vivía separada de cuerpo. El viudo es la persona que estaba a cargo de su esposa, mayor de 60 años o inválido de cualquier edad.

En el caso de la compañera de vida se muestran otras circunstancias, a lo cual el art. 1, inciso ñ) del Decreto No. 975 define a la compañera de vida como a la mujer soltera que convivía bajo el mismo techo con el asegurado no casado por un periodo mayor de 5 años continuos o haya tenido hijos.

El mismo inciso presenta otras circunstancias que son parte de la realidad de hoy en día y que se pueden presentar al momento de la muerte del asegurado. En el caso en que existan más de una compañera en iguales condiciones, por lo que el beneficio recaerá a petición de aquella con la cual tenga el mayor número de hijos menores de edad, o en el caso de que el asegurado o su compañera sean casados pero se encuentren separados de cuerpo de sus respectivos cónyuges por un periodo más de 5 años y sin dependencia económica; en esta situación

será beneficiaria la compañera actual pero debe de reunir los requisitos de haber convivido bajo el mismo techo con el asegurado por un periodo mayor de 5 años continuos.

Para tales efectos el art. 102 de la Ley de Seguridad Social establece que la compañera de vida del trabajador se EQUIPARA de la esposa dentro de las condiciones que se mencionan en el Reglamento de Seguridad Social.

Estas circunstancias, comentábamos con la Dra. Madrigal suelen ser muy frecuentes en las familias nicaragüenses, lo que resulta injusto para muchas personas y para otras no, como el caso del Legislador, que planteo tal disposición pues lo que se pretende es proteger y no dejar desvalido a los miembros de la familia y a aquella persona que cuido y convivió con el asegurado tiempo antes de morir.

El art. 65 del R.L.S.S. regula que la viuda del asegurado fallecido tendrá derecho a percibir una pensión equivalente al 50% de la que percibía el causante o de lo que éste percibía por invalidez total.

La pensión de viudez será vitalicia si al fallecer el causante de la viuda hubiese cumplido 45 años o fuera inválida; en caso de ser menor de 45 años, la pensión se le otorga por un plazo máximo de 2 años, a menos que tuviese a su cargo hijos pensionados por ORFANDAD, en ese caso, la pensión se extenderá hasta que se extingan todas las pensiones de orfandad y si para esta fecha la viuda cumplió 60 años se le mantendrá con carácter vitalicio.

La Lic. Madrigal nos explicaba que la viuda aparte del derecho de la pensión de viuda tiene derecho a percibir otras pensiones como la de la vejez en caso de que estuviera cotizando y cumpliera con las cotizaciones para tener derecho a ella a diferencia del hombre viudo. Sin embargo si al cumplir 60 años la viuda no se ha

casado, ni viva en concubinato y no tenga derecho a esta pensión, se le reanudara su derecho a la pensión con carácter vitalicio.

La Dra. Madrigal nos decía que esta disposición de la pensión de viudez por 2 años si no es mayor de 45 años y sino califica en las otras disposiciones planteadas, es porque el Legislador supone que por la edad se puede encontrar trabajo en caso de que no lo tenga y así subsistir por sus propios medios, esto como un medio de superación para la misma.

La pensión de viudez de acuerdo al art.65 del Reglamento de Ley de Seguridad Social se extingue:

- Si la viuda contrae matrimonio.
- Vive en concubinato.
- Lleva vida notoriamente deshonesto.

Como decía antes la Dra., esto se da, porque cuando se supone que la viuda ya cuenta con otros medios para subsistir a la adversidad de la vida y no requiere de la pensión por ende.

En caso del viudo el art.67 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social solo la recibe en caso de que sea invalido o mayor de 60 años sin derecho a pensión de vejez y que sea dependiente de la esposa, si cumple con estos requisitos el esposo tendrá derecho de pensión de viudez, contrario a cómo podemos ver en el caso de la esposa, compañera o viuda.

b. Pensión de Orfandad: Es la pensión que se encarga de proteger a los miembros de la familia, como es el caso de los hijos.

Primero que toda la Dra. Madrigal nos planteaba y a como ya sabíamos que todos los hijos son iguales ante la Ley, sean nacidos dentro o fuera del matrimonio,

siempre y cuando estos sean reconocidos, tendrán igualdad de derecho y de deberes, tal y como lo refleja el art. 75 Cn.

Dentro de los derechos que poseen está: el derecho a la pensión de orfandad, por deceso de la madre o padre los hijos menores de edad de los asegurados por lo menos hasta cumplir los 15 años de edad pero que son prorrogables en situaciones que el Reglamento señale. En caso de que alguno de los hijos sea inválido, la pensión durara lo que dure la invalidez.

El equivalente de la pensión de orfandad que reciban los hijos menores de 15 años o inválidos será del 25% de la pensión que recibía el causante o de la que éste percibiría por invalidez total si hubiera cumplido el requisito de cotización para tener derecho a ella, sin incluir las asignaciones familiares (Art. 68 RLSS).

La ley regula también en caso de que los menores de edad sean huérfanos de madre y padre, por lo que la pensión de la orfandad será el doble. En caso de que ambos padres eran asegurados se otorgaran ambas pensiones sencillas de orfandad, incrementadas en un 50% si resulta mejor a los beneficiarios.

En caso de que los huérfanos pensionados o no sean mayores de 15 años y menores de 21 y aprovechen sus estudios, se les otorgara la pensión de orfandad. Se suspende si pierde un curso hasta que apruebe el curso siguiente (Art. 69RLSS).

Continuaba exponiendo la Dra., que la suma de las pensiones de viudez y orfandad no puede ser mayores o exceder a la pensión de vejez o invalidez que sirvió de base para el cálculo. Al mismo tiempo nos aclaraba que el caso de que los hijos no vivan con el cónyuge sobreviviente, la pensión se les entregara a las personas encargadas del niño o instituciones.

Madrigal nos expresa que los hijos reciben dos beneficios bajo la pensión de orfandad:

- a).Beneficio a la salud: este lo recibirán hasta los doce años.
- b). Beneficio pecuniario: hasta la mayoría de edad, es decir los 18 años, los hijos tendrán derecho a la pensión, salvo que tengan estudios provechosos por lo que se prolongan hasta los 21 años.
- c). La otra pensión que existe es la de los ascendientes y otros descendientes: son beneficiarios de la pensión otros familiares o sobrevivientes que hayan dependido económicamente del asegurado fallecido y que por sí solos no puedan sufragar sus necesidades.

El artículo 72, del RLSS establece que a falta de viuda y huérfanos tendrán derecho a una pensión equivalente a la de orfandad, los ascendientes y otros dependientes que sean mayores de 60 años de edad o inválidos, de cualquier edad que hayan convivido bajo el mismo techo y que hayan dependido económicamente del asegurado fallecido, si solo existe la madre o abuela del asegurado recibirán una pensión equivalente a la viudez.

Tienen que cumplir estos requisitos para optar por la pensión de ascendencia y descendencia, nos decía la Licenciada, requisitos que serán examinados bajo un estudio social del INSS, para verificar lo dicho.

Madrigal también nos hacía mención de ayuda asistencial la cual se encuentra dentro de las prestaciones del seguro de vejez, invalidez e incapacidad permanente total, esta asistencia se da cuando la persona asegurada por su estado físico requiere de la asistencia de otra persona de manera permanente, por lo que se le otorgan una ayuda asistencial equivalente al 20% de la pensión de base. Esta será adicional a la pensión que ya reciba en su caso (artículo 86 RLSS).

Hay que mencionar el derecho de seguridad social que poseen los asegurados en estado de gravidez, derecho de subsidio de descanso regulado en el artículo 94 y siguientes del (RLSS) siempre y cuando los trabajadores acredite 16 cotizaciones semanales dentro de las últimas 39 semanas que preceden a la presunta fecha del parto.

El subsidio será equivalente al 60% de la remuneración semanal promedio y le otorgan durante las 4 semanas anteriores a las 8 posteriores al parto, que serán obligatorios de descansar.

Si pertenece al seguro facultativo integral y facultativo de salud comprende el seguro por maternidad. El facultativo de salud incluye además el subsidio a la lactancia, sigue expresando Madrigal, regulada además por la “Ley de promoción, protección y mantenimiento de la lactancia materna, regulación de la comercialización de sucedáneos de la leche materna”.

Por último nos mencionó los subsidios familiares los cuales se dan para favorecer a la constitución de la familia de trabajadores y a contribuir al sostenimiento y educación de los hijos. Solo son beneficiarios de estos los asegurados del Régimen Obligatorio que devenguen salarios inferiores al monto que el reglamento fije.

Este subsidio se dará como ayuda para los gastos del matrimonio o un subsidio para el sostenimiento de los hijos. Este subsidio se otorga por los hijos menores de 15 años prorrogables si continúan de manera provechosos sus estudios o fueran inválidos (artículos 83 RLSS) este subsidio se dará en pagos mensuales adicionales al sueldo del trabajador asegurado.

Las asignaciones familiares se otorgan dentro de las prestaciones del seguro por invalidez y de vejez, pues éstos seguros pretenden subvenir a las necesidades básicas del incapacitado y de las personas a su cargo (arts.36, 38, 46 y 47 LSS).

En el caso de las prestaciones por seguro de riesgos profesionales, el seguro pretende proteger al trabajador ante las contingencias derivadas de su actividad laboral y la reparación del daño económico que pudiera causarle a él y a su familia. En caso de que a causa del accidente laboral, el trabajador asegurado muera, el Instituto otorgara las pensiones de viudez, orfandad y pensión de ascendientes y descendientes, en caso de que existieran tales derechos (arts. 60 y 70 LSS).

En base a la entrevista que sostuvimos con la Dra. Madrigal y también de acuerdo a la Ley y el Reglamento de Seguridad Social, observamos, que el derecho a la seguridad social y por ende su Institución, vienen a proteger al trabajador y a su familia frente a cualquier contingencia o situación que llega a suscitar en determinado momento de la vida, y así proteger a los más vulnerables y necesitados del núcleo familiar.

2.6. Registro del estado civil de las personas

El Registro del estado civil de las personas, consiste en un catálogo oficial de las personas en donde se hace constar su existencia física desde el nacimiento hasta su fallecimiento y a su vez el estado civil (Meza Gutiérrez 1999).

“Es una institución de derecho de familia en donde se asientan con individualidad particularización los principios relativos al ser humano así como, el nacimiento, matrimonio, muerte y otras circunstancias o actos de importancia” (Meza Gutiérrez, 1999, p.33).

“El estado civil, es la calidad de un individuo en orden a sus relaciones de familia en cuanto le confiere o impone determinados derechos y obligaciones civiles”

Estos hechos y actos deben ser publicados por ser los mismos susceptibles a ser conocidos por la gente, desde que nace hasta que una persona muere, todas las circunstancias que vienen a modificar el Estado Civil, deberá ser inserto. Esta inscripción se realizara en una oficina la cual se denominara como Oficina del Registro del Estado Civil de las Personas; oficina que deberá encontrarse en cada ciudad y pueblo de la República. También existe el registro hospitalario los cuales se ubican en los centros hospitalarios, lugar en donde ocurren los nacimientos. La creación de estas ventanillas de registro se dio por la necesidad de resguardar el derecho a un nombre y a una nacionalidad que asiste a todas las personas por igual, reconocido por las legislaciones nacionales e internacionales, tal es el caso de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en su artículo 7 y en el 13 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Meza Gutiérrez (1999) establece que, las inscripciones en el Registro constituyen un medio de prueba privilegiado como prueba justificada de los actos y hechos asentados en el registro correspondiente al estado civil de las personas.

El artículo 503 del C establece cuales son aquellos actos y hechos que se asentaron en el Registro Civil.

Actos o Hechos que determinan y afectan el estado civil de las personas:

a. Nacimientos

Por ser un hecho vital que viene a determinar la personalidad civil del individuo al nacer. Acto que hace constar la existencia física natural y civil, la cual se extingue con la muerte de la persona (Gutiérrez Meza, 1999). El artículo 173 del Proyecto

del Código de Familia establece que Ministerio de Salud en coordinación con la Dirección del Registro Central del Estado Civil de las personas deberá instalar ventanillas de registro de inscripción en el hospital y centro de salud del país, y así proceder a la inscripción del recién nacido.

b. Matrimonio

Es un acto que viene a modificar. El Estado Civil de la persona y por ser considerado de tanta importancia, es necesaria su inscripción.

El Notario deberá de entregar a cualquiera de los contrayentes un aviso circunstanciado para inscribir en el Registro Civil de las Personas de la manera en que lo hace un Juez Civil (art. 1 Ley 139). El artículo 49 del Proyecto del Código de Familia determina que el acta del matrimonio será asentada en un libro especial, que llevarán los funcionarios, y quienes extenderán el oficio correspondiente por su inscripción en el Registro del estado civil de las personas.

c. Legitimidad

Viene a regular el cambio de las situaciones jurídicas de los hijos nacidos fuera de matrimonio en virtud de la celebración posterior de este por quienes lo engendraron (Meza Gutiérrez, 1999).

Esta se da de tres formas:

- Subsiguiente al matrimonio: se hacen en el mismo acto de la celebración y beneficia a los hijos comunes nacidos antes del matrimonio de sus padres.
- Los que hacen los padres en el Registro al presentarse personalmente con la partida de nacimiento del hijo y acta de matrimonio.
- Por escritura pública, otorgada ante Notario.

d. Reconocimiento de hijos e hijas

Es el acto por medio el cual el padre o madre o en conjunto reconocen al hijo o hija nacido fuera del matrimonio. Este reconocimiento se hace en el acta de nacimiento, en testamento o en instrumento público otorgado ante el Notario (Meza Gutiérrez, 1999) (art. 532 C).

e. Emancipación (art. 534-536 C)

Es el acto jurídico por medio el cual se habilita al niño y niña para que pueda regir su persona y bienes como si fuera mayor de edad. Se da cuando él o la menor haya cumplido 18 años y es de manera voluntaria, cuando proviene del padre o madre de manera expresa ante Notario y por el matrimonio, opera cuando contrae matrimonio, sino ha cumplido 18 años, la emancipación surte efecto hasta que alcance esa edad (Meza Gutiérrez, 1999).

f. Declaración de la mayoría de edad

Declaratoria mediante sentencia dictada por el Juez Civil de Distrito, a solicitud del menor de edad en contra de sus padres. Faculta al menor como si fuera mayor de edad antes de cumplir los 21 años (art. 278C).

g. Disolución del vínculo matrimonial

El artículo 1 de la Ley N1 38 establece cuales son los medios de disolución del vínculo matrimonial, en cualquiera de los casos se deben de registrar por razón de modificación del estado propio de la persona (Meza Gutiérrez, 1999).

h. Defunción o muerte

Por constituir la extinción y desaparición de la existencia física de la persona es necesario que conste en el Registro del Estado Civil de las personas.

i. Adopción

La sentencia de aceptación de la adopción debe de inscribirse para que el adoptado pueda ser inscrito como hijo de los adoptantes.

j. Rectificación y Reposición

La rectificación es la acción y efecto de enmendar los errores que incurren en los Registros. Se da por sentencia dictada por un Juez del Distrito Civil o autorizado ante Notario, con más de diez años de cartular. Se rectifican: nacimientos, defunciones, matrimonios, reposiciones; la reposición de partidas es la resolución que dicta un Juez la cual ordena que la partida de una persona se reponga, por no haber sido encontrado en su asiento registral (Meza Gutiérrez, 1999).

k. Nulidad del matrimonio

La sentencia judicial ordena la cancelación del matrimonio que se celebró pues existen impedimentos que prohíben su celebración.

El Registro del estado civil de las personas es una institución que protege a la familia en el sentido de que gracias al Registro, se reconoce la existencia física y legal de la persona, desde el momento de la inscripción de su nacimiento hasta su muerte; al momento de darle un nombre, apellido y nacionalidad se establece la paternidad y la maternidad entre el hijo nacido y sus padres. El Registro por ende permite que se establezca el vínculo familiar, entre las personas, pues es la

institución encargada de dar legalidad a los actos y hechos que vienen a definir la calidad de un individuo en orden a sus relaciones familiares, en cuanto le confiere o impone determinados derechos y obligaciones civiles. Además como ya mencionamos ante el Registro del estado civil de las personas al poner en orden los hechos o circunstancias que determinan y afectan el estado civil de una persona, estableciendo los vínculos familiares que existen entre las mismas, sino como medio de prueba privilegiado y contiene derechos a futuros como lo es del derecho a la sucesión para así respaldar y proteger a cada uno de los miembros del núcleo familiar.

2.7. Procuraduría especial de la niñez y adolescencia

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se crea para promover la defensa y vigencia de los derechos y libertades inherentes a la naturaleza y dignidad de la persona humana, apoyados por la Sociedad Civil.

En su artículo uno, de la Ley Nº 212, dicta que se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como organismo independiente con personalidad jurídica propia y autonomía funcional administrativa.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estará a cargo de un Procurador y Subprocurador electo por la Asamblea Nacional en la forma establecida en la Constitución Política.

La presente Ley, tiene por objeto la regulación de las funciones, carácter, objetivos, ámbito de competencia y atribuciones del Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, quien en adelante se denominará el Procurador y el Subprocurador.

El fin fundamental de la Procuraduría será coadyuvar para lograr una sociedad más libre y más justa, que posibilite el desarrollo de mejores valores morales y políticos, por lo que deberá auspiciar la educación, la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos en su sentido más amplio; para ello debe promover la participación en todo el territorio nacional

Existen también Procuradurías especiales como la de la Niñez y Adolescencia, de la Mujer, de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Étnicas. Estos Procuradores Especiales que sean nombrados tendrán competencia para conocer, en todo el territorio nacional, sobre casos referidos a la materia o ámbito asignado por el Procurador, a quien están directamente subordinados.

Nos presentamos a las Oficinas de la Procuraduría para La Defensa de los Derechos Humanos ubicadas frente a los Bomberos, y nos entrevistamos con el Lic. Enrique Pérez, Asesor de la Procuraduría Especial de la Niñez y de la Adolescencia.

Iniciamos nuestra conversación solicitándole nos hablara un poco sobre la labor de la Procuraduría Especial de la Niñez, su campo, su labor, sobre las denuncias que más se interponen ante esta instancia y cuáles son sus actores.

Nos explicó que la Procuraduría especial de la Niñez, que está bajo las normas de la Ley 212 y como tal es un coadyuvante ante la sociedad, como colaborador de una sociedad más justa en la defensa de los Derechos Humanos al igual en relación de las demás Instituciones que de alguna u otra forma gobiernan y rigen con normas nuestro país.

Tal es así que cuando nos referimos al caso de las denuncias que se puedan presentar en la institución, como podría ser el caso del Ministerio de la Familia, le preguntábamos cual era su función, a lo que nos respondió que era un

coadyuvante encargado de sensibilizar ante la problemática de situaciones familiares, laborales etc., y colaborador de instituciones que velan también por la familia nicaragüense y retomando la situación de una problemática familiar nos dijo que si bien en el Ministerio hubiese alguna situación en la que se están faltando a los derechos de los niños, de maltrato a las mujeres, o de cualquier otro tipo de violación a los derechos humanos, está acompañada de alguno de los representantes de dicho Ministerio hará las averiguaciones, del caso, y luego presentara un informe detallado de lo que se investigo.

Las investigaciones pueden iniciarse de oficio o a instancia de parte y nos indicó que toda persona puede interponer, ante la sede central, sedes permanentes o provisionales, denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos sin exclusiones de ninguna naturaleza, ya sea de nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, raza, creencia religiosa, credo político.

Existe un procedimiento para realizar las investigaciones y nos explicó cuál era el procedimiento:

Recibida la denuncia y resuelto investigarla, deberá disponerse la investigación inmediata, contando para ello con ocho días a partir de la fecha en que interpuso la misma, al vencer dicho término y según las características del caso, el Procurador dictará una resolución inicial conforme lo dispuesto en Artículo 38 de esta Ley y podrá disponer de la ampliación del término de la investigación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 de la Ley. Asimismo para agilizar la tarea investigativa del Procurador, el funcionario o actividad requerida presentará su informe en un plazo que no debe exceder de las setenta y dos horas. Toda denuncia se presentará por el interesado con indicaciones de su nombre, apellidos, domicilio, explicando el hecho denunciado.

La denuncia podrá hacerse en papel común, por telegrama, fax, cartas y aún verbalmente, levantándose en este último caso, el acta correspondiente. Todas las actuaciones de la Procuraduría serán gratuitas para el interesado y no será necesaria la asistencia legal, sin perjuicio del derecho que tiene el interesado a ser asistido por un abogado. De toda queja se acusará recibo.

El Procurador, una vez realizada la investigación inicial, emitirá una resolución en cualquiera de los siguientes términos:

- 1). Archivar la que resulte sin fundamento o insuficiente para presumir la violación de derechos humanos.
- 2). Indicar que se presume la violación de derechos humanos, profundizándose en las investigaciones.
- 3). Declarar que se comprobó la violación de derechos humanos.

Este Informe, que se pasa en caso como lo mencionamos como ejemplo ante una denuncia o seguimiento que se diera en un caso visto en el Ministerio de la Familia, este serviría como un diagnóstico en cual se hacen recomendaciones a seguir, dejar manifestado si existe alguna violación a algún derecho, y el Ministerio en su caso, tomará las medidas convenientes a realizar, pero no tiene la Defensoría potestad directa para actuar, sirve como sanción moral en relación a la conducta.

Nos decía que las cantidades mayores de denuncias son interpuestas por violencia en las escuelas, juicios de patria potestad, violencia infra familiar, entre otras.

Su ámbito está dirigido para toda la nación, y su sede Central es en Managua, pero están o tienen sus representaciones en todo el Territorio Nacional.

Cabe recalcar que muchos nicaragüenses, no tenemos ni siquiera la idea de que instituciones como éstas, nos podrían ayudar al cumplimiento de derechos que como individuos tenemos, ya sea en el plan familiar afectivo, económico, político, judicial. Somos del criterio que en todas las oficinas, colegios, hospitales, centros de trabajo en general, deberían de existir representantes de la defensoría de los derechos humanos, dando prioridad a la niñez, mujer, y vejez, porque por lo general son los miembros más vulnerables y afectados del núcleo familiar, tanto emocionalmente como físicamente de la sociedad.

2.8. Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia

En 1996, la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, crea el Departamento Nacional de Comisarías de la Mujer y la Niñez.

Durante el período 2001-2006, fue elaborado por la Comisión Nacional de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer, Niñez y Adolescencia, entidad creada en 1998 que aglutina a las principales instituciones y organismos gubernamentales y de la sociedad civil involucrada en el tema. La Comisión surgió a raíz de una serie de talleres y consultas que definió la necesidad de establecer políticas públicas integrales que incluyeran la prevención de hechos, la atención de víctimas y la administración de justicia en los casos de delitos de violencia intrafamiliar y sexuales (Gurdián Sacasa, 2001).

Ante las expresiones de la violencia de género en Nicaragua, la Policía Nacional ha estructurado una respuesta institucional en tres vías complementarias:

1. El establecimiento de servicios especializados a las víctimas de estos delitos.
2. la participación institucional activa en la Comisión Nacional de lucha contra la Violencia hacia la Mujer, Niñez y Adolescencia.

3. La capacitación de las fuerzas en género y violencia de género (Gurdián Sacasa, 2001).

A iniciativa de un grupo de mujeres policías apoyadas por organismos de la sociedad civil y por el Instituto Nicaragüense de la Mujer, la Policía Nacional estableció la primera Comisaría de la Mujer y la Niñez, en un Distrito de Managua. Su finalidad era dar respuesta diferenciada e integral a las demandas y necesidades de las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual.

Las Comisarías brindan atención especializada en las delegaciones policiales. Para garantizar su institucionalidad y sostenibilidad se ha establecido un Departamento Nacional de Comisarías, dependiente de la Dirección de Investigaciones Criminales. La creación de las Comisarías de la Mujer y la Niñez constituye la primera respuesta visible del Estado Nicaragüense, en concertación con la sociedad civil, al problema de la violencia intrafamiliar y sexual. Asimismo, las Comisarías están contribuyendo a una mayor visibilidad del problema ante la sociedad, incluyendo el mejor conocimiento de su magnitud y de los costos para las víctimas y la sociedad (Gurdián Sacasa, 2001).

Las Comisarías atienden más de 6,000 casos anuales, 80% de ellos relacionados directamente con la violencia doméstica, principalmente lesiones, riñas conyugales y familiares, maltrato y amenazas. El 20% restante son casos de delitos sexuales, sobre todo violaciones, estupro, incesto, rapto, acoso sexual y abuso deshonesto, la mayoría de los cuales también son cometidos en el ámbito del hogar. El tercio de los casos denunciados de delitos de violencia intrafamiliar y sexual, mientras que los dos tercios restantes se atienden en las estaciones de Policía, que carecen de las facilidades y la especialización que las Comisarías han alcanzado (Gurdián Sacasa, 2001).

Se requiere que las personas encargadas de tratar este gran fenómeno que afecta a las familias día con día, conozcan sobre él mismo, pues solo de esa manera se podrá enfrentar con éxito. Se requiere además de la preparación y capacitación específica de todo el personal encargado de su manejo, para evitar la llamada victimización secundaria, (la capacitación específica de policías, jueces y personal de salud).

El desconocimiento no permite analizar correctamente la violencia de género, sus causas y consecuencias. De ahí resultan abordajes defectuosos y respuestas institucionales no siempre adecuadas.

Un paso muy importante que se dio en la Policía Nacional de Nicaragua fue la revisión curricular y la incorporación de contenidos de enfoque de género, violencia doméstica y Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia en el pensum académico y en los contenidos curriculares para todos los niveles y sub-sistemas de formación de la Academia de Policía. Así garantizamos una mejor comprensión y cumplimiento de las disposiciones relativas a la atención y tratamiento de las agresiones hacia la mujer y la niñez (Gurdián Sacasa, 2001).

Como podemos ver la Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, es la institución encargada de proteger a la familia, ante el fenómeno de la violencia física y sexual, procurando así el bienestar de todos los miembros que integran el núcleo familiar, y sirviendo de instancia para aquellos que son víctimas de este fenómeno; como mencionamos antes, la Comisaría trabaja en conjunto con el Ministerio de familia, pues sirve de refuerzo frente familias donde se hace constar la violencia y se requiere de fuerzas mayores, para poder introducir al hogar y sustraer del mismo los afectados. Podemos ver entonces que los esfuerzos y funciones que desarrolla la Comisión no son en vano y son de mucha ayuda para la sociedad nicaragüense y sus familias.

3. ÓRGANOS JUDICIALES ENCARGADOS DE PROTEGER LAS RELACIONES FAMILIARES DERIVADAS DEL MATRIMONIO Y DE LA UNIÓN DE HECHO ESTABLE.

3.1. Juzgados de Familia

En Nicaragua así como existen Órganos Institucionales encargados de proteger las relaciones familiares, también existen Órganos e Instancias Judiciales, por las cuales las familias nicaragüenses pueden acudir para hacer valer los derechos que como individuos y como núcleo familiar acun.

Una de estas instancias son los JUZGADOS DE FAMILIA, Juzgados actualmente nuevos, de suma importancia para la protección del núcleo familiar y sus miembros. Teniendo en cuenta la gran importancia de dicho órgano, acudimos a tales instalaciones para tener una entrevista con la Juez María José Araúz Henríquez, del Juzgado Primero de Distrito de Familia, la cual abordó que los Juzgados de Familia son un gran logro y acontecimiento en la historia de Nicaragua, pues son un producto de un programa de la Corte Suprema de Justicia, “Acceso de mujeres a la Justicia”, nació en el año 2004-2005. Producto de esto, se estableció estrategias de cómo acercar la justicia a la población y lograr que sea más eficaz; se hizo un estudio para diagnosticar las necesidades de la población. Además los legisladores buscan la división del Derecho de Familia del Derecho Civil, pues el Derecho de Familia contiene temas más sensibles, temas que requieren una mayor eficacia e individualidad y autonomía legislativa e incluso académica.

En 2007 la Corte Suprema de Justicia por medio de acuerdo de consejo, realizó una convocatoria para que exista un concurso a nivel nacional, para escoger a los Jueces de Familia en base a su nivel académico, marcando un hito en la historia, pues por primera vez se ponía en práctica la carrera judicial. La competencia

consistió en 3 evaluaciones. La primera evaluación se daba de acuerdo a los méritos bajo la experiencia profesional y la docencia, artículos escritos y títulos obtenidos.

La segunda evaluación consistía en un examen de oposición, este se defendía ante un tribunal conformado por 2 magistrados, 1 abogada mujer, 1 abogado hombre y un docente académico. De la suma de la evaluación de mérito y del examen de oposición, en base a los mejores resultados, se procedía a hacer un curso teórico de temas exclusivamente de familia, o en relación con otros temas de género y de la protección de la niñez. De los resultados se escogieron 12 abogados, de los 190 abogados que acudieron al concurso, de los cuales solo los primeros 4 lugares hicieron una pasantía en España, para luego nombrar a los 4, como jueces de familia. La Doctora María José, obtuvo el primer lugar, es por eso que la nombraron como la Juez Primero de Distrito de Familia, nombraron a otra Jueza como la de Segundo de Distrito de Familia, la otra Jueza la ubicaron en Matagalpa, y el último Juez en Chinandega.

En Junio de 2009 empiezan a funcionar los Juzgados de Familia, y reciben una excelente aceptación por parte de los usuarios. Estos Juzgados se caracterizan por la oficiosidad de sus Jueces y por el trabajo en conjunto de los Jueces con un equipo multidisciplinario como los psicólogos, médicos, para evaluar los casos, en donde los involucrados y perjudicados suelen ser los menores de edad.

De esa manera se dio a la mujer el acceso a la justicia de una manera más eficiente, ágil y segura. Nos comentaba la Doctora que actualmente los juzgados, han atendido más de 7700 causas promedio en los dos juzgados. Del 100% de las causas el 35% corresponde a las demandas de alimentos, 34% a las demandas de divorcio, dentro de esta demanda en la mayoría de los casos se resuelve sobre los temas de pensión alimenticia, la relación madre-padre e hijos y la guarda, el restante consiste a otras causas. La mayoría de las demandas de alimentos la

interponen las madres y la mayoría de las demandas de relación madre- padre e hijos la interponen los padres de los niños y niñas.

Los juzgados de familia tienen competencia en todos los juicios referentes a la familia, tales como la pensión alimenticia, guarda, divorcios, relación madre-padre e hijos, adopción, investigación de paternidad, impugnación de paternidad y declaratoria de total desamparo. Por ende la legislación aplicable, son todas las leyes de familia y convenciones e instrumentos internacionales que reconozcan los derechos de familia, niños, niñas y adolescentes.

Los Juzgados de familia guardan relación con otras instituciones, las cuales son:

- Ministerio de Familia.
- Procuraduría Civil.
- Registro del estado civil de las personas.
- Defensoría Pública.
- Ministerio Público.
- Migración y extranjería.

La Doctora María José, expreso que los juzgados de familia protegen a la familia de varias formas, tomando en consideración que la principal función de los Juzgados es la administración de justicia y la aplicación de las leyes especiales de la materia:

-Actuando con oficiosidad y eficacia, hacen que las causas que se remiten en los juzgados se resuelvan de la mejor manera posible, procurando el bienestar de la familia, en especial la de los menores de edad.

-Aplicando las convenciones internacionales, como la Convención de los derechos del niño, protegen a los niños, niñas y adolescentes y que así sus derechos no sean vulnerados.

-Toman en consideración el trabajo técnico y social de los psicólogos y demás profesionales, junto con las investigaciones de campo, y el jurisdiccional, garantizan un mejor y más justo resultado.

-Dando un trámite sumario a todos los juicios de familia, para que sean estos más ágiles y rápidos. El problema, expresaba la jueza, es que solo existen dos jueces en Managua, y la cantidad de causas se eleva a más de 7000, lo cual resulta un poco difícil dar respuesta a todos en la menor brevedad posible.

-Representación de la Niñez ante la Haya, brinda una mayor protección a la niñez no solo a nivel nacional sino que también a nivel internacional, adoptando las medidas especializadas en la materia.

Sin embargo la Doctora también expreso las mejoras que los Juzgados de Familia requieren en la menor brevedad posible:

-Se apruebe el Código de Familia, pues representa un gran avance en la materia y viene a regular temas de familia, que actualmente encuentran un vacío legal. Dando a su vez autonomía legislativa al derecho de familia.

-Que el proceso sea oral, y que no pasen de dos audiencias como máximo, que en la primera audiencia se lea la demanda y que se admita, y que en la segunda audiencia, se presenten las pruebas y se dicte sentencia, excepto en aquellos casos donde por la naturaleza de la causa, sean más de dos audiencias.

-Que se nombraran a tres Jueces de Familia en Managua, y un Juez de Familia en cada Departamento de la República de Nicaragua, para dar una mayor agilidad a las causas y sean más eficientes los juzgados.

-Se le brinden capacitaciones a todo el personal, así como a los abogados litigantes.

-Se trabaje más de oficio, siendo ésta una de las facultades de los jueces de familia y conseguir una mayor eficacia en las causas.

En base a la entrevista que sostuvimos con la Doctora María José Araúz y con la práctica de la materia en cuestión, observamos que, son grandes las cantidades de causas en los juzgados referentes a las relaciones de familia derivadas del matrimonio y de la unión de hecho estable; es por eso que el Estado y las Organizaciones Internacionales (Agencia Española, AECID, organización que se encargo de financiar la creación de los juzgados de familia en Nicaragua) consideraron la necesidad de la creación de los juzgados, en base a la especialidad de su materia y como respuesta a la mujer-madre para el acceso a la justicia, y procurar así el cumplimiento de los derechos y deberes que suscitan a partir de las relaciones familiares, siendo el núcleo familiar de especial interés para el Estado.

3.2. Ministerio Público

EL Ministerio Público tiene como misión ejercer la acción penal en los delitos de acción pública y actuar en aquellos casos que establece la ley en forma objetiva y con absoluto respeto del debido proceso, coordinando y orientando jurídicamente la investigación criminal e impulsando la acción acusatoria en representación de las sociedad y de la víctima del delito, para garantizar el derecho a una correcta, pronta y efectiva administración de la justicia.

El Ministerio Público es la Institución encargada de ejercer la acción penal en los delitos contra de la familia, tipificados en el Título V de la Ley N° 641, Código Penal de Nicaragua, del Capítulo I al IV; el Capítulo I tipifica los delitos contra el estado civil de la persona, que es cuando se celebra el matrimonio siendo ilegal, es decir cuando se celebre el matrimonio y uno de los contrayentes sigue legalmente casado con otra persona diferente, o cuando se emplean engaños y se

da una simulación de la celebración de un matrimonio, la pena de estos delitos será prisión de dos a cuatro años. En caso de que el Notario celebre el matrimonio, no estando legalmente autorizado para ello, o participe en la simulación del matrimonio, tendrá una pena de tres a cinco años de prisión e inhabilitación especial para ejercer el cargo, por el mismo periodo de tiempo.

El Capítulo II, establece los delitos de la alteración de la maternidad y paternidad, estos delitos consisten cuando se de la simulación de un parto, cuando se oculte un hijo, hija u otro descendiente, o cuando se entregue el niño o niña a otra persona, eludiendo los procedimientos de la guarda o adopción, antes estas acciones se dará una pena de seis meses a dos años de prisión. En caso de que se dé la sustitución de un niño o niña, producida en los hospitales, clínicas, etc. tendrá una pena de dos a cinco años.

El Capítulo III, tipifica el delito de incumplimiento de deberes familiares, este delito es el que comúnmente cometen los padres de familia, y consiste cuando el que está obligado a prestar alimentos, mediando resolución provisional o definitiva u obligación contractual, o mediante acuerdo ante cualquier organismo o institución, de manera deliberada omita prestarlos; o quien estando obligado al cuidado o educación de otra persona incumpla o descuide tales deberes. Ante estas acciones se les impondrá una pena de seis a dos años e inhabilitación especial por el mismo periodo de tiempo para ejercer los derechos derivados de la relación padre, madre e hijos, guarda o tutela.

En caso de que los autores del delito a sabiendas de su obligación alimentaria, se pongan en un estado que les impida cumplir con la obligación, por ejemplo: que renuncien al trabajo, que oculten sus bienes por medios fraudulentos, traspase sus bienes a otra persona en plazos anteriores o después al proceso judicial, etc. constituye una agravante, por lo que la pena puede ser de dos a tres años de prisión.

Por ser de suma importancia el deber de alimentos, y por tener un trato especial en los Juicios de Familia y características propias de su naturaleza que la hacen más peculiar, nosotras acudimos al Ministerio Público a desarrollar una entrevista con la licenciada Marisela Rodríguez, siendo una de las encargadas de la “Unidad de Omisión de Alimentos” del Ministerio. La licenciada procedió a explicarnos que la unidad se encarga, del delito de incumplimiento de los deberes alimentarios, (art. 217 Ley N° 641), debido a las causales ya anteriormente mencionadas.

La unidad atiende a toda Managua y sus municipios, el resto de los departamentos lo asumen los fiscales de los juzgados locales. Se creó una unidad especial para este tipo de delitos, porque se pretende dar un trato especial, por constituir un delito único, por la transcendencia que tiene. Los demás delitos contra la familia son llevados por los Juzgados de distrito.

La Licenciada expresaba que el procedimiento que se seguía en el Ministerio consistía, en que primero exista el deber de la obligación y que exista por ende la deuda, luego se interponía la denuncia en el Ministerio, pero que debían de adjuntar el documento donde estaba plasmada la obligación, el cual podía ser: un acta de trámite de mediación, sentencia de pensión o de divorcio, acuerdo extrajudicial, o acuerdos del Ministerio de familia y el acta de nacimiento, donde se hace constar la relación familiar.

Luego se presenta la denuncia, se deben de dar todos los datos correspondientes, para luego proceder a realizar una investigación en base a los datos plasmados, de los resultados, se formula tres situaciones: se realiza la acusación y se da curso al proceso penal, se hace una falta de merito o se da la desestimación de la denuncia. Son muchas las causas que llegan al Ministerio, pero manifestaba la Licenciada Marisela, que la mayoría se resuelven en Mediación.

La legislación que aplican en este tipo de delitos es la Ley N° 641, Código Penal, sin embargo con el Código Penal de 1974, nos decía, que se usaba la Ley N° 143,

Ley de alimentos, art. 17 en especial, como complementaria del Código, pero que actualmente la Ley N° 641, ya hace mención de ello.

El Capítulo IV, trata de los delitos contra las relaciones madre, padre e hijos, tutela y guarda, consiste en la sustracción del menor de edad o persona incapaz del poder de sus padres, tutor, guardador o persona encargada de su custodia y que se retenga en contra de su voluntad, se dará una pena de uno a cuatro años de prisión.

En base a la entrevista que sostuvimos con la licenciada Marisela y a la Ley N° 641, podemos ver como el Ministerio Público, como parte de las instituciones que protegen a la familia, la protege de manera que las acciones que se encuentren tipificadas en la ley mencionada y aun así sean cometidas por los responsables, actuara de tal manera que se haga justicia y en beneficio siempre del perjudicado, para conseguir que los delitos no se queden impunes y los autores del delito se hagan responsables.

CONCLUSIONES

A lo largo de esta investigación jurídica podemos concluir que la familia es el núcleo elemental y fundamental de la sociedad desde el contar de la historia, la cual se constituye por dos grandes instituciones, el matrimonio y la unión de hecho estable, ambas reconocidas por nuestra Constitución; ambas presentan varias similitudes, y de ambas se desprenden las mismas relaciones familiares, reconocidas en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. El Estado debe ser el mayor protector de la familia, de la mano de aquellas instituciones encargadas de velar por la misma, pues se requiere de una supremacía para regular todo lo concerniente a la familia y a las relaciones familiares que se derivan de ésta.

En Nicaragua existen Órganos Institucionales y Jurisdiccionales que se encargan de proteger a la familia y a cada uno de los miembros que la integren. Los órganos institucionales son instancias administrativas, como el Ministerio de la Familia, a la cual pueden recurrir los miembros familiares para resolver de una manera más expedita y gratis los problemas familiares que susciten dentro del núcleo, velando siempre por interés superior de los miembros más vulnerables como lo son los niños y niñas. Sin embargo no cuentan con un procedimiento específico y propio de la institución, sino que se basan en el procedimiento plasmado en la Ley N° 623, en cuanto al trámite de conciliación.

Estas instituciones se encargan de proteger a la familia desde varios ángulos, desde el ámbito familiar, laboral, de salud, de la integridad física y emocional de

los individuos, etc. Los órganos institucionales de nuestra investigación guardan una estrecha relación entre sí, y trabajan en conjunto para brindar resoluciones más justas, y en beneficio de los más perjudicados. Sabemos que los procedimientos que se llevan a cabo en estas instituciones son administrativos, en la mayoría de los casos son trámites de conciliación, y no impiden que las partes recurran a las instancias jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y velar por los intereses de los niños y niñas como principal interés, pero también velando por el bienestar de los demás miembros que integren el núcleo familiar.

Los Órganos Jurisdiccionales de nuestro estudio monográfico, fue el Ministerio Público y los Juzgados de familia. El Ministerio Público se encarga de ejercer la acción penal de aquellos delitos que son de acción pública como lo son los delitos en contra de la familia; este ministerio sigue los procedimientos establecidos en el Código Procesal penal y así velar porque estos delitos no queden impunes; creando sin embargo una Unidad especial en cuanto al delito de incumplimiento de los deberes familiares, como lo es el deber de alimentos, por ser el que mayormente incurren los familiares, y por tener una gran importancia en la formación, crecimiento y desarrollo de aquellos que tienen derecho al mismo, es que se decidió dar una especial protección a este tipo de delito. Cuenta con un procedimiento especial de la institución y de esta unidad, dando curso al proceso penal, siempre y cuando cuente con el merito necesario para que se dé inicio del mismo.

Los Juzgados de Familia es una instancia a la cual pueden acudir, para hacer valer los derechos y deberes que se encuentran regulados en nuestra legislación nacional, y en los instrumentos internacionales a los cuales Nicaragua como Estado se encuentra adscrita. Los Juzgados de Familia son recientes, y solo existen 5 en toda la nación, por lo que es necesario que en todo el territorio de Nicaragua exista por lo menos un juzgado en cada departamento y que se designe mayor número de jueces de familia, dando un trámite sumario y oral a los procedimientos de familia, debido que a falta de estos, las causas que se remiten

a los juzgados son un poco retardadas, referente al termino de resolución de las mismas, y se requiere que sean más expeditas, eficientes, ágiles y oficiosas, debido a la importancia que tienen, y a la especial protección que el Estado y estas instituciones de le deben de dar, por ser temas de familia.

Pudimos ver que tanto los Órganos Institucionales como Jurisdiccionales encargados de proteger al núcleo familiar se relacionan entre sí, velando siempre por el interés superior de los niños y niñas, por ser considerados como los miembros más vulnerables y perjudicados, por lo que el Estado atreves de sus instituciones debe de velar por los mismos y brindando las condiciones necesarias para que sus derechos no se vean violentados y restituirlos en caso de que ya se hayan visto perjudicados. Estos órganos cuentan con una normativa amplia y especial en cuanto a la protección de los menores de edad y de cada uno de los miembros que integran el núcleo familiar, creando programas y proyectos como institución encargados de velar por los derechos y deberes que como individuo perteneciente a una familia se posee. Sin embargo vemos que algunos son solo proyectos y falta su puesta en marcha, falta un cuerpo normativo especial de familia que venga a regular todo lo concerniente a la misma y darle así una mejor y mayor protección, brindando la tan esperada autonomía legislativa del Derecho de Familia.

Esperando que éste trabajo investigativo sirva para todas las familias nicaragüenses, para poder informarse de sus derechos y deberes y así poder hacerlos valer en las instancias e instituciones correspondientes.

RECOMENDACIONES

A lo largo de este trabajo, pudimos observar que existen vacíos legales en cuanto a la regulación de situaciones que en base a la importancia de su naturaleza y de la implicancia de la misma requieren ser regulados, por lo que ambas procedemos a realizar consideraciones, que a nuestro parecer deberían ser tomadas en cuenta para una mayor armonía legal.

1. En primer lugar consideramos que se debe dar la aprobación del CÓDIGO DE FAMILIA; pues éste ya regula la figura de la unión de hecho estable, como una institución de la familia, dedicándole así el Capítulo VII, siendo de suma importancia su regulación, ya que en la actualidad son cada vez más las familias que se forman y constituyen en base a ésta figura y requieren de la protección legal debida por parte del Estado y sus legisladores.

A su vez regula los regímenes económicos matrimoniales, preceptos que en nuestra legislación actual no se regulan, sino que sin mayores explicaciones de los mismos, se deja a interpretación de uno; existiendo así un gran vacío jurídico por parte del legislador.

El Código de Familia viene a derogar todas las leyes especiales de familia, pues en un solo cuerpo legislativo se regula todo lo concerniente a la materia. Por estas razones y por varias más, es necesario su pronta aprobación, para un mayor respaldo legal a todas las familias nicaragüenses.

Viene a establecer un régimen jurídico de la familia y sus integrantes, y comprende las relaciones jurídicas intrafamiliares y las de ésta con terceros y las entidades del sector público y privado vinculado a ella. Las instituciones que regula son las derivadas de las relaciones familiares y los efectos jurídicos que de ellas surjan.

Este Código creará las instituciones especializadas en materia de familia (Juzgados de Familia, Procuraduría de la Familia, adscrita a la Procuraduría General de la República) así como los mecanismos de relaciones entre estas nuevas instituciones y las ya existentes (el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez) para que los procedimientos administrativos y judiciales en materia de familia sean ágiles, expeditos, transparentes, gratuitos y priorizados.

Nicaragua es el Único de país de América Central que no cuenta con un Código o una Ley de Familia que integre todo el andamiaje jurídico en un solo texto para proteger los derechos del núcleo más importante de la sociedad, las familias.

2. Que el Estado y las Instituciones encargadas de proteger a la familia, brinden mayor información a la población nicaragüense de las Leyes de Familia y de las funciones que dichas instituciones cumplen en función de la misma, para que así tengan conocimiento de los medios de protección a los cuales pueden acudir en caso de necesitarlo y también de los derechos y deberes que como núcleo familiar los asiste.

3. Que los Juzgados de Familia, como instancia jurisdiccional en materia de familia, trabajen de manera más oficiosa, expedita y eficiente. Que los juicios sean orales para mayor agilidad de causas y que nombren a más Jueces de Familia, y así se puedan resolver todas las causas que se remiten a los Juzgados de una manera más expedita y eficiente.

4. Que nombren a más jueces de Familia en Managua y por lo menos un juez de familia por cada departamento de la Nación, para que las causas que llegan a los juzgados se resuelvan de una manera más eficiente y expedita, y no exista retardación de justicia.

5. Que el Estado se preocupe por capacitar a todos los trabajadores que integran las instituciones encargadas de proteger a las familias nicaragüenses, para que tengan conocimientos de todas las leyes especiales en la materia, tanto nacionales como internacionales, y brindar así una mejor atención. Y que los proyectos y objetivos propuestos por las mismas instituciones se cumplan en la menor brevedad de tiempo posible, por tratarse de temas tan delicados e importantes, como lo es LA FAMILIA.

LISTA DE REFERENCIAS

OBRAS

Albaladejo, M. (1984). *Curso de Derecho Civil* (Vol. IV). Barcelona: Bosc.

Baca Somarriba, J. (1986). *La pensión alimenticia y la protección de los menores de edad* (1a ed.). Managua: UCA.

Baños Ramírez, B. (2008). *La Familia* (1a ed.). México: Universidad Abierta.

Baqueiro Rojas, E. &. Buenrostro Báez, R. (1990). *Derecho de Familia y Sucesiones* (1a ed.). México: Harla.

Belluscio, A. (1999). *Manual de Derecho de Familia* (3a ed.). Buenos Aires: Depalma.

Fonseca, G. (1968). *Curso de Derecho de Familia* (Vol. Tomo 1). Tegucigalpa: Imprenta López y Cia.

González Castillo, K. (2006). *Derechos y Obligaciones de las parejas de Unión de Hecho Estable*. Managua: UCA.

Gullón Ballesteros, A. &. Díez Pícaso, L. (1990). *Sistemas de Derecho Civil*. Madrid: Tecnos.

Guardián Sacasa, E. (5 de Junio de 2001). Bolsa de Mujeres, Grupo ESE. Recuperado el 7 de Octubre de 2010, de <http://www.grupoese.com.ni/2001/bn/bm/ed58/violencia58.htm>.

Lacruz Berdejo, J. S. (1997). Derecho de Familia. En A. Luna Serrano, *El matrimonio. Celebración y efectos* (4a ed., págs. 63-108). Barcelona: José María Bosch.

López Vargas, R. M. (1995). *Estructuración de Anteproyecto de Código de Familia de Nicaragua*. Managua: UCA.

Meza Barros, R. (1989). *Manual de Derecho de Familia* (1a ed.). Chile: Jurídica de Chile.

Meza Gutiérrez, M. A. (1999). *Personas y Familia*. Managua: Hispamer.

Montero Duhalt, S. (1984). *Derecho de Familia* (1a ed.). México: Porrúa.

Pérez Contreras, M. (2000). *Derecho de los padres y de los hijos* (1a ed.). (C. N. Diputados, Ed.) México: Universidad de México.

Planiol, M. & R. (1946). *Tratado Práctico de Derecho Civil Francés* (1a ed.). La Habana: Cultural.

Puig Brutau, J. (1985). *Fundamentos de Derecho Civil* (Vol. 4). Barcelona: Bosch.

Puig Peña, F. (1972). *Compendio de Derecho Civil Español* (Vol. 2). Pamplona: Aranzadi.

Silva, E. (1998). *Derechos Humanos, Historia, Fundamentos y Textos* (1a ed.). Managua: UPOLI.

Zarifeth Bermúdez, J. (1995). *Régimen Jurídico de la Unión de Hecho Estable en Nicaragua*. Managua: UCA.

LEGISLACIÓN NACIONAL

Constitución de la República de Nicaragua, aprobada el 19 de Noviembre de 1986, publicado el 9 de Enero de 1987.

Código Civil de la República de Nicaragua, Tomo I, aprobado el 1 de Febrero de 1904, publicado en la Gaceta N° 2148 del 5 de Febrero de 1904.

Ley de Adopción, Decreto N° 8, aprobada el 12 de Octubre de 1981, publicada en la Gaceta N° 259, de 14 de Noviembre de 1981.

Ley del Adulto Mayor, Ley N° 720, aprobada el 6 de mayo del 2010, publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 111, del 14 de Junio del 2010.

Ley de Alimentos, Ley N° 143, aprobada el 22 de Enero de 1992, publicada en La Gaceta Diario Oficial del 18 de Febrero de 1992.

Ley para la Disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes, Ley N° 38, aprobada el 28 de Abril de 1988, publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 80 de 29 de Abril de 1988.

Ley General de Salud, Ley N° 423, aprobada el 7 de Mayo del 2002, publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 91 de 17 de Mayo del 2002.

Ley que da mayor utilidad a la Institución del Notariado, Ley N° 139, aprobada el 28 de Noviembre de 1991, publicada en la Gaceta N° 36 de 24 de Febrero de 1992.

Ley de Organización del Consejo Nacional de atención y protección integral a la niñez y la adolescencia y la defensoría de los niños, niñas y adolescentes, Ley N° 351, aprobada el 18 de Mayo del 2000, publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 102, del 31 de Mayo del 2000.

Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley N° 290, aprobada el 1 de Junio de 1998, publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 102 del 3 de Junio de 1998.

Ley de Promoción, protección y mantenimiento de la lactancia materna y regulación de la comercialización de sucedáneos de la leche materna, Ley N° 295, aprobada el 1° de Junio de 1999, publicada en La Gaceta Diario Oficial del 28 de Junio de 1999.

Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Ley N° 212, aprobada el 13 de Diciembre de 1995, publicada en La Gaceta Diario Oficial N°7, del 10 de Enero de 1996.

Ley Reguladora de las Relaciones entre madre, padre e hijos, Decreto N° 1065 aprobada el 24 de Junio de 1982, publicado en La Gaceta Diario Oficial N° 155 de 3 de Junio de 1982.

Ley de Responsabilidad paterna y materna, Ley N° 623, aprobada el 17 de Mayo del 2007, publicada en la Gaceta N° 120 del 26 de Junio del 2007.

Ley de Seguridad Social, Decreto N° 974, aprobada el 2 de Mayo de 1980, publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 49 del 1 de Marzo de 1982.

Ley N° 185, Código del Trabajo de la República de Nicaragua, aprobada el 5 de Septiembre de 1996, publicada en la Gaceta N° 205 del 30 de Octubre de 1996.

Ley N° 287, Código de la Niñez y la adolescencia, aprobada el 12 de Mayo 1998, publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 97 de 27 de Mayo de 1998.

Ley N° 641, Código Penal de la República de Nicaragua, aprobada el 16 de Noviembre del 2007, publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 83-87, el 5, 6,7,8 y 9 de Mayo de 2008.

Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, Decreto N° 975, aprobado el 11 de Febrero de 1982, publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 49, del 1 de Marzo de 1982.

Reglamento a la Ley 290, Ley de Organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo, Decreto N° 71-98, aprobado el 19 de Junio de 1998, publicado en La Gaceta Diario Oficial N° 117 del 24 de Junio de 1998.

Reglamento de la Ley General de Salud, Decreto N° 001-2003, aprobado el 9 de enero del 2003, publicado en La Gaceta Diario Oficial N° 7 y 8 del 10 y 13 de Enero del 2003.

Iniciativa de Ley, Ley Especial de protección a las familias en las que hayan embarazos y partos múltiples, recepcionada el 30 de Mayo del 2007.

Proyecto del Código de Familia de la República de Nicaragua.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

Código de Familia de la República de Costa Rica, aprobado el 21 de Diciembre de 1973, publicado en la Gaceta N° 24, el 5 de Febrero de 1974.

Código de Familia de la República de El Salvador, aprobado el 11 de Octubre de 1993, publicado en la Gaceta N°231 del 13 de Diciembre de 1993.

Código de Familia de la República de Honduras, aprobado el 11 de Mayo de 1984,
publicado en la Gaceta N° 24394 del 16 de Agosto de 1984

Código de Familia de la República de Panamá, aprobado el 17 de Mayo de 1994,
publicado en la Gaceta N° 22591 del 1 de Agosto de 1994.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada el 22 de Noviembre
de 1969, publicada el 18 de Julio de 1978.

Convención sobre los Derechos del niño, aprobada el 20 de Noviembre de 1989,
publicada el 2 de septiembre de 1990.

Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre, 1948.

Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de Diciembre de
1948.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobada el 16 de Diciembre
de 1966, publicado el 23 de Marzo de 1976.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado el
16 de Diciembre de 1966, publicado el 3 de Enero de 1976.

DICCIONARIOS

Cabanellas, G. (2001). Diccionario Jurídico Elemental (15ª ed.). Argentina: Editorial Heliasta.

Diccionario Santillana del Español (1993). (1ª ed.). Madrid: Santillana.

ENTREVISTAS

Araúz Hernández, M. (28 de Septiembre de 2010). La protección institucional de las relaciones derivadas del matrimonio y de la unión de hecho estable en el contexto jurídico Nicaragüense. (Cano Romero, M. G & Romero Arce, M. E Entrevistador) Managua.

Madrigal, Y. (23 de Septiembre de 2010). La protección institucional de las relaciones familiares derivadas del matrimonio y de la unión de hecho estable en el Contexto jurídico Nicaragüense. (Cano Romero, M. G & Romero Arce, M. E Entrevistador) Managua.

Mercado, M. (23 de Septiembre de 2010). La protección institucional de las relaciones familiares derivadas del matrimonio y de la unión de hecho

estable en el Contexto jurídico Nicaragüense. (Cano Romero, M. G & Romero Arce, M. E Entrevistador) Managua.

Romero, M. L., & Navarro, M. (26 de Junio de 2010). La protección institucional de las relaciones familiares derivadas del matrimonio y de la unión de hecho estable en el Contexto jurídico nicaraguense. (M. G. Cano Romero, & M. E. Romero Arce, Entrevistadores)

Pérez, E. (28 de Septiembre de 2010). La protección institucional de las relaciones familiares derivadas del matrimonio y de la unión de hecho estable en el Contexto jurídico Nicaragüense. (Cano Romero, M. G & Romero Arce, M. E Entrevistador) Managua.

Rodríguez, M. (05 de Octubre de 2010). La protección institucional de las relaciones familiares derivadas del matrimonio y de la unión de hecho estable en el Contexto jurídico Nicaragüense. (Romero Arce, M. E Entrevistador) Managua.

ANEXOS

